

crisis



2018
El año de la rebelión

Publicación mensual de la Universidad Centroamericana (UCA) de Managua, Nicaragua.

Su contenido puede ser reproducido total o parcialmente, citando la fuente y enviando copia de lo publicado a la redacción de Managua.

Los artículos que no aparecen firmados son un producto colectivo del equipo de redacción. En los que aparecen firmados la responsabilidad es exclusiva de autores y entrevistados.

Suscripción anual: Ver precios en cupón anexo.

Revista Envío
Apartado Postal A-194
Managua, Nicaragua

Oficinas:
Edificio Nitlapán - 2do. piso
Universidad Centroamericana (UCA)

Teléfono: 2278-2557
email: ihca@envio.org.ni
envio@envio.org.ni

Internet: www.envio.org.ni

Director: Ramiro Martínez, sj

Subdirectora: María Teodora López

Jefa de redacción: María López Vigil

Jefa de traducción de la edición en inglés: Judy Butler

Jefe de redacción de la edición en italiano: Marco Cantarelli

Redactores: María López Vigil, José Luis Rocha, Arturo Grigsby, Juan Hernández Pico, Ismael Moreno, Elaine Freedman

Equipo de traducción al inglés: Judy Butler, Louise Calder, Jennifer Marshal, Julieta Martínez, Gareth Richards

Diseño: Sorah Broder

Diagramación y Suscripciones: Leyla Calero, Jamileth Treminio

Imprenta: Impresiones HELIOS

Distribución: Mario Conde

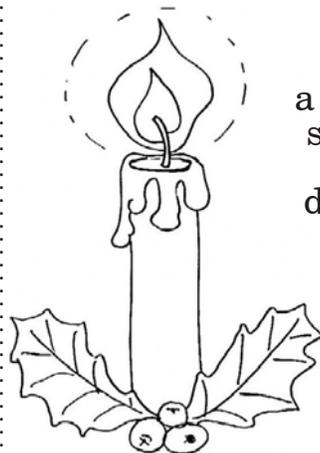
Foto de portada: Cortesía Carlos Herrera Confidencial

NICARAGUA

En vísperas de la rebelión el país estaba en "modo apuesta"	4
Las tres chispas que hicieron estallar el volcán de abril	7
Abril 2018	
La insurrección de la conciencia	10
Un régimen que dispara contra una revolución cívica	15
En resistencia contra la estrategia del terror	22
Después de 100 días de insurrección el mundo ya sabe lo que pasa en Nicaragua	30
Entre la incertidumbre del final y la esperanza del "vamos ganando"	39
Resistencia azul y blanco ante el estado de excepción	44
Preguntas acuciantes al finalizar el año de la rebelión	54

Nuestros deseos en esta Navidad

Dale una luz
a la gente que ha buscado
su libertad contra el cielo
y contra humanos,
dale una luz a este pueblo
que ama tanto vivir
en Nicaragua...



CANCIÓN "DALE UNA LUZ"
DEL DÚO GUARDABARRANCO



Abril 2018 quedará grabado para siempre en la conciencia nacional. La desproporcionada respuesta represiva del régimen contra las primeras protestas ciudadanas hizo estallar el volcán.

Nadie lo presintió, pero eran incontables las razones que anunciaban que ocurriría.

Una década de autoritarismo sin límites convirtió el estallido en una insurrección de la conciencia nacional.

La juventud universitaria la inició y a la juventud la siguió la gente, muchísima gente, cada vez más gente.

Desde hacía años había muertos y terror en las zonas rurales y Managua, León, Masaya, las ciudades del Pacífico, parecían dormidas.

Al despertar, levantaron al país entero.

¿Cómo fue posible? No por una conspiración desde fuera, sino por la mucha lava acumulada dentro. Los volcanes no avisan.

Éste es un resumen, un recuento de lo que hemos escrito este año sobre las vísperas del estallido y sobre las inolvidables jornadas de resistencia cívica y de rebelión popular vividas desde abril.



En vísperas de la rebelión el país estaba en “modo apuesta”

El año 2018 inició, no sin tensión, para el gobierno Ortega-Murillo. Durante todo el año 2017 la economía estaba resintiéndose ya la reducción de la cooperación venezolana. En noviembre se celebraron elecciones municipales.

El colapsado sistema electoral tuvo que recurrir nuevamente a maniobras fraudulentas y la pareja gobernante se enfrentó de nuevo al silencioso rechazo de la población. En el Pacífico y en Occidente, en la Nicaragua más urbana, la gente volvió a repudiar el sistema electoral con una masiva abstención.

En zonas de la Nicaragua campesina la gente rechazó al gobierno votando contra el FSLN. Y en esa otra Nicaragua que es el Caribe las elecciones hicieron estallar la violencia. El Consejo Supremo Electoral tuvo que maquillar todo alterando los resultados en las tres Nicaguas.

“NO ESPEREMOS SITUACIONES EXTREMAS PARA DESPERTAR”

Quince días antes de las elecciones, la Conferencia Episcopal de Nicaragua, logró consenso para emitir un mensaje que iba más allá del evento electoral para, tácitamente, llamar a la reflexión y a la participación sobre lo que estaba ocurriendo en el país y lo que vendrá después.

Los obispos no perdieron palabras en volver a repetir las críticas que hicieron en años anteriores al sistema electoral y al modelo de gobierno. Simplemente, afirmaron que los problemas siguen siendo los mismos y remitieron a los

lectores a lo que dijeron en septiembre de 2012, antes de las elecciones municipales de aquel año, en el comunicado que titularon “Podemos tener una patria mejor” y al documento que le entregaron a Daniel Ortega en mayo de 2014, que titularon “En búsqueda de nuevos horizontes para una Nicaragua mejor”.

En su mensaje de noviembre de 2017 recogían esta cita del Papa Francisco: “En el contexto del mundo actual, en el que la política goza de tan baja estima, nos apremia un estilo de políticos que sirvan a los ciudadanos con misericordia y así desmientan la falacia que presenta a la política como una jauría de depredadores”. Las otras seis citas de Francisco que incluyeron en el texto estaban dedicadas a realzar el valor de la política y el deber de la ciudadanía de participar en la política del país.

Los obispos reconocían lo innegable: “Percibimos y tenemos conciencia de que los tiempos que vivimos no son fáciles, pueden parecer incluso desoladores”. Señalaban que en el país hay “desaliento, desmoralización, pesimismo y desesperanza” y que “el desaliento conduce a refugiarse en sí mismos, a crear una burbuja de autoprotección que termina en una ceguera social”.

Y advertían con preocupación: “No debemos esperar a llegar a situaciones extremas para despertar la conciencia de responsabilidad en las cuestiones políticas y sociales”. Y alentaban a la acción: “Nunca olviden que somos nosotros, el pueblo nicaragüense, quien tendrá la última palabra y podrá decidir el horizonte que el país deba tomar. La fuerza que transforma una sociedad es la del pueblo que, animado

por la justicia y la libertad se edifica en las virtudes del bien común, la verdad y la justicia social. Seamos actores y no espectadores”. En pocos meses Nicaragua viviría la “situación extrema” a la que se referían los obispos.

GOBIERNO Y EMPRESARIOS EN “MODO APUESTA”

Parecía que así acabaría el año: maquillados los resultados electorales y advertida la población, cuando en las meras vísperas de Navidad, y en apenas 72 horas, Washington sentó claramente su posición contra el gobierno de Ortega.

Declaró que las elecciones municipales de noviembre habían estado “manchadas” por irregularidades y violencia (siete muertos, decenas de personas heridas, lesionadas, maltratadas, detenidas, desaparecidas y huyendo en los territorios de la Nicaragua campesina que decidió votar contra el FSLN y en el Caribe).

Al día siguiente, Washington sancionó con la Ley Global Magnitsky al presidente del Poder Electoral, Roberto Rivas Reyes, primer nicaragüense incluido en esa “lista” mundial de maxicorruptos. Y al día siguiente, con respaldo bipartidista -algo inusual en la era Trump-, senadores republicanos y demócratas introdujeron la Nica Act al Senado para su definitiva aprobación. Esta ley afectará los préstamos a Nicaragua de las instituciones financieras multilaterales.

Desde entonces, y con claridad sobre la decidida apuesta de Washington, gobierno y empresarios, estrechos aliados en el modelo corporativo, se colocaron también en “modo apuesta”.

Las relaciones del gobierno de Daniel Ortega con el gobierno de Estados Unidos no habían alcanzado en once años niveles de tanta tensión como los de finales de 2017. La alianza Ortega-COSEP no había estado nunca tan en vilo. Un balde de agua fría cayó sobre quienes desde el poder gubernamental y empresarial se habían pasado todo ese año 2017 insistiendo en que la crisis con Washington era “administrable”.

WARNING:

PETRÓLEOS DE VENEZUELA (PDVSA)

La profundización de la crisis política y económica venezolana comenzó a repercutir visiblemente en Nicaragua desde 2017. Sin recibir de Caracas petróleo ni en las mismas cantidades ni a precios concesionales, y con las sanciones estadounidenses contra la estatal petrolera PDVSA, por fraude y lavado de dinero, los lucrativos negocios de Albanisa (ALBA de Nicaragua S.A) se vieron en problemas.

El temor tocó al sistema financiero nicaragüense. En septiembre de 2017 el gobierno de Estados Unidos advirtió a los bancos nicaragüenses que si tenían relaciones financieras con Albanisa podrían ser también sancionados. Desde entonces, todo el dinero de los negocios del consorcio Albanisa, que estaba depositado en tres bancos del país salió de sus arcas y entró a las del BANCORP (Banco Corporativo), también propiedad de Albanisa hasta la advertencia de Estados Unidos, cuando el gobierno cambió aceleradamente la composición de su consejo directivo para desvincularlo del consorcio. El trasiego de dinero fue enorme: según datos oficiales, en 2017 los depósitos en Bancorp se incrementaron en un 236.5% y sólo en diciembre de 2017 ingresaron a sus arcas casi medio millón de dólares diarios, incluidos los días de fiesta.

Además de los problemas financieros derivados del temor a las sanciones, también se estaban viendo afectadas en 2017 las exportaciones que grandes y medianos empresarios nicaragüenses hacían a Venezuela (carne, lácteos, café, tabaco...)

Diez años antes, desde 2007, cuando iniciaron mayores relaciones comerciales con Caracas, y porque Nicaragua iba a pagar parte del petróleo con productos, el gobierno determinó que todo lo que se exportara a Caracas se hiciera a través de la empresa Albalinisa (ALBA Alimentos), uno de los muchos negocios que coordinaba Albanisa, cuyo vicepresidente Francisco López, también tesorero del partido de gobierno, se vería sancionado meses después por la Ley Magnitisky.

De convertirse Venezuela en el segundo mercado para las exportaciones nicaragüenses, desde octubre de 2017 las exportaciones disminuyeron y al iniciar 2018 estaban ya en cero. Ningún empresario nica quería correr el riesgo de aparecer vinculado a la sancionada PDVSA.

LA APUESTA DE WASHINGTON

Desde hacía ya tiempo Washington tenía en la mira al gobierno de Ortega por su obvio déficit democrático (fraudes electorales y total control de Ortega de las instituciones, incluidas las militares). En la mira estaba también nuestro país por las estrechas relaciones de Ortega con la Rusia de Putin.

Antes de abril, la apuesta de Washington era erosionar a Ortega y para lograrlo, fracturar su alianza con la élite empresarial, su principal soporte al faltar Venezuela. Esa apuesta la combinaban con la del secretario general de la OEA, Luis Almagro, quien apostaba a que Ortega cumpliría con el acuerdo de inicios de 2017 con la OEA y terminara aceptando una transformación profunda del sistema elec-

toral nicaragüense para lograr elecciones presidenciales transparentes en el año 2021. Al iniciar 2018, Washington parecía tener más firmeza y más prisa en conseguir elecciones no fraudulentas que Almagro, hasta entonces complaciente con Ortega.

Al presentar en diciembre de 2017 al Senado la propuesta de ley Nica Act fueron muy significativas las palabras del respetado senador demócrata Patrick Leahy, quien dijo que la intención de la ley era “enviar un mensaje no sólo al gobierno nicaragüense, también a la comunidad empresarial nicaragüense. Y el mensaje es que la corrupción y la impunidad tienen un precio”.

LA APUESTA DEL EMPRESARIADO

Ante la cascada de señales que envió Washington al finalizar el año 2017 la reacción del gobierno no fue otra que el silencio. ¿Desconcierto, cautela, falta de asesoría confiable y capaz?

Tampoco la comunidad empresarial aliada de Ortega supo cómo responder. Más claros que nunca de que Washington parecía decidido a acorralar a Ortega, temieron que en las listas de sancionables apareciera alguno de sus nombres.

A pesar de ese temor, todavía al iniciar 2018 grandes empresarios aliados de Ortega continuaban cabildeando en Washington presentando a los congresistas una “narrativa” positiva: Nicaragua mantenía un modelo de estrecha alianza con la empresa privada y esto se había traducido en estabilidad y en crecimiento económico. Desestabilizar Nicaragua con sanciones sólo perjudicaría los logros económicos y promovería más emigración. Aunque cabildeaban aparentando tranquilidad, los empresarios estaban nerviosos.

La élite empresarial inició 2018 aspirando a ser interlocutor clave en la discusión sobre la reforma del sistema electoral que iba a hacer la OEA, primer paso para iniciar un cambio en la ya frágil situación política nacional. Su apuesta era lograr ese protagonismo, tanto en Washington como en Managua.

LA APUESTA DE ORTEGA

Antes del estallido de abril, Ortega parecía apostar a la insignificancia de Nicaragua, considerando que las sanciones políticas y económicas de Estados Unidos tardarían en llegar y no tendrían tanto efecto en el clima de inversiones. Confiaba en que las ventajas de invertir en Nicaragua, por el bajo costo de la mano de obra y de la tierra, así como por la mayor seguridad ciudadana comparada con la inseguridad y violencia del resto de Centroamérica, compensarían con creces el riesgo político en el que su modelo estaba entrando.

Aunque la apuesta de Ortega hubiera estado basada en un análisis correcto, el cese de los flujos de la cooperación venezolana y la reducción del gasto que ya había tenido que hacer su gobierno auguraba un difícil 2018, con un aumento del desempleo y una reducción de los ingresos del extenso sector informal, en el que han sobrevivido en la década orteguista 8 de cada 10 nicaragüenses. Aún así, en el cálculo de Ortega el descontento popular podría mediatizarse con algunos programas sociales.

2017 concluyó y 2018 inició con las mismas incertidumbres. Aún en marzo altos funcionarios del gobierno de Estados Unidos no dejaban de hablar de las “dictaduras” del continente, pero sólo mencionaban a Cuba y a Venezuela.

Y ya en marzo era evidente, sacando cuentas, que 2018 sería un año de “vacas flacas”. En esa situación, a Ortega no le quedaba más remedio que ajustar financieramente su modelo para conseguir su objetivo: seguir en el poder hasta 2021... y “siempre más allá”, una de sus consignas. Entre todos, el ajuste financiero más urgente era impedir la insolvencia anunciada de la Seguridad Social.

En este “modo apuesta” llegaron a abril los dos factores de poder: el régimen y la clase empresarial. Todos contaban con que la apuesta de la población sería continuar aguantando y acomodándose a la realidad de toda una década...



Las tres chispas que hicieron estallar el volcán de abril

La insurrección de abril fue precedida por tres hechos provocados por el propio gobierno. Acostumbrados durante una década a abusar de su poder absoluto sin mayor reacción, el régimen se convirtió en el principal desestabilizador de su modelo.

EN LA MIRA DEL GOBIERNO, LAS REDES SOCIALES

El 12 de marzo la Vicepresidenta Rosario Murillo anunció que pediría al Poder Legislativo que realizara un “gran debate nacional” porque “podemos estar siendo influenciados negativamente” por las redes sociales. El anuncio se entendió como una amenaza de control y censura en un espacio aún fuera del control gubernamental.

Fue la juventud la que se preocupó más, pero no salió a las calles a protestar. Tal vez no lo hizo porque pasaban los días y nadie terminaba de aclarar cómo el gobierno ejercería el control que anunciaba.

La juventud que protagonizó el estallido de abril llevaba ya años “viviendo” en las redes sociales. Nicaragua se conectó tarde al Internet, hasta en 1994, y el uso de la red global tuvo un avance muy lento durante muchos años. Y hasta hoy, a pesar del crecimiento vertiginoso experimentado en los últimos cuatro años, Nicaragua es el país menos interconectado de Centroamérica y la brecha entre quienes en Nicaragua acceden al Internet y quienes se quedan fuera es la más amplia de la región. En junio de 2008 ENITEL (Empresa Nicaragüense de Telecomunicaciones)

comenzó a ofrecer la conexión a Internet vía teléfono celular en Managua. Desde entonces la brecha tecnológica comenzó a cerrarse.

El boom de las redes sociales agarró mayor velocidad en 2014, cuando el gobierno captó que era importante “enganchar” a la juventud a esa herramienta y puso en marcha la “estrategia de comunicación virtual en parques”. Consistió en instalar wi-fi libre y gratuito en los parques, primero en los de Managua y poco a poco en los de las principales cabeceras municipales. El proyecto resultó inmensamente popular, por ser mayoritaria la cantidad de gente, especialmente jóvenes, que tenían teléfono celular, pero no podían pagar el Internet en sus casas.

LA REDES SOCIALES: UN BOOMERANG INESPERADO

El proyecto del wi-fi en los parques no era inocente. No sólo buscaba crear un país interconectado de forma gratuita. También quería “entretener” a la juventud para impedir que se vieran atraídos a participar en cualquier protesta social.

No había olvidado el gobierno lo ocurrido en junio de 2013, cuando fue la primera vez en que las redes sociales - entonces incipientes-, con la etiqueta #OcupaINSS movilizaron a centenares de jóvenes universitarios de Managua a apoyar, en las calles y durante una semana, la protesta de un grupo de ancianos y ancianas, que no habiendo podido cotizar las semanas que establece la ley, y en representación de miles de ancianos en la misma situación, reclamaban al INSS

(Instituto Nicaragüense de Seguridad Social) una pensión reducida. La protesta fue pacífica y el número de jóvenes que se unían a ella crecía día tras día. El gobierno decidió sofocarla. Y al amanecer el 22 de junio reprimió a la juventud con extrema violencia valiéndose de sus fuerzas de choque. Dos días antes el diputado oficialista Gustavo Porras calificó la protesta de la juventud como “una conspiración de la derecha”. Unos días después la juventud se replegó y no volvió a las calles.

La chispa que encendió OcupaINSS no se apagó... OcupaINSS fue el antecedente del estallido juvenil de abril de 2018 y tuvo varias similitudes: jóvenes de Managua defendiendo a ancianos, jóvenes universitarios convocados por las redes sociales, un régimen que responde con una represión violenta... La variable fue que los jóvenes de abril ya estaban más familiarizados con las redes sociales.

Si en junio de 2013 fueron los teléfonos inteligentes de los universitarios con más capacidad económica los que movilizaron a la juventud, cinco años después los teléfonos más sencillos de muchísimos más jóvenes que llenaban los parques con wi-fi gratuito tejieron las redes de la rebeldía en todo el país. Muchos adultos creíamos que la juventud estaba absorta, enajenada con ese “juguete” tecnológico. Abril nos demostró que era sólo cuestión de tiempo.

UNA CATÁSTROFE ECOLÓGICA Y EL PODER DE LA EMOCIÓN

La otra chispa que hizo estallar el volcán en abril de 2018 fue el incendio iniciado el martes 3 de abril en la Reserva Biológica Indio-Maíz.

Un fuego incontrolable comenzó a extenderse desde ese día por el valiosísimo bosque tropical húmedo que cubre el sureste de Nicaragua, fronterizo con Costa Rica, un tesoro biológico de valor intangible para Nicaragua y Centroamérica. Acostumbrados a un irresponsable modo de gobernar, en el que las decisiones siempre están ultra-centralizadas, la Vicepresidenta Murillo minimizó el incendio y el gobierno no comenzó a reaccionar hasta el 6 de abril.

Acostumbrados también a gestionar cualquier evento de importancia o silenciándolo o tergiversándolo si no pueden esconderlo, el gobierno se resistió a solicitar ayuda internacional, rechazó la que le ofrecieron bomberos costarricenses, militarizó la zona, impidió a periodistas y ambientalistas independientes ingresar a la reserva y hasta amenazó con retirar su personalidad jurídica a la Fundación del Río, primera organización nacional que encendió la alarma el mismo día 3, con informaciones que recibía directamente de las comunidades ramas y krioles que habitan en la zona incendiada.

Fue la juventud, que en Nicaragua como en todo el mundo, ha ido desarrollando una conciencia de responsabilidad ambiental, intuyendo que el mundo que heredarán está en grave peligro, la que salió a las calles preocupada por la reserva. Desde el primer momento, y día tras día, la entrada de la Universidad Centroamericana (UCA), en el centro de la capital, se convirtió en espacio de las protestas universitarias.

El 11 de abril eran más de 300 los jóvenes de varias universidades, autoconvocados por #SOSIndioMaíz en las redes, quienes se mantuvieron durante algunas horas frente a la UCA. “Ortega negligente” decía una de las pancartas. En otro punto del centro de Managua, y con el habitual pulso que el gobierno organiza para “no perder las calles”, unos mil miembros de la Juventud Sandinista (JS) alababan disciplinadamente el “esfuerzo” gubernamental para apagar el fuego. Hasta ese día no hubo represión.

El 12 de abril creció el número de jóvenes frente a la UCA. Cuando pretendieron marchar por calles céntricas de la capital, reclamando información veraz sobre el incendio, aparecieron por primera vez policías antimotines para impedirlo. Golpearon a varios jóvenes, mientras otros policías protegían la contramarcha de la JS, que desfiló acuerpada por las amenazantes fuerzas de choque del gobierno: hombres en moto, cubierto el rostro con el casco y armados con garrotes o armas de fuego.

Finalmente, el 13 de abril fue un copioso diluvio, muy frecuente en esa región, el que apagó el incendio. En uno de los seis canales de televisión oficiales un “especialista” dijo que se sentían “muy optimistas” porque se había perdido menos del 2% del bosque.

Otra fue la visión del director del Centro Humboldt, Víctor Campos, quien afirmó que el daño era “irreversible” porque la pequeña zona quemada estaba precisamente en la zona núcleo de la reserva. “Es la mayor catástrofe ecológica en la historia de nuestro país”, se lamentó el científico Jaime Incer Barquero.

LA CHISPA INMEDIATA: LAS REFORMAS AL SEGURO SOCIAL

El gobierno dejó de hablar del incendio y de cómo paliar sus consecuencias. Seguramente pensó que, al igual que las llamas, la conciencia juvenil ya se había apagado. Tal vez no saben que la neurociencia nos ha enseñado que las grandes decisiones que los seres humanos tomamos comienzan siempre con una emoción, nunca con un análisis racional. Las protestas ambientalistas habían dejado ya un enorme acumulado de nuevas emociones en una inicial masa crítica de la juventud universitaria de Managua.

Tan seguro estaba el gobierno de que ya lo tenía todo bajo control que apenas tres días después de cesada la indignación juvenil por el incendio en Indio-Maíz, el lunes 16 de abril en la tarde, Roberto López, presidente del INSS, anunció cuáles serían las reformas que finalmente el gobierno implementaría para evitar el colapso financiero de la institución.

Sin decir una sola palabra de las razones estructurales de la crisis del INSS, que, además del natural envejecimiento de la población, tienen que ver con la conocida corrupción del régimen en la institución, López detalló los números de una reforma que dijo daría “un respiro” a las quebrantadas finanzas del INSS durante los próximos diez años.

Como el seguro se quedaría sin dinero para pagar pensiones antes de terminar 2018, el gobierno tenía urgencia y decidió salir al paso a la quiebra por la vía más fácil: sacándole dinero a todo mundo. Los trabajadores asegurados cotizarían más (de 6.25% a 7%). Los empleadores cotizarían más (de 19% a 22.5%). A los jubilados se les descontaría un 5% de la pensión y a los nuevos jubilados se les calcularía su pensión en un 10% menos. La contribución del Estado era claramente insuficiente.

No fue una reforma de corto plazo, sino de cortísimo plazo, incluso movida por la desesperación y pensada desde el poder absoluto que no escucha y no debate.

UNA REFORMA CORTOPLACISTA Y “POR SUS PISTOLAS”

Para salvar al INSS había otro camino, que hubiera supuesto autocrítica y escucha de los expertos en seguridad social del país, que venían insistiendo en opciones de más largo plazo y más justas: eliminar gastos administrativos injustificables y turbias inversiones realizadas con los fondos del INSS, trasladar al presupuesto gastos del seguro social que no se basan en las cotizaciones, conseguir una gestión más transparente, garantizar la autonomía de la institución, dejando de ser coto de empleados muy bien pagados por su lealtad al partido de gobierno.

Pero el gobierno no dialogó con los especialistas ni siquiera tuvo en cuenta a sus aliados de la clase empresarial. Se impuso “por sus pistolas”, en argot nica. Actuaron con la habitual arrogancia que da el poder absoluto.

Como había sido habitual durante años, el gobierno decidió cortoplacestamente y presentó aumentos y recortes como producto de un conflicto con la cúpula empresarial y como una defensa de los trabajadores, no sometiéndose al FMI, que venía sugiriendo desde hacía años aumentar la edad de la jubilación y las semanas a cotizar para obtener una pensión.

El gobierno calculó que si sus activistas repetían por doquier que no se modificaba la edad de jubilación (60 años) ni las semanas de cotización (750), que los jubilados recibirían su aguinaldo en Navidad y que el gobierno “revolucionario” no había “obedecido” al FMI, todos los afectados por las reformas quedarían conformes.

Calcularon que la élite empresarial se quejaría, pero terminaría arreglándose con ellos. Después de una década de un gobierno corporativo, donde los empresarios habían ocupado más de 40 cargos en instituciones estatales y habían sido co-artífices en la elaboración de decenas de leyes, donde el corporativismo, denominado “modelo de diálogo y consenso”, hasta fue incluido en el texto de la Constitución, pensaron que el “desentendimiento” con la clase empresarial sería pasajero y manejable.

Lo que quedó fuera del cálculo del régimen fue el espeso caldo de rechazo que se venía cocinando en toda la sociedad, especialmente entre la juventud.

El día 18 los universitarios volvieron a salir a las calles en León y en Managua. Por el 5% que el gobierno les quitaba a sus abuelos y a sus abuelas. Por las reformas al seguro social. Y por todo. Por el ya insoportable yugo de un autoritarismo sin límites. Y estalló la conciencia. □



Abril 2018

La insurrección de la conciencia



Nadie presintió el estallido, pero eran incontables las razones que anunciaban que ocurriría. La juventud universitaria lo inició y a la juventud la siguió la gente, muchísima gente, cada vez más gente. Desde hacía años había muertos y terror en las zonas rurales y Managua parecía dormida. Y al despertar Managua, levantó al unísono al país entero. ¿Cómo fue posible? No por una conspiración desde fuera, sino por la mucha lava acumulada dentro. Los volcanes no avisan.

Durante casi tres décadas Nicaragua no había tenido primeras planas en medios internacionales. En abril, cuando empezó a correr la sangre en Managua y después en todo el país y durante varios días, fuimos noticia. Abril les pareció a muchos dirigido, planificado, organizado, pero fue espontáneo, real, inesperado. Por sus dimensiones y consecuencias, el estallido de abril sorprendió a todo el país y

a los mismos jóvenes que lo iniciaron. El régimen Ortega-Murillo fue el principal sorprendido. Seguramente por eso decidió reprimir “con todo” y en abril cayó su máscara y se reveló su rostro criminal.

UNA DÉCADA DE AGRAVIOS

Abril 2018 quedará grabado para siempre en la conciencia nacional. Ese día, la desproporcionada respuesta represiva de las fuerzas de choque del gobierno y de la Policía Nacional contra jóvenes y ciudadanos que protestaban contra las reformas al seguro social en distintos puntos céntricos de Managua, y la brutal escalada represiva de los días siguientes hizo estallar al volcán. Una década de autoritarismo sin límites convirtió el estallido en una insurrección de la conciencia nacional.

Un acumulado de indignación ante abusos, arbitrariedades, humillaciones, corrupción, desigualdades, también crímenes siempre impunes en las zonas rurales, encendió por fin mentes y corazones. La arrogancia de un poder cada vez más absoluto y asfixiante diseminó los hervores de abril a la velocidad que facilitaron las redes sociales. El estallido de abril reveló también un relevo generacional y se pareció también a un cansancio, un hastío, un hartazgo.

LOS UNIVERSITARIOS EN LA PRIMERA LÍNEA DE LA PROTESTA

Las protestas iniciaron el martes 17 de abril en la noche, cuando universitarios de la UCA y de la UAM -propiedad del Ejército- convocados por #SOSINSS se reunieron en los nuevos portones de la UCA, que ese día fueron apedreados por miembros de la Juventud Sandinista (JS).

El 18 en la mañana un pequeño grupo de gente adulta protestó por las reformas al seguro social ante un edificio construido con fondos del INSS. Al final de la tarde se congregó un grupo mayor de universitarios y ciudadanía adulta en el Camino de Oriente, zona céntrica de Managua. Fueron amenazados, golpeados y heridos algunos por turbas de la JS y por fuerzas de choque motorizadas, que también atacaron a los periodistas que cubrían la protesta y robaron cámaras y celulares. Todo, a vista y paciencia de la Policía Nacional, en total impunidad.

El gobierno apostó a que ese método de violencia, ya tradicional, desmovilizaría a quienes protestaban. Pero no fue así. Los golpes fueron documentados por la televisión y por los teléfonos que convierten hoy en reportero a cualquier ciudadano o ciudadana. En la tarde del 19 de abril más y más jóvenes salieron a las calles de la capital. Esto se repetía en otros puntos del país. En León, los golpes que recibió de miembros de la JS un adulto de la tercera edad que protestaba tuvieron una respuesta inmediata. La juventud salió a las calles y varios fueron heridos.

En Managua, jóvenes desafiaron a compactas filas de policías antimotines. Las redes divulgaban a velocidad de la luz imágenes impactantes del valor con que lo hacían. Esa noche cayeron asesinados los dos primeros jóvenes: en Tipitapa Richard Pavón, 17 años, acibillado de nueve balazos, y en Managua Darwin Urbina, en las cercanías de la UPOLI (Universidad Politécnica), que en unos días se convertiría en bastión de la insurrección juvenil. Allí cayó también el primer policía.

El día 20 habían despertado todas las universidades públicas del país, dominadas hasta entonces por la UNEN (Unión Nacional de Estudiantes de Nicaragua), un brazo del partido de gobierno. Era una rebelión universitaria. Ese

día, llevándoles agua a los estudiantes que protestaban en los predios de la Catedral de Managua, cayó herido de una certera bala en el cuello, Álvaro Conrado, de 15 años, un estudiante de secundaria. Su temprana muerte, sus últimas palabras (“Me duele respirar”) y la pureza de su compromiso -dar de beber a sus compañeros-, lo convirtieron muy pronto en uno de los símbolos de mayor arraigo de la insurrección de abril.

UN PAÍS INSURRECCIONADO

A la ira juvenil comenzó a unirse la población de los barrios de Managua y de otros municipios. El 20 de abril ya había marchas y plantones de protesta espontáneos por casi todo el país. El país estaba insurreccionado.

El día 20 cayó al suelo, cortado durante horas por muchos jóvenes y con una sierra de mano, el primer “árbol de la vida”, símbolo del poder de Rosario Murillo, quien había “sembrado” 140 de estas estructuras de hierro de 14 toneladas por toda Managua. Hasta agosto caerían muchos más de estos “chayopalos”. Ese día se levantaron barricadas en Monimbó, emblema de la lucha contra Somoza.

Pronto se sintió que no eran sólo por las reformas a la seguridad social. Estallaban diez años de negación de la autonomía universitaria, de negación de la autonomía municipal, de negación de la democracia, de violación de los derechos humanos, especialmente los derechos civiles y políticos. La respuesta del gobierno a esta inesperada y espontánea insurrección, que los agarró por sorpresa, fue tan torpe como cruel. Se fue revelando como una política de terrorismo de Estado.

“Las muertes y daños” que el gobierno ordenó durante esos primeros días son incontables. Y aunque después de publicarlas en el diario oficial, un Ortega, sorprendido por el inesperado mensaje que le llegaba de todas las esquinas del país, también de las bases de su partido, reaccionó el 22 de abril revocando las reformas a la seguridad social, las protestas siguieron y se incrementaron. Ortega pidió a los obispos que fueran mediadores de un diálogo entre el gobierno y el COSEP para acordar otra forma de salvar de la insolvencia al seguro social. Pero la cantidad de muertos que ya había cambió la percepción de buena parte del empresariado nacional. El COSEP convocó a sus agremiados a una marcha en Managua para el 23 de abril.

Los epítetos empleados por Rosario Murillo contra quienes protestaban (“almas pequeñas, tóxicas, llenas de odio, vampiros sedientos de sangre, grupos minúsculos”), atizaron el fuego de la indignación. La interpretación que hizo Daniel Ortega de lo que ocurría -son “pandillas matándose entre ellos mismos”- hizo trizas la imagen que su gobierno

y sus aliados empresariales habían vendido durante una década: “Nicaragua, el país más seguro de Centroamérica”.

En unos días y por horas manifestaciones masivas por todo el país exigían dos cosas: justicia por los asesinados y un cambio: ¡Que se vayan! En pocos días quedó clara una línea divisoria entre la Nicaragua de antes de abril y la Nicaragua de después. En pocos días ya sabíamos que nada seguiría en el mismo lugar en donde estuvo antes.

LA MEGAMARCHA EMPRESARIAL

La primera gran marcha en Managua fue la convocada por los empresarios del COSEP. La población capitalina se unió a la marcha empresarial y la desbordó: gentes de toda clase social de la capital, autoconvocadas por las redes, salieron a las calles. Una multitud incalculable recorrió ocho kilómetros de la capital enarbolando banderas de Nicaragua. Desde ese día, el azul y blanco de la bandera nacional se convirtió en el símbolo de la resistencia cívica.

En una demostración espontánea que dos generaciones de capitalinos nunca habían visto, plenamente cívica y totalmente pacífica, se escuchó reiteradamente la primera de las consignas de esta insurrección: “¡No eran delincuentes, eran estudiantes!”

Después de la marcha, conscientes de su responsabilidad en la crisis, los empresarios pidieron que el diálogo tuviera una agenda amplia y que en él estuvieran presentes los estudiantes. El diálogo “nacional” que los obispos habían pedido en 2014 en una histórica carta pastoral, que nunca fue respondida por la pareja presidencial, aparecía de nuevo como una “salida” en el horizonte.

LA MEGAMARCHA CATÓLICA

El 24 de abril los obispos aceptaron ser “mediadores y testigos” del diálogo. Tenían clara conciencia de las dificultades: “El diálogo en Nicaragua es un riesgo porque nuestro país no está acostumbrado a dialogar y porque hay una parte de la sociedad que ha estado acallada y reprimida en sus derechos humanos y fundamentales. Los obispos hemos aceptado este riesgo en nombre de Jesucristo y en nombre del pueblo. Si no lo corremos se pueden abrir horizontes de violencia y de caos”, dijo el obispo Silvio Báez.

Los obispos llamaron a participar el sábado 28 de abril en una Peregrinación por la Paz. De nuevo, una multitud incontable, convocada por las parroquias de la arquidiócesis (Managua, Masaya y Carazo), llenó la capital. De nuevo, gentes de todas las clases sociales, católicas o no, marcharon hacia la Catedral con banderas azul y blanco de Nicaragua y banderas amarillo y blanco de la iglesia. Hubo “pere-

grinaciones por la paz” en Boaco, en Estelí, en Rivas y en otros puntos del país. La de Matagalpa fue la más numerosa: 50 mil personas.

JUNTO A CUBA Y A VENEZUELA

El 24 de abril la Casa Blanca se refirió por primera vez en un comunicado a “la repugnante violencia política de la Policía y de los matones pro gubernamentales contra el pueblo de Nicaragua, en particular los estudiantes universitarios, que ha conmocionado a la comunidad internacional democrática”.

El 2 de mayo, en la Casa Blanca, el Vicepresidente Mike Pence, en la ceremonia de juramentación de Carlos Trujillo como nuevo embajador de Estados Unidos ante la OEA, se refirió a la crisis de Nicaragua con estas palabras: “En las últimas semanas, el gobierno de Nicaragua ha reprimido brutalmente a su propio pueblo por alzar sus voces en protestas pacíficas”.

Mencionó después “el legado de tiranía de los Castro en Cuba” y lo que sucede en Venezuela. Pence dijo que en esos tres países -incluyó a Nicaragua- Estados Unidos tiene aún “trabajo por hacer para garantizar un continente en libertad”. Y concluyó: Estaremos del lado de todos los que aspiran a la libertad y confrontaremos a sus opresores”.

Por primera vez Nicaragua aparecía en la voz de Washington junto a Venezuela y Cuba. Desde entonces nuestro país estaría siempre mencionado en ese trío.

EL PRIMERO DE MAYO DESPUÉS DE ABRIL

Después de las dos megamarchas llegaba el Primero de Mayo. Como en otros años, el gobierno lo celebró el 30 de abril, para asegurarse la asistencia obligada de los empleados estatales, amenazados con perder su puesto de trabajo si no acuden a la concentración oficial.

Esta vez los simpatizantes del partido de gobierno, la JS y los empleados del Estado fueron convocados para expresar “el amor y el cariño que le tenemos a nuestro líder indiscutible. El comandante presidente tiene que sentirse acompañado de un mar de pueblo y así darle un revés contundente a la marcha política-religiosa de la Iglesia-derecha”. Como en otras ocasiones, los buses del transporte colectivo se dedicaron a recoger por barrios y comarcas de todos los municipios del país a empleados públicos y simpatizantes. Las redes sociales testimoniaban que venían más vacíos que nunca. El discurso de Ortega fue breve y provocador. No asumió responsabilidad alguna por ninguna de las muertes ocurridas y ya ese día nos dio a entender que no iba a ceder en nada.

“LO QUE HA PASADO NOS SORPRENDIÓ A TODOS”

Ese día, al bajar de la tarima en la que acompañó a Ortega, Rosario Murillo dijo a los medios oficialistas: “Lo que queremos es que se retome el buen rumbo que llevaba nuestro país hasta hace unos días”.

Ese deseo sonaba a un imposible. El país había dado un vuelco que parecía irreversible. De improviso, la élite empresarial supo que el gobierno Ortega-Murillo no les garantizaría estabilidad ni económica ni social ni garantizaría sus negocios. El modelo de gobierno antidemocrático, al que no le dieron suficiente importancia cuando el país era “estable” privilegiadamente para ellos y sus empresas, estaba hecho trizas.

De improviso agarró el estallido de abril a todos los funcionarios públicos de nivel. Con un estilo consolidado durante una década de monólogos, ninguno parecía tener permiso para dar declaraciones. El primero en decir algo fue Bayardo Arce, comandante y ex-miembro de la dirección del Frente Sandinista en los años 80. En entrevista con el canal internacional Telemundo, reconoció que la reforma que el gobierno había hecho al seguro social había sido “un error”. Arce es asesor económico de Ortega, lo que demostraba que no lo habían tenido en cuenta.

A la pregunta sobre si la reacción de los estudiantes había sorprendido al gobierno, respondió: “Claro que lo sorprendió. Nos sorprendió a todos, yo creo que sorprendió a los empresarios, sorprendió a los sindicatos, a todo el mundo. Porque la reacción vino de un sector que no está directamente vinculado a la problemática de la seguridad social. Protestaba el estudiante universitario, que todavía no es empleado, que todavía no es cotizante, que todavía no es pensionado”.

También habló esos días el diputado Jacinto Suárez, secretario de relaciones internacionales del partido de gobierno y compañero de cárcel de Ortega, entrevistado por ACAN-EFE. Suárez dijo: “Nos toca hacer un balance crítico a los sandinistas y encontrar en qué hemos pecado”.

Meses después, Luis Carrión, otro de los nueve comandantes de la dirección del FSLN en los años de la Revolución, lo reiteraba y lo reconocía: “Nadie estaba preparado. Ni el gobierno ni la empresa privada. Ni la oposición. Nadie pensó que se iba a producir esta revolución cívica tan espontánea y tan repentina, En el discurso de Daniel Ortega hasta el 18 de abril vivíamos en el país de las maravillas. Y de repente, misteriosamente, surgió una “fuerza terrorista, golpista”.... Esos fueron discursos de después de abril de Ortega, que no entiende la naturaleza del problema. No le interesa entenderlo, porque a Daniel lo único que le importa es conservar el poder”.

“FUE UNA CONSPIRACIÓN AL ESTILO DE VENEZUELA”

Las consideraciones de Arce y Suárez, salidas del seno del poder, demostraban lo espontáneo de la crisis, la sorpresa de todos, la torpeza de la respuesta represiva del gobierno... O como dijo el propio Arce: “Suele suceder en estos fenómenos sociales que llega un momento en que perdés el control. La misma Policía perdió el control y las noticias además te hacen perder el control”.

La sorpresa admitida por Arce y Suárez demostraba que nadie había ni organizado ni planificado abril, ni dentro de Nicaragua ni fuera. A pesar de eso, una “izquierda” tradicional, congelada en el tiempo y aferrada a interpretar con esquemas simples y ya obsoletos casi todo lo que ocurre en el mundo, una “izquierda solidaria” que tal vez menosprecia las capacidades del pueblo de este insignificante y pequeño país, se resistió a creer que los sucesos de abril no eran resultado de una conspiración del “imperio”.

Muy pronto, en el seno del poder cambió el discurso. Transmutaron “la sorpresa” en injerencia externa y agresión... Jacinto Suárez, el que hablaba de autocrítica y de pecados, dijo a la BBC días después, respondiendo a la pregunta de cómo explicaba lo ocurrido: “Estamos ante una conspiración patrocinada y pagada por el gobierno de Estados Unidos. No estamos viendo fantasmas, ni inventando nada. Es el mismo estilo de Venezuela: tumultos de vándalos, manifestaciones, un montón de muertos. Obviamente nos causó algún efecto porque no estábamos preparados. Para ser sinceros, nos sorprendieron. Pero ahora ya estamos en la jugada. Estamos más alerta para entender este fenómeno y ver como lo trabajamos y lo asumimos”.

Las redes mostraban que muchos de los actos vandálicos los provocaba el gobierno. Y en poco tiempo se demostró que “estar en la jugada” no era otra cosa que reprimir sin límites, que lo “asumirían” intensificando la violencia hasta niveles inimaginables.

BALANCE FATAL: “FUERON EJECUTADOS”

Desde el día 19 de abril el régimen reprimió con una violencia desproporcionada, utilizando a francotiradores y a fuerzas antidisturbios que emplearon armas letales. Desde el primer caído el 19 de abril hubo muertos matados por bala todos los días y hasta el final del año ni un día dejamos de ver una represión sin escrúpulos.

Fue hasta el 4 de mayo que el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH) hizo público un primer informe con un balance de lo que llamó “violaciones sistemáticas a los derechos humanos de los nicaragüenses por el régimen dictatorial de Daniel Ortega y Rosario Murillo”.

Respecto a las muertes decía: “La violencia, sin comparación en la historia reciente de Nicaragua, ejercida por la Policía y las fuerzas de choque del gobierno, ha tenido como consecuencia la muerte violenta de al menos 45 personas durante el ejercicio legítimo de una protesta social. 4 son menores de 18 años, 24 son jóvenes estudiantes y 18 pobladores con diferentes perfiles ocupacionales que apoyaban la protesta de los estudiantes, 2 son agentes policiales y uno, un periodista que daba cobertura a los hechos de violencia en Bluefields”.

“Todas las muertes -precisaba el informe- se dieron en el contexto de la represión y la violencia estatal. La mayoría de las víctimas presentaba impactos de bala en la cabeza, cuello, pecho o abdomen, por lo que podemos afirmar que fueron ejecutados, valiéndose las autoridades y las fuerzas de choque de una clara ventaja respecto de los medios de que disponían los manifestantes. Esto evidencia que la orden era matar”.

¿QUÉ VA A HACER LA OEA?

La pregunta sobre el papel que asumiría la OEA ante la crisis nicaragüense fue una de las primeras que se levantó en el terreno internacional. Dada la complacencia con la que el secretario general del organismo regional, Luis Almagro, había tratado a Ortega desde que le envió un cuestionador informe previo a las elecciones presidenciales de 2016, informe que nunca hizo público, era necesario recordarle a Almagro que las cosas habían dado un vuelco en Nicaragua.

Cristiana Chamorro, directora de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro -lleva el nombre de su madre y ex-Presidenta de Nicaragua (1990-1997)-, asumió esa misión y visitó a Almagro en Washington el 4 de mayo.

Le pidió a Almagro que se sumara a la demanda de justicia por la masacre de abril y le expresó preocupación por el silencio de la OEA ante la crisis nicaragüense: “No queremos más muertos, ¿qué va a hacer la OEA?”. Le señaló a Almagro la falta de credibilidad que tenía la OEA entre los nicaragüenses y lo “desfasado” que habían quedado los acuerdos que el régimen había firmado con Almagro en febrero de 2017.

Cristiana le presentó a Almagro los dos escenarios que existían en Nicaragua apenas dos semanas después de iniciado el estallido de abril. O elecciones justas y transparentes anticipadas que permitan una transición pacífica como Ortega decidió en 1989 para poner fin a la guerra de los años 80. O una salida sangrienta y de destrucción del país como la eligió Somoza en 1979, que concluyó con su derrocamiento. “Lamentablemente, parece que Ortega ha escogido esta segunda”, le dijo Cristiana al secretario general de la OEA.

Ocho meses después de este encuentro la disyuntiva sigue siendo la misma.

UN PRIMER BALANCE DEL ESTALLIDO DE ABRIL

Gracias al coraje y a la decisión de la juventud millennial de nuestro país, abril concluyó con un mayor número de nicaragüenses unidos en un reclamo. Es imperativo hacer justicia por tantos muertos matados sancionando a los responsables. Y ha llegado el momento de democratizar Nicaragua y no podemos perder la oportunidad de hacerlo con la energía que estalló en abril y cuanto antes.

Si en apenas una semana, el régimen Ortega-Murillo vio trastocada su alianza con la élite empresarial, perdió el monopolio de las calles, provocó una vergüenza sin retorno entre mucha gente buena que aún creía en ellos, pasó a ser minoría social y evidenció ante la nación y ante el mundo su rostro criminal, abril nos dejó una mayoría nacional que afirma que Daniel Ortega y Rosario Murillo perdieron toda autoridad moral para continuar ejerciendo el poder. Ese consenso continúa vivo ocho meses después.



Un régimen que dispara contra una revolución cívica



En mayo, la insurrección de la conciencia que estalló en abril siguió viva. En las calles de la capital continuaron las movilizaciones masivas. En muchos municipios hubo gente protestando en las calles con banderas azul y blanco. Las carreteras permanecían bloqueadas por tranques. Todos exigiendo lo mismo: justicia y democracia. En el terreno internacional, en la OEA específicamente, comenzó a nacer la conciencia de lo que había pasado, de lo que estaba pasando, y de lo que podría pasar en Nicaragua de prolongarse la crisis.

UNA REVOLUCIÓN NO ARMADA

Nicaragua estaba viviendo “una revolución no armada”. Así la calificó el obispo de Estelí Abelardo Mata en la sesión inaugural del diálogo nacional el 16 de mayo. Comple-

ja de entender en el exterior esa revolución, después del silencio de más de una década, en la que poco o nada se sabía sobre los desmanes del régimen Ortega-Murillo, desconocidos para algunos, nostálgicos del pasado revolucionario; tolerados para otros -como sucedió con la misma empresa privada nicaragüense y con el gobierno de Estados Unidos-, considerando que Ortega, mal que bien, era menos problemático gobernando “desde arriba” que “desde abajo”. Tranquilos, porque con su mano dura, les garantizaba a ambos estabilidad en una región muy violenta.

Una revolución no armada en una situación de tanta desigualdad era también una experiencia difícil de mantener en un país con tanta gente familiarizada con las armas, en un pueblo que lleva impreso en su memoria histórica el derrocamiento armado de una dictadura hacía cuarenta años, y que tiene en su memoria más reciente la frustración por

los cuatro fraudes consecutivos organizados por Ortega, que cerraron la posibilidad de cambiar las cosas cívicamente por los votos.

La violenta respuesta con que el régimen respondió de inmediato hacía prácticamente imposible que no aparecieran del lado de la insurrección cívica y no armada grupos más radicales que acudieran a las armas. Nunca fueron los más, y en su mayoría, fueron episodios de legítima defensa.

Sin embargo, desde el primer momento y hasta concluir este histórico 2018, fue arraigándose en la conciencia nacional que la salida debe ser pacífica y haciendo uso de mecanismos no violentos.

Las mayorías que despertaron en Nicaragua lo hicieron instintivamente convencidas del carácter cívico y pacífico, no violento, que debía mantener la insurrección, para evitar otra guerra. Esta convicción es uno de los grandes logros del estallido de abril.

**DERECHOS HUMANOS INTERNACIONALES:
“EN EL MENOR TIEMPO POSIBLE”**

Para investigar los crímenes de abril -cuando tanta sangre derramada a tiro limpio por la Policía dirigida por Ortega convirtió a Nicaragua en noticia internacional- la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), órgano autónomo de la OEA, solicitó al gobierno desde el 26 de abril, en tres ocasiones y de manera urgente, hacerse presente en Nicaragua.

El régimen se negó una y otra vez y el 6 de mayo conformó su propia “comisión de la verdad” como parapeto que sustituyera la presencia de la CIDH en el país. Esa comisión nació muerta por falta de credibilidad: ¿quién iba a esperar justicia de ella sabiendo que surgía de un Parlamento totalmente controlado por Ortega, sabiendo que los cinco “notables” que la integraban eran afines ideológica o económicamente al régimen?

Como tampoco los obispos creían en ella, el 10 de mayo condicionaron el inicio del diálogo nacional a que el gobierno permitiera “en el menor tiempo posible” el ingreso de la CIDH al país. Ortega tuvo que ceder. Por su imagen internacional le interesaba aparecer como dialogante, aunque nunca realmente tuvo voluntad de diálogo.

El diálogo nacional se instaló por fin el 16 de mayo, casi un mes después de la masacre de abril, y cuando ya se conocía que al día siguiente, 17 de mayo, llegaría al país la CIDH. Ya había decenas de muertos. La llegada a Nicaragua de 15 integrantes de la Comisión Interamericana, presidida por la relatora de la CIDH para Nicaragua, Antonia Urrejola, y por su secretario ejecutivo, Paulo Abrão, fue un importante logro de la resistencia ciudadana.

En sus cuatro días en el país, investigando lo ocurrido en abril y hasta ya entrado mayo, en cuatro ciudades (Managua, León, Masaya y Matagalpa) los comisionados recibieron a más de tres mil personas escuchando sus denuncias: testimonios de familiares de los asesinados, relatos de heridos, de detenidos, de torturados, de amenazados... También se les entregaron centenares de videos, grabaciones y otras pruebas materiales.

CIDH: UN INFORME DEMOLEDOR

El informe preliminar de la CIDH evidenció que en Nicaragua el Estado respondió a las protestas ciudadanas de abril con un uso desproporcionado de la fuerza, valiéndose de agentes antimotines de la Policía, de fuerzas de choque del partido de gobierno y de otros “terceros armados”, fuerzas parapoliciales los llamaron, que desde mayo comenzaron a aparecer en los operativos represivos.

El balance trágico de esta actuación criminal hasta el 21 de mayo era, en el informe de la CIDH: 76 personas muertas, 868 heridas, 438 detenidas, cifras que al irse la CIDH continuaron incrementándose diaria y rápidamente.

“Encontramos una situación muy grave de derechos humanos en Nicaragua, salimos muy preocupados del país”, dijo al llegar a Washington Paulo Abrão. Nunca el régimen, que a través de sus cuerpos armados ya había cometido graves violaciones de derechos humanos durante estos años, especialmente en zonas rurales, incluidas ejecuciones extrajudiciales, documentadas todas por los organismos nacionales de derechos humanos, se había visto ante una evidencia tan contundente sobre el carácter criminal de su modelo de control social.

Desde que salió de Nicaragua el 21 de mayo la CIDH siguió emitiendo comunicados desde Washington condenando una violencia que no cesaba. Al llegar a Washington, Abrão dijo a medios internacionales: “La región todavía no está suficientemente atenta a lo que está ocurriendo en Nicaragua”.

Fue precisamente este informe de la CIDH, presentado al Consejo Permanente de la OEA el 5 de junio lo que abriría la conciencia del organismo regional a la crítica realidad nicaragüense.

**UNIVERSIDADES TOMADAS,
CARRETERAS TRANCADAS**

Desde abril, estudiantes universitarios se habían atrincherado en la UPOLI y en la UNAN Managua. Fue un método de lucha, defensa y resistencia. Otro método fueron los tranques. Desde abril los campesinos vinculados a partir de 2013

a la lucha anticanal comenzaron a levantar tranques en distintos puntos del país. Los primeros aparecieron en Chontales. Después se multiplicaron por todo el país. Expresaron la dimensión nacional de las protestas y desgastaron al régimen. Su desmantelamiento “al precio que sea” fue el objetivo central de la represión oficial hasta el mes de julio.

Colocados en puntos estratégicos que llevaban de una ciudad a otra o que se colocaban a la entrada de las ciudades, los tranques obstaculizaban al gobierno el mover libremente a las fuerzas represivas. Si el 19 de mayo se logró la multitudinaria marcha que vieron las calles de León fue porque había tranques que defendían la ciudad.

Tranques y barricadas garantizaban las movilizaciones ciudadanas en todos los territorios. Fueron un mecanismo de defensa, consciente la gente de que sin ellos aumentaría la represión masiva y la selectiva. Tranques y barricadas, defendidos por campesinos y pobladores urbanos día y noche, fueron también la demostración palpable de que el gobierno había perdido el control del territorio nacional.

A partir del 12 de mayo Masaya, y allí el barrio indígena de Monimbó, comenzaron a ser atacados por la represión policial. Como defensa, la ciudad se llenó de centenares de barricadas artesanales que defendían cada barrio. El cuartel de la Policía quedó atrapado entre las decenas de barricadas que la gente levantó de un día a otro y los agentes policiales no pudieron salir del cuartel hasta mediados de julio.

EL 69% DE LA GENTE DICE QUE RENUNCIEN

El diálogo nacional se instaló el 16 de mayo. Los obispos actuaron como mediadores y testigos. En la mesa estarían de un lado funcionarios del gobierno y del otro los integrantes de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (estudiantes, campesinos, empresarios privados y miembros de la sociedad civil, seleccionados por los obispos).

El día antes de iniciar el diálogo, la empresa encuestadora CID Gallup presentó los resultados de un sondeo realizado a nivel nacional a 1,200 personas entre el 5 y el 14 de mayo. El 69% de los consultados dijo que quería que Ortega y Murillo renunciaran al gobierno. Entre quienes así se expresaron un 30% se declararon sandinistas. El 78% opinó que el país “va por mal camino”. En la encuesta que la misma empresa había hecho en enero sólo veía malo el camino un 35%.

Un cambio tan drástico, comparado con resultados de anteriores encuestas de la misma firma y en tan poco tiempo, lo explicaría una de las consignas que apareció en las movilizaciones de mayo: “Daniel perdió al pueblo y el pueblo perdió el miedo”.

“¡RÍNDASE

ANTE TODO ESTE PUEBLO!”

Desde un primer comunicado, los obispos dijeron que el diálogo nacional se celebraría en el seminario nacional y, por tanto, “en su cancha”. Horas antes de la instalación del diálogo, Murillo anunció su presencia y la de Ortega en “este evento histórico”.

Acompañados de tres de sus hijos, Ortega y Murillo se desplazaron hacia el seminario con un aparato de seguridad jamás visto. El blindado Mercedes Benz que conducía Ortega iba precedido de 14 policías motorizados, 3 camionetas con al menos 8 policías fuertemente armados y otros dos vehículos cerrados. El vehículo de la pareja iba seguido de 6 motos con policías, 2 camionetas con al menos 8 policías en cada una y 2 microbuses llenos de un número indeterminado de efectivos armados. A lo largo de todo el trayecto que recorrería en la capital, 6 policías vigilaban cada semáforo. Al final de la caravana iba una ambulancia y por los aires volaban dos helicópteros del Ejército. Al ingresar por el camino que lleva al seminario un grupo de mujeres se organizaron y no dejaron de gritarles “¡Asesinos!”

Se había anunciado que a la instalación del diálogo, que se transmitiría en directo por radio y televisión, y a la que asistiría todo el cuerpo diplomático acreditado en Nicaragua, seguiría este protocolo: himno nacional, invocación a Dios de uno de los obispos, breve discurso de Ortega, oración por las víctimas de la violencia, canto en latín de la Salve y al final, Ortega y Murillo departirían con los asistentes.

Antes de que Ortega hablara, fue Lesther Alemán, 20 años, estudiante de Comunicación de la UCA, quien tomó la palabra. Sin micrófono y con una firmeza que paralizó al país, encaró al mandatario: “¿Por qué asalto la palabra suya? ¡Porque nosotros hemos puesto los muertos, los heridos, los desaparecidos!... ¡Hemos aceptado estar en esta mesa para exigirle que ahorita mismo ordene el cese inmediato de la represión de sus tropas, de las fuerzas paramilitares, de las turbas!... Ésta no es una mesa de diálogo, ¡es una mesa para negociar su salida, y usted lo sabe muy bien porque el pueblo es lo que ha solicitado!... En un mes usted ha desbaratado el país, a Somoza le costó muchos años, ¡y usted lo sabe muy bien!.. ¡Ríndase ante todo este pueblo!”

Una escena inolvidable que quedará en la memoria colectiva por mucho tiempo.

“UN DISCURSO DECEPCIONANTE”

Un Daniel Ortega impávido y con un rictus de contrariedad escuchó del universitario lo que nunca había escuchado de nadie. En once años en el gobierno jamás había aparecido

Ortega en una rueda de prensa, jamás se había dignado a conceder una entrevista a la prensa nacional, nunca había respondido preguntas porque nunca las había escuchado.

En su discurso, nada breve, no dijo nada que se pareciera a una disculpa por los muertos de abril o que expresara alguna responsabilidad en lo ocurrido. Más bien, se refirió a los 50 mil muertos de la guerra civil de los 80 y a los 2 mil palestinos heridos en Gaza esos días. Se limitó a señalar con preocupación “la violencia irracional, la violencia diabólica que ha explotado en nuestro país”, sin relacionarla con su origen: la represión con la que su régimen había respondido a las protestas ciudadanas. Y sin asumir responsabilidad alguna en la irracionalidad de la violencia que ellos mismos habían ordenado.

Las palabras de Lesther animaron a otros participantes a tomar la palabra fuera del guion estipulado. El obispo Abelardo Mata le dijo al mandatario que estaba ante “una revolución no armada”. El ex-Ministro de Educación Carlos Tunnermann le dijo cuán “decepcionante” había sido su discurso al negarse a aceptar la nueva realidad del país. Y el campesino coordinador del movimiento anticanal, Medardo Mairena, después de escuchar cómo había descalificado Ortega en su discurso a quienes hacían tranques en las carreteras del país se puso en pie para aclararle: “Quiero que sepa, señor presidente, que los campesinos nos hemos unido a respaldar a los jóvenes. En los tranques no hay otras personas que nosotros. Somos nosotros quienes estamos ahí. Somos los campesinos, que nunca hemos sido escuchados”.

Al final, los estudiantes volvieron a interrumpir el protocolo. Una muchacha, Madeleine Caracas, fue leyendo uno a uno los nombres de todos los asesinados en abril y el lugar donde cayeron. A cada mención seguía un vibrante ¡Presente! que coreaban los estudiantes.

“UNA PLAGA ESTÁ ASOLANDO EL PAÍS”

Después de su instalación, el diálogo tuvo tres sesiones. La primera (18 de mayo) no fue transmitida en directo. Ni Ortega ni Murillo se presentaron nunca más al diálogo. Las sesiones las presidió el Canciller Denis Moncada.

La primera sesión duró nueve horas y la delegación del gobierno la retrasó llegando dos horas más tarde de lo acordado. De esta sesión surgió únicamente una “tregua” de dos días. Ambas partes se comprometían, el gobierno a no ejercer la represión y la Alianza Cívica a flexibilizar los tranques. Pero la represión continuó y también los tranques.

También continuaron, organizados en varios municipios por los alcaldes orteguistas, actos provocadores de caos. Por esos hechos (incendios consumados o pretendidos, sa-

queos, destrucción de inmuebles, violencia generalizada que duraba horas), cada vez más frecuentes de día o de noche, en cualquier lugar del país, la población responsabilizaba al gobierno, que pagaba a “vagos” o a pandilleros por realizarlos, o que les encomendaba su realización a sus propias turbas. Los medios del gobierno responsabilizaban de todos estos incidentes violentos a “grupos vandálicos de la derecha”. Rosario Murillo dijo en esos días que se trataba de “una plaga que está asolando el país desde hace un mes exactamente”.

Ya Ortega había dicho en el diálogo que se trataba de una violencia “diabólica”. Dijo después que “el demonio estaba sacando las uñas”. Y en nota oficial, días más tarde, el régimen informó a la comunidad nacional e internacional que las acciones las realizaban “grupos políticos de oposición con agendas políticas específicas, activando formatos delictivos para aterrorizar a las familias”, especificando también que la violencia venía de una “conspiración delincuencia que ha pretendido entregar el país al crimen organizado”. No hablaba aún el régimen de “golpe de Estado”...

¿DÓNDE ESTABA LA DERECHA VANDÁLICA?

La “interpretación” de todo lo que estaba ocurriendo, repetida incansablemente por los medios oficialistas, resultaba chocante. Porque si antes del 18 de abril Nicaragua era “el país más seguro de Centroamérica” y la ejemplar Policía de Nicaragua garantizaba esa seguridad y era considerada la de mayor prestigio en la región, ¿cómo había sido posible que de la nada, y sin ser detectados por los órganos de inteligencia de esa Policía, tampoco por los del Ejército, hubieran surgido tantos grupos vandálicos -enseguida se les llamó terroristas- con capacidad de actuar tan activamente por todo el territorio nacional?

¿Dónde estaba hasta abril, dónde se escondía antes, esa derecha vandálica? ¿Y cómo pudieron esos vandálicos vencer de un día a otro a decenas, a cientos de miles de nicaragüenses, que no son violentos, para movilizarse en marchas multitudinarias rechazando al gobierno “cristiano, socialista y solidario” y respaldando el vandalismo?

¿Y cómo esa Policía resultaba tan ineficiente cuando esos grupos vandálicos incendiaban, saqueaban o disparaban indiscriminadamente en las calles? Ya desde el primer momento, y gracias a la fiel documentación visual de las redes sociales se sabía que el “vandalismo” lo estaba organizando el propio régimen. Meses después se comprobaría, por el testimonio de periodistas que desertaron de los medios oficiales que los saqueos fueron planificados “desde arriba” para aumentar la sensación de caos.

LA “ESCUELA” DEL DIÁLOGO NACIONAL

La segunda sesión del diálogo (21 mayo) fue transmitida en directo. Duró varias horas. Resultó un ejercicio de ciudadanía inédito en el país. Seguir la sesión por televisión, radio o redes sociales se convirtió en una escuela en un país tan ajeno al debate y tan necesitado de él. También fue inédito ver, por primera vez en once años, a funcionarios del gobierno emplazados a rendir cuentas. También pudimos observar su pobre argumentación y su nula capacidad de decisión porque consultaban permanentemente a casa presidencial qué decir, qué objetar, qué plantear...

Durante esa sesión se hizo público en Managua el informe preliminar de la CIDH. El gobierno aceptó que cumpliría las 15 recomendaciones que hace la Comisión, lo que creó la apariencia de un enorme logro. Pero, consistente con su lema histórico, “firmar me harás, cumplir jamás”, ese mismo día los grupos parapoliciales a los que se refería el informe de la CIDH continuaron reprimiendo a la población, causando muertos y heridos. A la vez, y en las redes sociales del gobierno, se continuó amenazando, denigrando, calumniando y criminalizando a estudiantes, a los empresarios que participaban en el diálogo, y especialmente a los obispos, particularmente a Monseñor Silvio Báez, violentando así la recomendación número 10 de la CIDH, que se refiere a evitar esos comportamientos.

LA RUTA DE LA DEMOCRATIZACIÓN

Al término de la tercera sesión (23 mayo) los obispos decidieron suspender la mesa de diálogo por no darse consenso entre ambas partes. Ese día los obispos presentaron al gobierno como agenda del día, y con el propósito de comenzar a debatirla, un documento que titularon “Ruta de la democratización”. El texto era muy extenso e implicaba, hasta con fechas, una total refundación del Estado. Lo que pretendía la Alianza Cívica presentando algo tan detallado era poner a prueba la voluntad del gobierno para debatir cuándo iniciar la reforma parcial de la Constitución, camino que llevaría a adelantar las elecciones presidenciales, legislativas, municipales y caribeñas “a la mayor brevedad posible”.

El Canciller Denis Moncada, al frente de la delegación del gobierno, dijo que lo que había escuchado era la “ruta de un golpe de Estado para derrocar al gobierno”. Fue el obispo Silvio Báez quien, considerando “la grave acusación” que hacía Moncada, le aclaró qué era un golpe de Estado y qué era lo que estaba ocurriendo en el país: una crisis política que los obispos intentaban solucionar “en sintonía con la Carta Democrática Interamericana y la Constitución de Nicaragua”. A partir de ese tenso momento todos los re-

presentantes del gobierno en el diálogo mostraron no tener voluntad de abordar el tema de la democratización. Para demostrarlo, pasaron horas insistiendo, en cada uno de sus turnos de palabra, en que se levantaran los tranques que ejercían presión en buena parte del país obstaculizando el tránsito durante horas, aunque no a las ambulancias ni a los vehículos que trasladaban enfermos. En ese momento los tranques cubrían el 70% de las vías del país.

“SI SE ATACA A UNO SE NOS ATACA A TODOS”

A partir de ese momento, el diálogo no avanzó más. Quedó “trancado” por la insistencia del gobierno en que se levantaran los tranques. Ya para entonces, el régimen estaba convencido de que la Conferencia Episcopal conducía y mediaba el diálogo en una dirección que no era la que esperaban. Siempre pensaron Ortega y Murillo que tenían bajo control a los obispos.

El 22 de mayo la Conferencia Episcopal denunció en un comunicado las amenazas que estaba recibiendo el obispo auxiliar de Managua Silvio Báez de parte de simpatizantes del régimen. Los obispos afirmaban que el pueblo de Nicaragua “atravesaba hoy una de las peores crisis de su historia tras la cruda represión por parte del gobierno de Nicaragua, que trata de evadir su responsabilidad como principal actor de las diversas agresiones”.

Y refiriéndose la Conferencia a los ataques que recibía Báez y el resto de obispos, le advertía al régimen: “A pesar de estas amenazas, recordamos a nuestros agresores que somos un cuerpo colegiado y que si se ataca a un obispo o a un sacerdote se nos ataca a la Iglesia, y que no renunciaremos a acompañar en esta hora decisiva a todo el pueblo nicaragüense, que bajo el azul y blanco de nuestra bandera, ha salido a las calles a reclamar sus justos derechos”.

EL RÉGIMEN BUSCA “OTRO” DIÁLOGO

Para entonces, la insurrección cívica había demostrado ya que el régimen había perdido las calles y también a sus aliados de la empresa privada. El diálogo nacional les estaba demostrando que habían perdido también a la jerarquía católica y a párrocos, religiosos y religiosas por todo el país, que se habían puesto del lado de la gente.

Por eso, Murillo hizo circular un documento interno que llamó “Nuevo panorama político”. En él planteaba que si el 22 de mayo “la Conferencia Episcopal en comunicado oficial ha dicho que la opinión de uno es la opinión de todos, ha hecho suyos los llamados a la guerra de Silvio Báez”.

En consecuencia, el régimen se propuso organizar un diálogo nacional alternativo, con sectores, gremios y partidos políticos bajo su control y con nuevos mediadores. Nunca logró concretar ese plan. El mensaje de Murillo era un intento desesperado de rebobinar la realidad para regresarla a antes de abril.

El 26 de mayo miles de católicos se movilizaron en respaldo de los obispos. Iban precedidos por una manta que decía: “Queremos verdadera justicia. Apoyamos a la CEN (Conferencia Episcopal de Nicaragua) y especialmente a Monseñor Silvio José Báez”. El obispo Báez fue durante todo el año el prelado más atacado y amenazado por el régimen y sus simpatizantes.

Pocos días después, la “guerra” oficial contra la iglesia católica se expresó en una circular pidiendo a los simpatizantes sandinistas no acudir a las celebraciones dominicales de la misa y a otros ritos católicos. El régimen se había declarado en guerra abierta contra la iglesia católica.

AMNISTÍA INTERNACIONAL: “DISPARAR A MATAR”

El 28 de mayo Managua vivió durante la mañana horas de terror. Tropas antimotines se desplegaron a mediodía en el centro de la capital disparando con armas de guerra, hiriendo y apresando a decenas de personas. A algunas, por apoyar a los universitarios de la UNI, que se habían tomado la universidad temprano en la mañana. A la mayoría, porque pasaban por ese lugar a esas horas. En un confuso incidente, quienes apoyaban a los universitarios prendieron fuego a la fachada de la oficialista Radio Ya.

El mensaje de ese día parecía ser aterrorizar a los capitalinos, que se preparaban para la gran marcha anunciada para el 30 de mayo, Día de las Madres.

Ese día estaba en Managua la directora para las Américas de Amnistía Internacional (AI), Erika Guevara-Rojas, presidiendo una delegación de esta organización de derechos humanos. Venían a presentar el día 29 el informe de la visita que había realizado Amnistía a Managua, Ciudad Sandino, León y Estelí entre el 4 y el 13 de mayo. El informe lo titularon “Disparar a matar”.

Amnistía Internacional afirmaba que el gobierno de Nicaragua estaba empleando una “estrategia letal de represión contra manifestantes” y que, según los ocho casos concretos que habían investigado en detalle, “no sólo se privó arbitrariamente de la vida en el marco de la protesta y del uso excesivo de la fuerza, sino que, con base en el patrón identificado, un elevado número de casos podrían considerarse ejecuciones extrajudiciales”. Demostraba el informe que las fuerzas del gobierno tiraban a matar por las armas

que empleaban y por el impacto mortal que buscaban los certeros disparos, muchos de ellos hechos por francotiradores.

Pilar Sanmartín, investigadora regional de AI para situaciones de crisis, señaló en una entrevista con la prensa nacional los tres problemas que detectaron en las autoridades nicaragüenses: “No se están haciendo responsables de lo que ocurre, no están aceptando los hechos y no están investigando como se debe”. Y dijo: “No esperábamos encontrarnos con esto, las autoridades niegan los muertos, minimizan lo que está ocurriendo, criminalizan la protesta y estigmatizan a las personas que se manifiestan. Pero también a través de ese discurso vemos que sí saben lo que está sucediendo. El problema es que no reconocen responsabilidad y están permitiendo que pase el tiempo y haya más muertes. Por nuestra parte, Amnistía no va a parar hasta que no pare esto”.

Días después, otro logro de la presión cívica fue que el régimen tuvo que aceptar el invitar a Nicaragua al Grupo de Investigación de Expertos Internacionales (GIEI), para deslindar responsabilidades en la ola represiva que vivía Nicaragua desde el 18 de abril. También exigía la Alianza Cívica que viniera a Nicaragua el representante del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

30 DE MAYO: TRÁGICO DÍA DE LAS MADRES

El 30 de mayo, Día de las Madres, un día tradicionalmente sagrado en Nicaragua, el régimen cruzó una línea roja e instaló el terror.

Desde hacía días se anunciaba “la madre de todas las marchas” en Managua, en solidaridad con “Madres de Abril”, las mujeres que vieron asesinados a sus hijos al inicio de la insurrección cívica. Cientos de miles de personas, según algunos cálculos más de 300 mil, según otros 500 mil, participaron ese día en la movilización más grande que nunca había visto Nicaragua. En la marcha iban niños, hasta bebés en brazos de sus madres, ancianas en sillas de ruedas, familias enteras, gente de toda edad y condición social, alzando la bandera nacional.

Era la cuarta megamarcha realizada en la capital. Ninguna de las anteriores había sido atacada, todas se habían desarrollado en paz y de forma cívica. Esta vez no. Cuando la marcha concluía en el centro de la capital, en la avenida universitaria, un grupo de parapoliciales surgieron de repente disparando contra la multitud, siguiendo el mismo patrón de otras veces: disparos a matar por francotiradores. Ese día murieron en Managua 14 jóvenes y quedó herido un centenar.

“¡TODOS NOS QUEDAMOS AQUÍ!”

Mientras el tiroteo estremecía el centro de Managua y la Universidad Centroamericana abría sus puertas para refugiar a unas cinco mil personas que huían de las balas, en la avenida Bolívar, el también céntrico espacio de la capital que aún controlaba el régimen, Ortega hablaba a simpatizantes y a empleados públicos.

Quienes calcularon en más de 300 mil las personas en la megamarcha cívica, calcularon en unas 30 mil las que reunió Ortega. Una proporción significativa, casi una encuesta: 10 a 1. El contraste tuvo que haber decepcionado a los que esperaban reunir más gente en torno a Ortega. Pudo también haber contribuido a decidir a algunos a ir atacar a los otros. El ambiente de violencia que había desatado el gobierno venía fomentando un clima de peligrosa polarización.

Muchos de los que llegaron ese día a la concentración de Ortega esperaban de él alguna palabra que orientara, alguna estrategia, alguna propuesta. Si el discurso de Ortega en el diálogo nacional decepcionó a sus adversarios, el de Ortega esa tarde decepcionó a sus simpatizantes. Su discurso sonó a una declaración de guerra.

A sus aliados del gran capital, que el día antes habían respaldado la marcha de las madres y le habían pedido que aceptara adelantar las elecciones, les espetó: “¡Nicaragua no es propiedad privada de nadie!” Y a todos los nicaragüenses, los cívicos y los radicalizados, les dijo en el mismo tono: “¡Nicaragua es de todos los nicaragüenses! ¡Y todos nos quedamos aquí!”. El mensaje fue claro: no se iba a ir, no iba a renunciar. Sería sobre un baño de sangre aún mayor y sobre las ruinas de Nicaragua que había decidido poner fin a su gobierno.

Ocho meses después, y con la consigna “El comandante se queda” Nicaragua está bañada en sangre, sumida en el dolor y en camino al precipicio de una debacle económica.



En resistencia contra la estrategia del terror



A partir del 30 de mayo, después del ataque a la marcha del Día de las Madres, la estrategia del régimen para enfrentar la rebelión popular quedó aún más clara: el recurso a la represión (desmantelar los tranques tirando a matar) y el recurso al terror (amedrentar comarcas y barrios día y noche), acciones todas protagonizadas por la Policía y paramilitares en todo el territorio nacional, con la complicidad de las autoridades locales leales a Ortega.

“RECHAZAMOS CUALQUIER RESPONSABILIDAD EN LA VIOLENCIA”

La estrategia del régimen se basó en reprimir negando la represión. Negando también la insurrección de abril, que los había convertido en minoría social y en minoría políti-

ca y que, de adelantarse las elecciones, los convertiría probablemente en minoría electoral.

El 31 de mayo, todavía estupefacto el país después del sangriento Día de las Madres, el régimen hizo pública una nota de prensa para dar a conocer su posición. El punto 5 y el 8 de ese texto muestran un grado de cinismo que contradecía todo lo que los representantes de Ortega habían asumido días antes en el diálogo respecto a cumplir con las recomendaciones del informe de la CIDH y mostraban que estábamos entrando en otra etapa de profundización de la represión.

“5. El Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional denuncia enfáticamente todos los crímenes que se han cometido desde el 18 de abril, rechaza cualquier responsabilidad en esa violencia, y afirma categóricamente que cumpliremos nuestro deber de evitar más derramamiento de san-

gre, más enfrentamiento fratricida, más montajes calumniosos, demostrando cada día de dónde proviene esta acción que busca entronizar el caos acusándonos, cuando la principal prueba de su falacia son los 11 años de Paz, Justicia y Desarrollo, que en Cristianismo y Solidaridad ha conocido Nicaragua”.

“8. En Nicaragua no existen fuerzas de choque ni grupos paramilitares afines al Gobierno, por lo que no podemos aceptar que se pretenda acusar de acontecimientos dolorosos y trágicos que no hemos provocado, que jamás provocaremos, y que a partir de acusaciones infundadas se pretenda restringir la aplicación del deber constitucional de las fuerzas del orden público de contribuir a asegurar a las familias”.

EL INCIERTO “FACTOR ALMAGRO”

El gobierno combinó su estrategia de terror y negación con el “factor Almagro”.

El 1 de junio el régimen publicó el cronograma elaborado bilateralmente con la secretaría general de la OEA, que preside Almagro, cuyo objetivo era el “fortalecimiento de las instituciones democráticas de Nicaragua”. Seguramente ese documento tenía una fecha previa, pero decidieron publicarlo hasta el 1 de junio para dejar claro lo que piensan hacer: seguir reprimiendo porque son víctimas de “una conspiración” y negociar solamente con la OEA todo lo referido a la democracia, sin participar nuevamente en el proceso de diálogo con la Alianza Cívica. El cronograma, que no tuvo en ese momento un desmentido de Almagro, parecía diseñado para llevar al país hasta 2021, cuando Ortega concluiría su período.

LAS “OPERACIONES LIMPIEZA”

Más que las movilizaciones, marchas y plantones masivos de abril y mayo, tranques y barricadas defendiendo a la gente del ingreso de las fuerzas policiales y parapoliciales, organizando territorialmente a la población y concitando la solidaridad de otros pobladores para “mantener” el tranque o la barricada con la donación de alimentos y medicinas, se convirtieron en el único instrumento de presión cívica sobre el régimen que era permanente, que estaba ahí de día y de noche y que lograba cubrir todo el país.

La estrategia de terror del régimen priorizó desde junio el desmantelamiento a sangre y fuego de tranques y barricadas, atacando, secuestrando, encarcelando, también asesinando, a quienes los resguardaban y respaldaban... Auténticos operativos militares se desarrollaron con ese objetivo por todo el país.

Después del desconcierto y los niveles de improvisación que había evidenciado el régimen en los primeros momentos de abril, su apuesta fue organizar un auténtico ejército terrorista, dotando de armas de guerra a policías y a centenares de paramilitares que, acompañados por la Policía, cubrieron todo el territorio nacional.

Para conocedores del Ejército, es de los arsenales del Ejército de donde salían las armas que usaban las fuerzas paramilitares, integradas entre otros por asesinos excarcelados para ese trabajo, por pandilleros y narcotraficantes. Contaron también con ex-miembros del Ejército, quienes las dirigían, encapuchados, siguiendo en las “operaciones de limpieza” una estrategia con las características de un operativo bélico. Como nunca ha habido respuesta para la pregunta de por qué no ha desarmado el Ejército a los paramilitares, el silencio contribuye a dar veracidad a la hipótesis de la complicidad del Ejército en los operativos.

UN ESTADO DE SITIO DE FACTO

Las caravanas de fuerzas irregulares -se les denomina paramilitares, parapoliciales, terceros armados...- comenzaron a moverse acompañadas y resguardadas por patrullas de la Policía llenas de efectivos policiales y antimotines.

A los “paras” encapuchados, que inspiraban más terror, se les asignó el trabajo sucio: allanamiento de viviendas -a veces saqueadas- y captura de personas. Vecinos pertenecientes a los Consejos del Poder Ciudadano (CPC) entregaban a los paramilitares listas con nombre y dirección de quienes sabían o sospechaban que estaban participando en protestas o en tranques para que los capturaran y llevaran a la cárcel. A otros los torturaron y asesinaron.

En la capital y en el resto del país este accionar criminal provocó en junio y julio un estado de sitio de facto que la propia población se impuso. Cuando caía la tarde la gente se encerraba en sus casas. Ni siquiera entonces se sentía segura, porque los operativos de limpieza y de captura, también los incendios y saqueos, ocurrían a cualquier hora.

Ocho meses después, este temor a la noche lo mantiene buena parte de la población, especialmente en zonas rurales, en donde todavía circulan campantemente los paramilitares.

SON PRESOS POLÍTICOS

La estrategia del terror se instaló en todo el país a la par de la criminalización de quienes protestaban. Los encapuchados capturaban y llevaban a los así secuestrados ilegalmente a estaciones de la Policía, con más frecuencia a la cárcel de Auxilio Judicial de Managua, conocida como El Chipote.

Detenidos durante un número indeterminado de días, lo que es ilegal, y sin dar información a sus familiares y mucho menos sin permitirles defensa, los amenazaban, los golpeaban. Y a quienes consideraban con más liderazgo, los torturaban para obtener información. Los han judicializado después achacándoles delitos que nunca cometieron.

Éste ha sido un patrón generalizado en todo el país, un patrón que no ha variado en ocho meses. En diciembre, cuando no hay un solo tranque en todo el país, todos fueron desmantelados en julio, se mantenía la cacería de personas.

En junio, el CENIDH (Centro Nicaragüense de Derechos Humanos) recibió cinco denuncias diarias de detenciones ilegales. Al finalizar ese mes, la Policía empezó a trasladar a los que mantenía secuestrados en El Chipote a la cárcel Modelo de Tipitapa. La Comisión pro Derechos Humanos (CPDH) hablaba de la existencia de cárceles clandestinas en donde hay pruebas de que se han practicado torturas.

En las afueras de El Chipote, una prisión usada por Somoza para torturar a sus opositores, se aglomeraron a diario, en junio y hasta mediados de julio, madres, hermanas, padres, familiares de los detenidos, preguntando por los suyos, llevando en las manos sus fotos y cartulinas con sus nombres. El 22 de julio el régimen instaló de forma permanente a la entrada de El Chipote a sus turbas, para que hostigaran a los familiares e impidieran que el lugar siguiera siendo un espacio para la reunión y la protesta. Al llegar noviembre el régimen tenía ya a más de 500 presos políticos, buena parte de ellos acusados de “terrorismo”.

LA IGLESIA DESAFÍA EL TERROR

En ausencia de partidos políticos creíbles, los obispos de Nicaragua se han ganado un enorme reconocimiento en este momento de la historia nacional. A pesar de sus fragilidades, el papel que han jugado ha resultado imprescindible e insustituible.

La realidad ha convertido a la jerarquía de la iglesia católica, no sólo a los obispos, aún más a sacerdotes, párrocos, a religiosos y a religiosas, en el sector más creíble y confiable. No había otra institución política, ni otra organización social, con presencia nacional, capaz de asumir ese papel cuando en abril la ciudadanía se rebeló contra el régimen. Desde esos primeros momentos los representantes de la iglesia católica fueron respondiendo a cada vez más retos con compromiso y espíritu de servicio.

En una situación tan extrema, como la que habían previsto desde 2016, y siguiendo el mandamiento básico de las grandes religiones de la humanidad, y de la ética más esencial, que ha escrito en la conciencia de los seres humanos

“no matarás”, los líderes católicos se han puesto claramente del lado de la gente que ve en peligro su vida y la de los suyos y han protegido a los perseguidos, curado a los heridos y acompañado a quienes luchan por un cambio en el país.

“DIOS ESTÁ CON NOSOTROS”

Ortega y Murillo, quienes pensaban tener bajo control a los líderes de la iglesia católica se equivocaron y pasaron a considerarlos enemigos. Ésta es una de las grandes debilidades del régimen, todavía mayor tratándose de un pueblo tan religioso.

La religiosidad popular, en todas sus expresiones, está de mil modos presente en la rebelión cívica. Imágenes de la Virgen en los tranques de las carreteras y entre los adoquines de las barricadas, autoconvocados con rosarios al cuello o marchando en una mano la bandera y en otra el rosario, pidiendo tiempo en la radio para compartir oraciones que improvisan o basan en textos bíblicos. “Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros?” se lee en pancartas en las movilizaciones.

Del lado evangélico, los creyentes de esas denominaciones (un 40% de la población nacional) y los pastores locales también apoyan a la gente y la protegen, de modo similar a como lo hacen los católicos. Los dirigentes evangélicos más conocidos, por mediáticos, no. Callan o defienden al gobierno abierta o implícitamente, cuando insisten en que “de todos lados hay violencia”, sin señalar quién la inició y cuánta es la desigualdad en esta lucha.

LAS CIFRAS DEL TERROR

El terror aumentó sensiblemente en junio. El día 26 la Asociación Nicaragüense pro Derechos Humanos (ANPDH) brindó las cifras que había recogido a partir de las denuncias que recibió entre el 18 de abril y el 25 de junio.

Informó de 285 personas asesinadas en el contexto de las protestas, 262 plenamente identificadas y 23 aún en proceso de investigación.

El 96.2% de los muertos eran civiles, el 3.8% policías.

El 56.1% de los muertos (127) tenía edad identificada.

De ellos 21 eran niños y adolescentes y el resto jóvenes menores de 30 años.

La mayoría de los muertos (145) cayeron en Managua.

El municipio de Masaya seguía a la capital en número de muertos: 30.

El 82.2% (235) de los muertos fueron heridos con arma de fuego.

El disparo fue en la cabeza en el 32% de los casos.

La ANPDH contabilizaba 1,500 heridos atendidos en cen-

tros hospitalarios, de los cuales 46 han quedado lisiados de forma permanente. Contaba para esas fechas 72 detenidos ilegalmente y 201 que ya lo estuvieron y fueron liberados con señales de haber sufrido torturas y tratos degradantes. Y contabilizaba a 156 personas desaparecidas.

Tan sólo una semana después, y hasta el 2 de julio, la ANPDH contabilizaba ya 309 muertos, 297 de ellos civiles y 253 víctimas de armas de fuego. Cifró en 158 las personas desaparecidas y en más de 200 las detenidas ilegalmente. Todas estas cifras nunca han dejado de aumentar, con variaciones según el recuento de los distintos organismos nacionales de derechos humanos.

LAS CIFRAS DEL DESPLOME DE LA ECONOMÍA

En el pulso entre el obcecado aferramiento al poder de Ortega y de Murillo y la determinación de la gente en resistir a ese poder, también al terror y al miedo, la economía nacional comenzó a desplomarse desde abril.

La más resentida ha sido la economía popular: centenares de pequeñas y medianas empresas, de turismo, comercio y servicios fundamentalmente, comenzaron a cerrar o a trabajar menos horas, despidiendo de forma permanente o temporal “hasta nuevo aviso” a miles de personas, una auténtica tragedia en un país en que el 80% de las empresas son pequeñas y medianas y en donde el desempleo, el subempleo y el empleo informal son los principales problemas de la gente.

Especialmente resentido se vio el turismo. La violencia desatada por el gobierno y el convulso ambiente convirtieron a Nicaragua en un destino poco atractivo, hasta peligroso. La presidenta de la Cámara Nacional de Turismo Lucy Valenti fue la primera y la única representante de una cámara gremial del Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP) que le pidió a Ortega públicamente su renuncia. Según los cálculos de la Cámara de Turismo, las pérdidas alcanzaban en junio los 200 millones de dólares y de los 120 mil empleos que garantizaba el turismo ya se habían perdido unos 60 mil.

El masivo y repentino desempleo y el temor a la violencia desatada por el régimen provocaron que a partir de junio centenares de personas, especialmente jóvenes, buscaran apresuradamente su pasaporte para salir del país. Largos y diarias filas en las oficinas de migración eran diarias.

En octubre eran más de 40 mil los nicaragüenses que pedían refugio en Costa Rica. Otras opciones eran Panamá y España. Terminando junio, el Presidente del Banco Central tuvo que reconocer que la meta de crecimiento que el gobierno había fijado para 2018, entre 4.5% y 5%, que hasta entonces pretendió mantener intacta, no era realista: el cre-

cimiento estaría entre el 0.5% y el 1.5%. Con la economía hundida por la crisis y el incremento de la migración lo único que podría crecer serían las remesas familiares.

“ES UN GOLPE DE LA OLIGARQUÍA”

Horas después de que hablara el Banco Central, FUNIDES (Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Social), vio más negativas las cosas. Proyectó que “tras 72 días de crisis, y ante la falta de voluntad del gobierno para buscar una salida negociada”, en 2018 la economía había perdido ya más de 600 millones de dólares y podría llegar a perder 1,400 millones. FUNIDES calculó que el año cerraría con crecimiento negativo, que el PIB caería entre -0.03% y -5.6% y anunció que se habían perdido en todo el país 215 mil empleos.

Juan Sebastián Chamorro, director de FUNIDES y miembro de la Alianza Cívica, dijo que el país atravesaba por una crisis económica “histórica, la más significativa después de la de 1978” -cuando se intensificó la insurrección contra Somoza-. “Desde 1978 no había ocurrido una recesión tan grande viniendo el país de un crecimiento positivo”, dijo. Consideró muy difícil pronosticar cuánto tiempo costaría recuperar la economía. Para algunos analistas, las consecuencias económicas de la crisis política superaban ya en el mes de junio el daño que habría causado la aprobación de la Nica Act en el Congreso estadounidense.

A los cálculos de FUNIDES siguieron días después nuevas cifras oficiales. Éstas venían acompañadas de una “interpretación” de la crisis. Las dio el Ministro de Hacienda Iván Acosta, diciendo que eran 250 mil los desempleados como resultado de “un golpe de Estado a la estabilidad del país y a la economía nacional provocado por la oligarquía en nombre de la institucionalidad”.

TOMAS DE TIERRAS: UNA POLÍTICA DE VENGANZA

La estrategia de terror y la apuesta por el caos que llevaba adelante el régimen tocó también a los empresarios con una campaña bien organizada de invasión de fincas y de terrenos privados.

La Unión de Productores Agropecuarios de Nicaragua, una de las cámaras empresariales del COSEP, denunció el 20 de junio en un comunicado “un incremento desmedido de invasiones de fincas de nuestros asociados que, al margen de la ley y vulnerando el derecho de la propiedad privada, se comenzaron a registrar desde la primera semana de junio en León y Chinandega y que se han extendido a zonas de Managua, Rivas y Estelí”. Las propiedades invadidas te-

nían entre 50 y 700 manzanas. A finales de junio habían sido ya invadidas 4 mil manzanas de tierras agropecuarias. En noviembre eran aún unas 7 mil, afectando a 70 propietarios. Algunas habían sido desalojadas por la fuerza por agentes de la Policía, porque en el caos reinante en el país algunas personas se tomaron tierras estatales o pertenecientes a la familia gobernante o a sus allegados.

Con este plan de invasión de tierras, Ortega se vengaba de los empresarios que respaldaron movilizaciones, protestas, tranques o participaron en el diálogo nacional. El impacto futuro de esta promovida anarquía hará más difícil de resolver los problemas de propiedad aún pendientes que arrastrá Nicaragua desde el tiempo de las confiscaciones de los años 80.

LA RESISTENCIA DE NICARAGUA LLEGA A LA OEA

La determinación de la resistencia cívica en rebelión contra el régimen requirió desde el comienzo de apoyo internacional. Si en junio se desató el terrorismo de Estado, también junio trajo al escenario de la crisis nuevas presiones internacionales sobre Ortega, empezando por las de la OEA. El 5 de junio, en la Asamblea General de la OEA celebrada en Washington y dedicada al tema de Venezuela, la crisis de Nicaragua logró entrar en la agenda del día. No estaba previsto. Irrumpir en ese espacio continental fue un enorme logro de la delegación de la Alianza Cívica, que se desplazó hasta Washington para hacer oír la voz de Nicaragua. Desde ese día la resistencia ciudadana contó con una mayor atención del continente a lo que pasaba en Nicaragua.

La “Declaración en apoyo al pueblo de Nicaragua” aprobada en la OEA el 5 de junio fue presentada en conjunto por el gobierno de Estados Unidos y el de Nicaragua. La firma del representante de Ortega en esa declaración causó sorpresa y suspicacias. El embajador de Estados Unidos en la OEA, Carlos Trujillo, las despejó, aclarando después que, según los procedimientos del organismo, sólo con el respaldo del gobierno de Nicaragua se podía conseguir una declaración de ese tipo.

En el plenario de la Asamblea, Trujillo fue explícito: la declaración marcaba el comienzo de la participación de los Estados miembros de la OEA “en la grave situación en Nicaragua” y tenía por objetivo poner fin a “la violencia perpetrada contra la población por el gobierno y sus partidarios y eliminar las prácticas antidemocráticas que el gobierno ha instituido en la última década”.

Y para disipar cualquier sospecha afirmó: “Seamos claros: el gobierno nicaragüense tiene la responsabilidad principal de cumplir con el llamado que hace la declaración al

“cese inmediato de actos de violencia, intimidación y amenazas contra el público en general” (ése era el tibio párrafo que se leía en la declaración). Es el gobierno nicaragüense el que ha cometido crímenes graves contra manifestantes pacíficos y contra la propiedad”.

“CON VIOLENCIA NO HAY NEGOCIACIÓN”

Trujillo llegó días después a Nicaragua para una visita de dos días. Habló con los obispos, con los miembros de la Alianza Cívica y con Ortega.

Bastante comedidos en sus declaraciones, tanto Trujillo como sus interlocutores, al abandonar el país se comprendió claramente el objetivo de la visita: lograr que Ortega enviara por fin invitaciones para venir a Nicaragua a la Unión Europea, al Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y en una nueva visita, a la CIDH, a lo que se había negado insistentemente en el diálogo nacional.

Días después, y en entrevista con “La Prensa”, Trujillo comentó algo sobre el contenido de la entrevista que había tenido con Ortega: “Le dijimos que Estados Unidos está sumamente preocupado por la violencia, que vamos a estar al tanto de las personas que son responsables de la violencia porque un día van a ser juzgadas por esos crímenes. Le dijimos que mientras haya violencia no hay negociación”.

CUATRO NICARAGÜENSES SANCIONADOS POR LA LEY MAGNITSKY

Unos días después las palabras de Trujillo se concretaron. El 5 de julio el Departamento del Tesoro de Estados Unidos aplicó la Ley Global Magnitsky a tres nicaragüenses del entorno más cercano a Ortega: a Francisco Díaz, jefe de facto de la Policía y consuegro de Ortega y Murillo; a Francisco López, tesorero del FSLN; y a Fidel Moreno, secretario político del FSLN en Managua.

En el comunicado del Departamento de Estado de Estados Unidos se lee que Francisco Díaz “ha participado en graves abusos de los derechos humanos contra el pueblo de Nicaragua”, que Fidel Moreno “ha dirigido actos de violencia cometidos por la Juventud Sandinista y grupos armados pro-gubernamentales que han sido implicados en numerosos abusos contra los derechos humanos relacionados con las protestas contra el gobierno”. Y que Francisco López, vicepresidente de ALBANISA, presidente de Petronic y tesorero del partido gobernante, “ha sido acusado de utilizar su posición en beneficio propio y el de su familia, al usar compañías de su propiedad para ganar contratos con el gobierno...”

“Como resultado de estas acciones -dice el comunicado- quedan bloqueados todos los bienes o toda participación en bienes de los sancionados dentro de la jurisdicción de Estados Unidos. Y a los estadounidenses se les prohíbe realizar transacciones con las personas bloqueadas, incluido con entidades que pertenecen o que están controladas por ellas”.

ORTEGA NO DA NINGUNA SEÑAL DE CAMBIO

El horizonte cerrado que fue dejando en el país la estrategia del terror generó todo tipo de especulaciones sobre una negociación que habría acordado Ortega con funcionarios de Estados Unidos para su salida del gobierno. La visita a Nicaragua en junio de Caleb McCarry, enviado con el aval del Departamento de Estado de Estados Unidos y del senador republicano Bob Corker, influyente presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, dio pie a los rumores.

McCarry, experto en temas de transición, se reunió con los obispos y con miembros de la Alianza Cívica. También con Ortega y miembros de su familia ¿Qué salió de esa reunión? Tal vez Ortega le dijo a McCarry sólo lo que éste quería escuchar... Es muy posible que así fuera y así lo demostró no ver después ni una sola señal de cambio en la estrategia de Ortega.

ALMAGRO DA SEÑALES DE CAMBIO

Antes de abril Ortega pensaba terminar su período en 2021 y arreglarse con el secretario general de la OEA, Luis Almagro, con el que ya había firmado un plan que conducía hasta esa fecha y haciendo sólo algunas reformas al deteriorado sistema electoral.

Pero con la irrupción del tema de Nicaragua en la OEA en junio el lenguaje de Almagro empezó a evolucionar. En ocasión del incendio provocado por fuerzas parapoliciales que calcinó a seis personas de tres generaciones, incluidos dos bebés, el 16 de junio en su casa en un barrio de Managua, un hecho criminal que tuvo un eco internacional mayor que otros de los previamente cometidos por el régimen, Almagro se refirió al hecho, usando por primera vez la palabra “represión” calificando el crimen como “de lesa humanidad” y sentenciando: “No puede quedar impune”.

Unos días después, cuando se preparaba una “operación limpieza” en Monimbó, apareció otro twitter de Almagro: “El pueblo de Masaya ha demostrado su heroísmo en las páginas más oscuras de la historia de Nicaragua. Condenamos cualquier tipo de ataque que atente contra la vida y la seguridad de los habitantes de Ticuantepe, Nindirí,

Masaya y los Pueblos Blancos”. El cambio mayor en el lenguaje de Almagro se produjo el 22 de junio en el seno de la OEA. Ese día la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó en Washington el informe final sobre Nicaragua ante el Consejo Permanente de la OEA. Hacía 15 años que el Consejo no se reunía para escuchar un informe de la CIDH.

La presentación fue precedida por unas palabras de Almagro, que continuó “modulando” su discurso, refiriéndose a “la represión”, aunque sin adjudicar todavía al régimen de Ortega la responsabilidad por ella. Ese día fue el propio Almagro el que “borró” del calendario electoral el año 2021 para proponer otras fechas: la más temprana, dijo, marzo de 2019 y la más lejana, dijo también, agosto de 2019.

“Se necesita esencialmente una respuesta política desde el poder. En la política -dijo- no tiene sentido prevalecer sobre la voluntad popular. Es la voluntad popular la que debe prevalecer. Hay que hacerlo con elecciones, contando los votos. Las elecciones deben ser pronto. El tiempo va en contra de Nicaragua, el paso del tiempo significa más represión, más violencia, más muerte”.

“ESTE INFORME NO TRADUCE EL DRAMA DE NICARAGUA”

A las palabras de Almagro siguió la lectura del informe final de la CIDH. El secretario ejecutivo de la CIDH, Paulo Abrão, dijo al presentarlo: “Este documento no es capaz de traducir integralmente el drama que viven hoy las personas en Nicaragua”.

Antes de que la relatora para Nicaragua en la CIDH Antonia Urrejola lo leyera, pidió a los representantes de los países del continente ponerse de pie y guardar un minuto de silencio por las víctimas de nuestro país.

El informe final reiteró la interpretación de los hechos que ya contenía el informe preliminar presentado en mayo en Managua, ratificó los patrones identificados de cómo actuaba la violencia estatal y ajustó las cifras. Entre el 19 de abril y el 19 de junio, a dos meses del estallido, contabilizaban 212 personas muertas (entre ellas 16 menores de edad, 5 policías y un periodista). Entre el 19 de abril y el 6 de junio eran 1,337 las personas heridas (entre ellas 65 policías). Y de ese mismo período tenían información de 507 detenidos ilegalmente (421 de ellos jóvenes y adolescentes).

El informe llevaba adjunto los nombres de todas las personas muertas en Nicaragua en los primeros dos meses de la insurrección. A las 15 recomendaciones que el informe preliminar de la CIDH le había hecho al gobierno -no había cumplido ninguna-, el informe final añadía 9 recomendaciones más, que tampoco cumplió nunca el régimen.

“ES UN INFORME NOTABLEMENTE PARCIALIZADO”

En el pleno del Consejo Permanente, el Canciller Denis Moncada, rechazó totalmente el informe, calificándolo de “subjetivo, sesgado y notablemente parcializado”, atribuyendo todo lo que ocurría en Nicaragua a “un proceso desestabilizador de un gobierno legítimo”, que inició, dijo, por la divulgación de una noticia falsa de un muerto en la UCA el 18 de abril, aunque no precisó ningún detalle sobre ese hecho, achacando a esa noticia falsa todo lo que siguió después: asesinatos, saqueos y motines...

Después que Antonia Urrejola leyera con voz firme el informe de la CIDH, trece países tomaron la palabra. Once (México, Perú, Chile, Argentina, Brasil, Paraguay, Costa Rica, Ecuador, Colombia, Canadá y Estados Unidos) agradecieron con discursos similares el informe, pidieron el fin de la violencia en Nicaragua y propusieron una salida democrática, constitucional y pacífica en el marco del diálogo nacional. Bolivia respaldó al gobierno de Ortega, aunque muy cautamente. Sólo Venezuela afirmó que en la crisis nicaragüense se ven “los mismos medios, narrativas y voceros” que se emplean contra el gobierno venezolano. La representación de Maduro rechazó el “malicioso” informe de la CIDH y “la forma atropellada” en que se había organizado la sesión de la OEA.

No tomaron la palabra los representantes de los tres países del Triángulo Norte de Centroamérica (El Salvador, Honduras y Guatemala), con serios problemas de derechos humanos que tienen lugar en sus países. Tampoco hablaron los pequeños países del Caribe, que reciben petróleo venezolano en términos concesionales por el acuerdo de Petrocaribe. Al finalizar la sesión, se anunció una próxima sesión del Consejo Permanente “para dar seguimiento a lo que pasa en Nicaragua”.

LLEGA A NICARAGUA LA MIRADA INTERNACIONAL

Para observar lo que pasa en Nicaragua comenzaron a llegar en junio equipos internacionales para monitorear la situación de los derechos humanos y para investigar algunos crímenes.

El domingo 24 llegó el Mecanismo de Seguimiento para Nicaragua (MESENI), integrado por tres personas del equipo técnico de la CIDH. Llegaron con el plan de coordinarse con los representantes del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para asegurar, con acciones y con sugerencias al Estado, el respeto a los derechos humanos en el país. En su primera semana en Nicaragua (25 de junio – 1 de julio), el equipo del MESENI confirmó 18 muertes violentas y múl-

tiples heridos “en el contexto de las protestas”. También constató una de las acciones más usuales en la política de terror del régimen: “hechos de represión selectiva que se manifiestan en detenciones arbitrarias, allanamientos de viviendas en busca de personas que participaron en protestas y tranques”. Recibieron también “abundante información de personas forzadas a huir de sus hogares para esconderse en casas de seguridad en otras partes del país y de quienes huyen del país buscando protección internacional y solicitando asilo”.

La delegación de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) llegó el 25 de junio. El 3 de julio llegaron los cuatro integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), vinculado al cumplimiento de las 15 primeras recomendaciones de la CIDH, cuya misión sería investigar durante seis meses, prorrogables por otros seis meses, lo sucedido en el país entre el 18 de abril y el 30 de mayo. Abrão dijo que la misión del GIEI sería “tipificar conductas, identificar responsables y generar un plan de reparación integral para las víctimas”.

La desesperación, la impaciencia y la impotencia de las víctimas y de toda la población ante el terror promovido por el régimen, desbordó las expectativas de la gente sobre el poder de cambiar las cosas de los organismos internacionales para detener la represión y castigar a los culpables. Pero el mandato de esos organismos no es ni pacificar el país ni juzgar ni sancionar.

Es recomendar pautas para mejorar el respeto a los derechos humanos e investigar algunos crímenes de forma independiente. El juicio y la sanción le corresponden al sistema de justicia nacional (Fiscalía y Poder Judicial), instituciones dirigidas por funcionarios que durante once años sólo han obedecido la voluntad de Ortega.

LA MARCHA DE LAS FLORES

A pesar de que junio terminó bañado en sangre, el país siguió resistiendo la estrategia del terror. Un mes después de la matanza en la multitudinaria manifestación del 30 de mayo, Día de las Madres, el 30 de junio los azul y blanco volvieron a llenar las calles de Managua en la “marcha de las flores”, convocada en memoria de los niños y adolescentes asesinados desde abril.

El primero, Álvaro Conrado, de 15 años, a quien mataron francotiradores de la Policía el 20 de abril cuando llevaba agua a los universitarios refugiados en la Catedral de Managua. El último para esas fechas, el bebé de 14 meses Teyler Lorío, víctima de una bala de paramilitares cuando su padre lo llevaba en brazos por la calle.

Ese día hubo marchas “de las flores” en Matagalpa, Somoto, Ocotal, León y en otros lugares, demostrando la resistencia popular al terror... También ese día hubo flores, luces, banderas azul y blanco y canciones nicaragüenses en 90 ciudades de 30 países del mundo. Los nicaragüenses que viven y trabajan lejos, unidos a ciudadanos solidarios de esos países, celebraron vigiliias pidiendo que Nicaragua logre la justicia y la democracia, lo único que puede garantizar la paz y con la paz el fin de la violencia.

QUE EL FUTURO NO NOS SEA INDIFERENTE

En junio se hizo ya patente el masivo estrés emocional impuesto por la política de terror del régimen. Todo mundo padecía: perdió a un familiar o lo podía perder, perdió el empleo o lo podía perder, le asustaba lo que traía la noche y el día siguiente, le asustaba el futuro...

La espiral de violencia en la que el régimen Ortega-Murillo ya había sumido al país pretendiendo aplastar la insurrección cívica había convertido el presente de la mayoría de los nicaragüenses en un tiempo inaceptable, incomprensible en un país civilizado. Y en un futuro para el que la palabra “incertidumbre” se quedaba cortísima.

En junio, el terrorismo de Estado elegido como opción por Ortega y Murillo auguraba ya para nuestro país un futuro complejo, alarmante, en el que serán necesarios descomunales esfuerzos para la reconstrucción moral y espiritual de la sociedad.



Después de 100 días de insurrección el mundo ya sabe lo que pasa en Nicaragua



A finales de julio, al cumplirse los primeros 100 días de la rebelión, fue el secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Paulo Abrão quien señaló en la sede de la CIDH que habíamos entrado en la tercera fase de la represión del régimen.

La primera fase se caracterizó por “una represión tradicional con el uso desmedido de la fuerza de la policía contra los manifestantes”. La segunda fue la “operación limpieza” de tranques y barricadas por todo el país.

“Estamos ahora -dijo Abrão- en un tercer momento: un proceso de criminalización de los manifestantes, utilizando las instituciones y el sistema de justicia para detener a las personas y promover acciones y procesos judiciales en su contra”.

DESPUÉS DEL 30 DE MAYO

La rebelión pasó también por varias fases. A las primeras protestas de universitarios, con piedras y morteros enfrentando las balas de policías antimotines y cayendo por los ciertos disparos de francotiradores, siguieron marchas masivas y pacíficas en Masaya, en León, en muchos municipios del país. Managua vio tres marchas multitudinarias entre el 23 de abril y el 9 de mayo.

Para esas fechas los campesinos y después los pobladores comenzaron a levantar tranques que bloqueaban carreteras y caminos. La población los secundó y alzó barricadas en decenas de ciudades. Para destrancar el país y apresar y matar “tranqueros” el régimen armó un contingente de paramilitares que, encapuchados y dotados de armas de guerra, recorrieron el país acuerpados por policías antimotines.

Al atacar a tiros la marcha del Día de las Madres el régimen instaló el terror. Desde mediados de junio hasta mediados de julio el terror se extendió a todo el país. El régimen se dedicó a fondo a las “operaciones limpieza”. Policías y paramilitares llegaban a cada municipio como un ejército de ocupación, intimidando con su sola presencia y, a balazo limpio contra quien estuviera en las calles, peor contra quien defendiera el tranque o la barricada, “limpiaban” el terreno. Iban acompañados de palas mecánicas que demolían las estructuras levantadas con adoquines, piedras o con cualquier otro material. Fueron cayendo así símbolos de la rebelión o artesanales murallas que garantizaban a la población una defensa, ya que dificultaban a policías y encapuchados el entrar a comunidades en resistencia.

“UNA REPRESIÓN DESPIADADA”

Especial saña y criminalidad usó el régimen para desmantelar los tranques de Jinotepe, en Carazo, en donde el saldo de una única jornada de “limpieza” fueron 24 muertos y decenas de personas secuestradas y después encarceladas, según el CENIDH (Centro Nicaragüense de Derechos Humanos). Cruel fue también la “limpieza” de las barricadas que protegieron a Masaya y a Monimbó, que se habían mantenido levantadas enfrentando con éxito 19 violentos ataques previos.

Trágico también fue el fin del tranque de Lóvago en Chontales, el primero que levantó en mayo el movimiento campesino. Allí hubo un acuerdo, mediado por la CIDH y por líderes de la iglesia local, para levantar el tranque de modo pacífico, pero el régimen no lo respetó, desmanteló el tranque y emboscó a los campesinos que lo defendían, dejando un número aún no plenamente esclarecido de personas asesinadas.

El Mecanismo de Seguimiento para Nicaragua (MESENI) de la CIDH, presente en Nicaragua desde finales de junio, confirmó que en diferentes lugares donde se hicieron operaciones de limpieza “se mantenía un diálogo para alcanzar la disolución pacífica de los tranques” y colaborar así a que el diálogo nacional avanzara en conseguir acuerdos. Pero la represión se impuso. Las últimas barricadas que cayeron, dejando tres muertos y una docena de heridos y apresados fueron las del barrio Sandino de Jinotega, conocido como “el Monimbó del Norte”. Era el 23 de julio.

De las “operaciones limpieza” dijo el director de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco: “En unos 30 años de observar la situación de derechos humanos en distintos países del mundo nunca había visto nada como lo que se está viendo en Nicaragua. En ninguna parte hemos presenciado acciones conjuntas de policías y hampones fuertemente ar-

mados que van por todo el país, comunidad por comunidad, disparando, secuestrando, y después celebran en las calles como si hubieran vencido a un enemigo en guerra... Es descarada, es brutal, es despiadada esta represión”.

“LOS MANDAN A MATAR Y A MORIR”

Las “operaciones limpieza” incrementaron las cifras de muertos, tanto de quienes defendían tranques y barricadas, como de policías y paramilitares que los atacaban.

El CENIDH ha dado un riguroso seguimiento a las cifras de muertos que enlutan hoy al país. Desde el 19 de abril hasta el 4 de agosto, contabilizaban 306 muertos. De ellos, 51 policías y paramilitares.

La presidenta del CENIDH, Vilma Núñez, afirmó que quienes se oponen al régimen también han causado muertes al ser atacados. Aun con armas artesanales se pueden causar. Y comentó: “Lo que estamos viviendo no es una guerra entre iguales y sabemos también que no todos los muchachos andan rezando... Y sabemos que han muerto policías y paramilitares. También esas muertes nos duelen y también las documentamos. El gobierno es responsable también de esas muertes porque los ha mandado no solamente a matar, también a morir... Tampoco descarto que el gobierno esté causando algunas de esas muertes. Son capaces de todo”.

LAS CIFRAS DE LA REPRESIÓN

Con datos del CENIDH éstas eran las cifras de la represión, las del dolor y el luto hasta el 4 de agosto. De las 306 personas muertas, 21 eran niños y adolescentes menores de 17 años. El número de heridos era impreciso porque la mayoría de quienes fueron heridos no acudió ni a hospitales ni a centros de salud por temor a ser capturados.

El CENIDH calculaba para esa fecha al menos 2,200 personas heridas, muchas de ellas de gravedad y muchas con discapacidades de por vida. Igualmente impreciso ha sido siempre el número de secuestrados y capturados sin orden judicial. Según el CENIDH, hasta el 4 de agosto permanecían detenidos en diferentes unidades policiales, después de ser capturadas, 300 personas, la mayoría jóvenes varones.

En la cárcel de auxilio judicial de la Policía (El Chipote), en Managua, estaban encarceladas en esa fecha 70 personas. Trasladadas al sistema penitenciario y encerradas en la cárcel Modelo de Tipitapa estaban 112 personas. 148 de todos los apresados estaban siendo procesados judicialmente. El patrón de la acusación es una lista de delitos, los más habituales, terrorismo, crimen organizado, tenencia ile-

gal de armas, obstrucción del servicio público (por los tranques)... La Fiscalía, sin pruebas y sin investigación, los acusa de éstos y de otros delitos, nunca de uno solo. Siempre les imputan listas de delitos, lo que aumenta las condenas. Ya tienen impresos los formatos de las acusaciones y sólo ponen el nombre del detenido en el papel y lo envían al juez, de tal manera que el capturado llega ya enjuiciado, sentenciado y condenado.

Más impreciso ha sido el número de desaparecidos. Desde abril al CENIDH habían llegado 180 denuncias de personas desaparecidas. Algunas aparecieron después presas y torturadas, otras muertas. A comienzos de agosto tenía todavía el CENIDH denuncias de 16 personas que no habían aparecido. El número de desaparecidos es muy impreciso, entre otras razones porque sus familiares los buscan, pero no siempre denuncian la desaparición. El número de los apresados que han sido torturados tampoco es preciso porque sus familiares no suelen decirlo por miedo. Algo similar sucede con los casos de violación sexual, tanto de mujeres como de hombres.

Las personas que fueron detenidas y después liberadas, tras pasar sólo algunos días por las cárceles, habían sido a inicios de agosto al menos 2,500 en todo el país, según el CENIDH. En estos casos, para su liberación jugó un papel fundamental de mediación la iglesia católica, integrante con otros miembros de la Alianza Cívica de la “comisión de verificación” surgida de un acuerdo del diálogo nacional. Esta comisión presentaba al gobierno listas de detenidos por los que abogaba y conseguía que liberaran a algunos. El gobierno dejó de responder a esa comisión desde que el diálogo se estancó a fines de junio.

DESPLAZAMIENTOS FORZADOS

A la “limpieza”, seguida de muertes, allanamientos de hogares para capturar a quienes estuvieron en los tranques o colaboraron con los que estuvieron -llevándoles agua o alimentos o haciendo turnos para resguardarlos- o se sospechaba que colaboraron o estuvieron, siguieron auténticas cacerías, que provocaron huidas masivas -el nombre exacto es “desplazamientos forzados”- hacia Costa Rica de muchísimas personas, incluso de familias enteras. Según ACNUR, a finales de julio más de 23 mil personas habían atravesado la frontera sur para salvarse de la cárcel o de la muerte. En noviembre se hablaba ya de 40 mil.

Los menos viajaron con documentos, la mayoría salió indocumentada. Según fuentes de la zona fronteriza recogidas por “El Nuevo Diario” a inicios de julio, cuando se intensificó la “limpieza”, entre 1 mil y 1 mil 500 personas atravesaban sin documentos diariamente la frontera. A finales

de julio, concluidos esos operativos, el flujo bajó, pero seguían pasando cada día entre 500 y 600 nicaragüenses.

El gobierno de Costa Rica ha sido solidario con quienes llegan, con documentos o sin ellos. Las capacidades del país vecino se han visto desbordadas para atender a quienes hacen filas kilométricas solicitando asilo. En julio el gobierno costarricense estableció dos campos de refugiados para quienes no tienen familiares o conocidos que los acojan en sus hogares. Más de 200 mil nicaragüenses ya vivían en Costa Rica antes de abril.

“HAY PERVERSOS INTERESES”

El régimen de Ortega infiltró entre la comunidad de nicaragüenses en Costa Rica a sus agentes para obtener información, amenazar y hasta asesinar.

El 18 de agosto se dieron graves incidentes violentos en el parque La Merced de San José, con expresiones xenófobas contra la comunidad nicaragüense, que se reúne tradicionalmente en ese lugar. La policía detuvo a 44 personas y decomisó varios cocteles Molotov. En respuesta, una semana después, el 25 de agosto, hubo una masiva manifestación de nicaragüenses y costarricenses en San José con el lema “Ticos y nicas somos hermanos”.

La comandante Mónica Baltodano dijo en una extensa entrevista con Teletica Radio que no le cabía “la menor duda” de que el acto de repudio contra los nicas fue organizado por “agentes del régimen” de Ortega, infiltrados en Costa Rica para perseguir a quienes huyen de la muerte en Nicaragua y para procurar conflictos con el gobierno costarricense por su apertura a recibir a los nicaragüenses y darles el estatus de refugiados.

Coincidió Baltodano con la apreciación de los siete últimos Presidentes costarricenses (Arias, Calderón, Figueres, Rodríguez, Pacheco, Chinchilla y Solís), quienes después de los incidentes publicaron un comunicado en el que se referían a “perversos intereses que pueden estar tratando de destruir nuestra armonía y de azuzar el odio y la xenofobia. No permitamos caer en la tentación”.

REPRIMIR CON LEYES, FISCALES Y JUECES

En la tercera fase de la represión, y después de los operativos de “limpieza” el régimen se concentró, ya sin tranques y barricadas, a “limpiar” de liderazgos todo el territorio nacional y de empleados públicos no “leales” las instituciones del Estado. A unos los secuestraban policías y paramilitares, para que después de encarcelarlos y torturarlos, fiscales y jueces los enjuiciaran y condenaran. A otros los dejaban sin trabajo. A todos los han considerado terroristas.

Aunque la ruta que ha arrancado de sus hogares o en plena calle a centenares de personas para llevarlos a la cárcel y a los tribunales ha estado en todos los casos plagada de ilegalidades, el régimen de Ortega y de Murillo, experto durante once años en retorcer las leyes y acomodarlas a sus intereses o en crearlas a su medida, empleó nuevamente el mismo ardid.

LA LEY ANTITERRORISTA DETERMINARÁ QUIÉN ES TERRORISTA

El 16 de julio, con carácter de urgencia, la Asamblea Nacional, controlada por una mayoría de diputados del partido de gobierno, siempre obsecuentes a Ortega, aprobó una ley antiterrorista, que impone penas de entre 15 y 20 años a quien pretenda, con cualquier acto “alterar el orden constitucional”.

La ley sanciona “a quien por el medio que fuere recolecte, capte, canalice, deposite, transfiera, traslade, asegure, administre, resguarde, intermedie, preste, provea o entregue activos para cometer actos terroristas”, actos que según el régimen pueden ser una marcha o un tranque, una reunión o la impresión de volantes...

“Terrorista” es la etiqueta que el régimen ha colocado a universitarios, jóvenes, campesinos, médicos, periodistas, abogados... porque se oponen a su gobierno. En la narrativa del régimen, “terrorismo” equivale a ejercicio del derecho a la protesta, al ejercicio de los derechos civiles y políticos.

La ley viola artículos constitucionales referidos a los derechos civiles y políticos de los nicaragüenses cuando afirma que será considerado terrorista “quien individualmente o actuando en conjunto con organizaciones terroristas realice cualquier acto destinado a causar la muerte o lesiones corporales graves a cualquier persona o a destruir o dañar bienes o servicios públicos o privados, cuando el propósito de dichos actos, por su naturaleza o contexto, sea intimidar a una población, alterar el orden constitucional u obligar a un gobierno o a una organización internacional a realizar un acto o a abstenerse de hacerlo”.

Quien calificará como terroristas a las personas será el régimen. A lo largo de estos meses han sido detenidas como colaboradoras del proyecto terrorista personas que lanzaron a las calles globos azules y blancos y ha sido sentenciado a cinco años de cárcel un vendedor de banderas azul y blanco la enseña nacional.

Quien determinará quiénes han alterado el orden constitucional será el régimen, que califica como terroristas a quienes han pedido en todas las movilizaciones masivas que Ortega y Murillo “se vayan”...

LA REFORMA A LA LEY DE LA UAF DETERMINARÁ QUIÉN FINANCIA EL TERRORISMO

El mismo día 16 de julio, el Parlamento aprobó una reforma a la ley creadora de la Unidad de Análisis Financiero para ampliar sus facultades. Ahora la UAF puede, sin orden judicial y de manera discrecional, investigar a personas o negocios sospechosos de lavar dinero y de “financiar el terrorismo”.

Apoyada en la Ley de Seguridad Soberana -cuando se aprobó en 2015 el CENIDH la consideró “la amenaza más seria que se cierne contra la vigencia de los derechos humanos en Nicaragua”, la UAF tiene ahora facultades para inmovilizar los activos de cualquier persona de la que suponga financia el terrorismo, entendiendo el terrorismo de forma tan amplia y discrecional como lo entiende la nueva ley antiterrorista...

Sobre el financiamiento al terrorismo, la ley dice que será sancionado también con penas de 15 a 20 años de prisión, “quien, por el medio que fuere, directa o indirectamente, ilícita y deliberadamente, recolecte, capte, canalice, deposite, transfiera, traslade, asegure, administre, resguarde, intermedie, preste, provea, entregue activos, sean estos de fuente lícita o ilícita, con la intención de que se utilicen o a sabiendas de que serán utilizados, en todo o en parte, para cometer o intentar cometer terrorismo...”

En ambas leyes se define el terrorismo y el financiamiento al terrorismo de forma tan amplia que deja a discreción del juez la interpretación y alcance de esos tipos penales, con el único objetivo de que los jueces afines al partido de gobierno legitimen la criminalización de las protestas públicas ciudadanas y la solidaridad entre los nicaragüenses.

Desde que fue anunciada la reforma se hizo previsible la arbitrariedad con que actuará la UAF con estas nuevas facultades “legales”, que le permitirán “escarbar” para aplicar políticas de castigo y represalias contra el empresariado y contra ONG y personas particulares que cuestionen al régimen.

LA ONU ES “CÓMPLICE DEL TERRORISMO”

La Oficina del Alto Comisionado para las Naciones Unidas para los Derechos Humanos -con presencia de un equipo en Nicaragua-, advirtió que la Ley contra el terrorismo aprobada en Nicaragua podría ser usada por el gobierno para “criminalizar las protestas”. De hecho, es lo que ya estaba haciendo el régimen antes de aprobar la ley y lo que ha seguido haciendo después de esta apresurada maniobra legal.

“El texto de la nueva ley es muy vago -dijo el portavoz de la OACNUDH al día siguiente de aprobarla- y permite una amplia interpretación que podría provocar que se in-

cluyera en la definición de terrorista a personas que simplemente están ejerciendo su derecho a la protesta. Es un texto que podría calificar como terroristas a quienes se manifiestan pacíficamente”.

Si contundente e inmediata fue la reacción de Naciones Unidas, insólita resultó la respuesta de la Cancillería de Nicaragua en la nota con la que respondió al organismo de la ONU: “Este tipo de declaraciones los convierte en cómplices de las acciones que grupos terroristas han llevado a cabo, asesinando nicaragüenses y destruyendo nuestro país con miras a derrocar a un gobierno constitucional, democráticamente electo por nuestro pueblo”.

CIENAS DE PRESOS POLÍTICOS Y CIENAS DE DESPEDIDOS POR POLÍTICA

El país llegó a la tercera fase de la represión con centenares de secuestrados, apresados y judicializados, entre ellos líderes universitarios o sectoriales como los dirigentes campesinos Pedro Mena y Medardo Mairena -miembro de la Alianza Cívica y coordinador del movimiento anticanal-, la líder del Mercado Oriental de Managua Irlanda Jerez, o líderes territoriales como los jóvenes dirigentes del Movimiento 19 de Abril de Matagalpa y de Masaya...

Han sido centenares los capturados sin orden de detención, tanto en la calle como en sus casas, tanto de día como de noche. Centenares los llevados a los tribunales en procesos totalmente viciados por un sinnúmero de anomalías: juicios a puertas cerradas, sin que los vean sus familiares, sin disponer de abogados de su elección, víctimas flagrantes de una total falta de garantías... Son presos políticos.

También han sido centenares los empleados públicos despedidos, por no ser leales al régimen, haber participado en las protestas o ser conocidos por sus opiniones críticas. En agosto, la Asociación Médica Nicaragüense denunció los despidos arbitrarios de 135 doctores, doctoras, cirujanos, especialistas, enfermeras, hasta camilleros, de hospitales públicos de todo el país, represaliados por haber atendido, curando o cuidando, a heridos en las protestas o en las “operaciones limpieza” o por no haber mostrado “lealtad” a la política del gobierno.

Los despidos iniciaron en el hospital de León, siguieron en el de Jinotepe, después en el de Masaya... y se extendieron en todo el país. En noviembre ya eran 300 los despedidos en el sistema de salud. Decenas han tenido que huir del país por las amenazas recibidas.

Despidos de “no leales” también se dieron, y se siguieron dando, en colegios, universidades y otras instituciones estatales, siempre sin alegar por escrito la causa del despido y siempre por haber mantenido posiciones críticas..

LA “GUERRA”

CONTRA “LA IGLESIA GOLPISTA”

En las tres fases de la represión han sido destacados los ataques y amenazas del régimen y de sus seguidores a obispos y sacerdotes de la iglesia católica. Ataques en las redes sociales que los denigran. Ataques de los paramilitares, que los han amenazado cuando tocaban las campanas para alertar a la gente de que ellos llegaban o cuando escucharon en sus homilías que animaban al pueblo a ejercer sus derechos. También han sido profanadas varias iglesias en distintos municipios: turbas alentadas por el gobierno entraban al templo, saqueaban, ensuciaban, destruían, robaban y hasta arrojaban las hostias consagradas por los suelos...

Detrás de esta “guerra” está el malestar que las actitudes y las palabras de los obispos, como mediadores y testigos del diálogo nacional, y como coordinadores de los párrocos en todo el territorio, producía en Ortega y en Murillo. La pareja gobernante esperaba de los obispos un papel de “neutralidad” condescendiente que favoreciera los intereses del gobierno y la interpretación que ha hecho de lo ocurrido. “Somos mediadores en el diálogo, pero también somos pastores del pueblo y sensibles ante su dolor no podemos ser neutrales”, dijo el obispo auxiliar de Managua Silvio Báez a un medio oficialista.

DIRIAMBÁ: 9 DE JULIO

En la “guerra” contra la iglesia católica uno de los momentos culminantes ocurrió el 9 de julio, cuando el cardenal arzobispo de Managua Leopoldo Brenes, su obispo auxiliar Silvio Báez, el recién llegado al país representante del Papa, Nuncio Waldemar Sommertag, con varios sacerdotes, llegaron hasta Diriamba para rescatar a uno jóvenes que se habían refugiado en la basílica de San Sebastián para evitar ser capturados por paramilitares después de la “operación limpieza” desarrollada con exceso de violencia en esa ciudad.

Turbas orteguistas predominantemente masculinas, acosaron a los clérigos, los insultaron, y ya en el templo, los golpearon, los hirieron y les robaron teléfonos y hasta la cruz pectoral que llevaba el obispo Báez.

Horas después, en la parroquia Santiago de Jinotepe, otras turbas orteguistas, esta vez predominantemente femeninas, insultaron a los párrocos y entraron en el templo para destruir todo lo que encontraban. Saquearon, robaron y tiraron a la calle bancos, el confesionario y los medicamentos que allí se guardaban para atender a los heridos, prendiéndole fuego a todo lo que habían arramblado. Ataques similares se produjeron en parroquias de Masatepe, Rivas, Jinotega, Matagalpa...

EL MUNDO YA SABE LO QUE PASA EN NICARAGUA

Ha sido tan trágico balance de muerte y atropellos, donde los ataques a la iglesia católica y a sus representantes han tenido un peso especialmente significativo, lo que movió a la comunidad internacional a volver sus ojos, primero sorprendidos, después indignados, hacia Nicaragua.

El mundo ya sabe lo que pasa en Nicaragua. Y si no tiene total claridad sobre el cúmulo de agravios, abusos y arbitrariedades, también crímenes, que motivaron el estallido de abril, sí observa con extrema preocupación el inaceptable presente y el incierto futuro de nuestro país. Documentales, testimonios, videos, informaciones... han mostrado al mundo entero el ataque despiadado con que Ortega ha pretendido sofocar el derecho a la protesta que ejerce buena parte del pueblo nicaragüense exigiendo un cambio de gobierno. Lo que escuchan y ven les revela la naturaleza criminal de un régimen que practica el terrorismo de Estado.

11 DE JULIO: OEA Y ALMAGRO DEFINEN SU PAPEL

Como correspondía, la OEA ha encabezado la ocupación y la preocupación por la crisis de Nicaragua. A partir del 5 de junio, y una vez colocado por primera vez el tema de Nicaragua sobre la mesa, con una declaración aún muy tibia, la OEA siguió avanzando con una rapidez nada usual ni en ese organismo ni en las “cocinas” de la diplomacia.

A partir de finales de junio el lenguaje del secretario general de la OEA, Luis Almagro, comenzó a variar, superando sus confusas declaraciones anteriores sobre la realidad de Nicaragua.

Fue hasta el 11 de julio, en la segunda reunión extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA para conocer una resolución elaborada por siete países, que responsabiliza de la represión al régimen de Nicaragua, y cuando ya Ortega había rechazado cualquier posibilidad de adelantar las elecciones, cuando Almagro modificó su discurso, dejando claramente establecida cuál es su posición sobre Nicaragua.

En su discurso, dijo cosas como ésta: “A un pueblo agredido por su propio gobierno, por el gobierno que eligió para proteger y garantizar sus derechos, es al que más debemos apoyar, desde la denuncia y desde los instrumentos diplomáticos que tenemos a disposición... Ningún país es sustentable en clave de derechos, o en clave social y económica si un gobierno pretende sostenerse sobre la base de la fuerza y la represión. Ningún país es sustentable si la ecuación política cae en una lógica de medir la fuerza por medio de la violencia”.

Ese 11 de julio quedó claro el papel que la OEA jugará en la crisis de Nicaragua. Hasta abril, Almagro acordaba

bilateralmente con Ortega cada paso que daba o que iba a dar en la reforma profunda que requiere el colapsado sistema electoral nicaragüense -una auténtica maquinaria de fraudes desde 2008-, para que en nuestro país pueda haber por fin unas elecciones libres. Hasta abril todo se reducía a lo que acordaban Ortega y Almagro y a lo que dictaba el calendario: elecciones con un sistema “depurado” por la OEA con la anuencia de Ortega y hasta el año 2021. A partir de julio, la OEA se comprometió a impulsar una agenda internacional para que Nicaragua se encaminara hacia unas elecciones anticipadas.

El 13 de julio el Consejo Permanente de la OEA volvió a reunirse en una nueva sesión extraordinaria para votar el texto definitivo de la resolución impulsada por Costa Rica, Canadá, Estados Unidos, Argentina Colombia, Chile y Brasil sobre la crisis en Nicaragua.

El texto expresaba una “enérgica condena” a “todos los actos de violencia, represión, violaciones de derechos humanos y abusos, incluyendo aquellos cometidos por la Policía, grupos parapoliciales y otros actores contra el pueblo”. La base para redactar este texto fue el informe de la CIDH. La resolución responsabilizaba ya claramente al régimen de Ortega y Murillo por la violencia y lo instaba a convocar elecciones anticipadas.

UN INOLVIDABLE VIERNES 13

El día en que esta importante resolución se presentaba a debate en el Consejo Permanente fue una jornada intensa en la que se enlazaron varios acontecimientos que reflejaron en sólo unas horas la tragedia a la que el régimen Ortega-Murillo estaba arrastrando al país.

La Alianza Cívica había decretado un segundo paro nacional para el viernes 13 de julio. Se estaba cumpliendo cabalmente desde primeras horas de la mañana, cuando en la tarde Ortega y Murillo, desafiando el paro, organizaron una caravana de varios kilómetros, con vehículos del Estado para “celebrar” en Masaya el anual Repliegue, en memoria de una de las gestas que el FSLN protagonizó en 1979 cuando luchaba contra Somoza.

Masaya no los recibió con música y pólvora, como fue tradicional durante décadas. La ciudad entera les cerró las puertas. Y mientras la caravana se quedaba en la carretera, el vehículo en que viajaba la pareja, rodeado de escoltas motorizados atravesaba en silencio las calles desoladas. Tampoco pudieron llegar hasta el barrio indígena de Monimbó. Decenas de barricadas se lo impedían. La “celebración” la tuvieron a puertas cerradas en el cuartel de la Policía.

Horas después, fuerzas policiales y parapoliciales iniciaron un ataque, que duraría 15 horas, hasta la madrugada

da del día siguiente, contra los dos centenares de estudiantes que desde junio ocupaban el recinto y el campus de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN) en Managua. El ataque, con armas de alto calibre, se extendió a la iglesia de la Divina Misericordia, cercana a la UNAN, donde los jóvenes se refugiaron con algunos sacerdotes, tres periodistas nacionales y un periodista de “The Washington Post”, quien narró después un acontecimiento que conmovió a la comunidad internacional.

En el templo murieron de un balazo en la cabeza un muchacho de 20 años, apasionado del baile folklórico, y un adulto que acompañaba a los jóvenes. Muchos estudiantes heridos fueron atendidos allí por médicos. En la madrugada, y por gestiones del Nuncio Sommertag, los jóvenes fueron entregados a sus familias. Las paredes del templo quedaron atravesadas por los potentes disparos y así se conservarán.

En la misma tarde del viernes 13 el régimen detuvo en el aeropuerto a los líderes campesinos Medardo Mairena -miembro de la mesa del diálogo nacional- y a Pedro Mena. Viajaban a Estados Unidos a un acto de solidaridad con Nicaragua. Fueron encarcelados, acusados por siete delitos vinculados al terrorismo, y severamente torturados.

Durante la sesión de la OEA del viernes 13, el propio Almagro pidió inútilmente al gobierno de Nicaragua detener el ataque a la UNAN. Ese día reafirmó la posición que había expresado tres días antes: “No podemos convivir en las Américas con episodios violentos como los que han ocurrido en Nicaragua desde abril”.

ORTEGA AISLADO EN LA OEA

Tan sólo cinco días después, el 18 de julio, la OEA convocó una nueva sesión extraordinaria del Consejo Permanente para someter finalmente a votación la resolución presentada el día 13. Después de casi una hora en que el canciller de Nicaragua y la representante de Venezuela no tuvieron éxito en obstruir, no sólo la votación, sino la propia sesión, los votos de 21 de los 34 países que integran la OEA apoyaron el texto. Todos los países de peso en el continente, excepto Venezuela, respaldaron la “enérgica condena” a la represión del régimen de Ortega.

La derrota del régimen de Ortega-Murillo fue aún más clara cuando el canciller de Nicaragua se empeñó en someter a votación una resolución “para restablecer la paz en Nicaragua”, que reitera la versión oficial sobre lo que ocurre en el país: no es la rebelión cívica de una mayoría del pueblo, sino un “golpe de Estado” de fuerzas “terroristas”. Ese texto sólo obtuvo 3 votos favorables, uno de ellos el de Nicaragua.

Gonzalo Koncke, jefe de gabinete de Almagro dijo ese día que la resolución era de “gran trascendencia” y que la votación favorable “era la respuesta de la comunidad interamericana ante la situación trágica que vive Nicaragua, con un número de muertos escalofriante”. Ese día quedó fijada cuál es y será la correlación de fuerzas en la OEA, claramente desfavorable a Ortega.

TODO EL MUNDO VA SABRIENDO LO QUE PASA EN NICARAGUA

El día antes de la reunión en la OEA, 12 países latinoamericanos integrantes de la CELAC (Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños), una instancia creada por Hugo Chávez en sus mejores tiempos, se reunieron en Bruselas con los países de la Unión Europea. Pidieron lo mismo que la OEA: cese de la represión y elecciones anticipadas.

Ese mismo día siete ex-Presidentes de Costa Rica escribían al secretario general de la ONU, António Guterres, de visita en San José, pidiéndole la intervención de Naciones Unidas “para promover una solución que restablezca, a la brevedad posible, la paz y la democracia en Nicaragua”.

La presión diplomática se aceleró. El 2 de agosto volvió a reunirse el Consejo Permanente de la OEA en sesión extraordinaria para aprobar una nueva resolución sobre Nicaragua. Estableció la conformación de un grupo de trabajo integrado por representantes de doce países de la OEA que, en coordinación con otros organismos internacionales y regionales, contribuya a lograr una salida a la crisis en el diálogo nacional.

Antes de que la resolución fuera aprobada (20 votos a favor y 4 en contra), el canciller nicaragüense afirmó tajantemente que el gobierno no permitiría que el grupo de trabajo ingresara a Nicaragua. Y así fué. El régimen no les ha abierto las puertas.

TAMBIÉN EUROPA Y LA ONU

Mientras esto ocurría en la OEA, la principal representante de la Unión Europea para Política Exterior, Federica Mogherini, escribía una carta al canciller de Nicaragua pidiendo “el fin inmediato de la represión y de las detenciones arbitrarias” y que “los grupos armados irregulares sean desmantelados”.

Desde Ginebra, la máxima autoridad de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein, quien venía haciendo declaraciones muy firmes sobre lo que pasaba en Nicaragua, no sólo condenando los trágicos eventos recientes, sino calificándolos como “el resultado de la erosión sistemática de los derechos humanos a

lo largo de los años”, se refirió a las denuncias que estaban recibiendo los miembros de la OACNUDH ya presentes en Nicaragua: “Mi equipo -dijo- escucha testimonios de profunda frustración y desesperación, también de miedo generalizado”.

LA CELEBRACIÓN DE OTRO 19 DE JULIO

Todavía en marcha la sangrienta “operación limpieza” y al día siguiente de aprobada la resolución de la OEA, Daniel Ortega y Rosario Murillo celebraron otro 19 de Julio, el 39 aniversario de la Revolución que derrocó la dictadura de Somoza.

En un escenario similar al de otros años Ortega lanzó un discurso en el que se presentó ante sus bases como el guerrero que ha concluido, y ha ganado, una guerra. Por primera vez hizo esa tarde su personal relato sobre los sucesos de abril, proyectándose en la narrativa como el gobernante que con paciencia fue descubriendo de qué se trataba lo que pretendían sus oponentes hasta dar con la clave: se trataba de un plan golpista.

Buena parte de su discurso la dedicó a atacar a los obispos, a los que señaló como activos en ese plan, al que calificó de “diabólico”.

El vigor con el que habló buscaba alentar a sus seguidores. Los llamó a fortalecer las “autodefensas”. A partir de ese día han escrito “Plomo” en las paredes y cantan una canción que repite y repite la misma frase: “Aunque te duela, aunque te duela, el comandante se queda”. Se quedaba, eso repitió Ortega en la tarima del 19 de Julio, hasta las elecciones de 2021.

LLUVIA DE ENTREVISTAS

La celebración del 39 aniversario de la Revolución no pasó desapercibido en el mundo. El triunfalista y belicoso discurso de Ortega acumuló “carbones sobre su cabeza”, y como declararse victorioso después de derramar tanta sangre parecía estar empeorando su imagen internacional, él, que en una década no ha dado una sola rueda de prensa ni ha permitido entrevistas a ningún medio nacional, las solicitó y concedió días después a medios internacionales: Fox News, Telesur, Euronews, CNN, France 24, BBC, Grayzone Project, Rusia Today...

Si el propósito era mejorar su imagen, la empeoró. A cada periodista le dio versiones distintas sobre los hechos, especialmente cuando respondía a la pregunta sobre los paramilitares encapuchados que han aterrorizado a la población, tema clave sobre el que todos querían saber.

Después de la entrevista que Ortega dio a Fox News, el canal de noticias que ve el Presidente Trump, no hubo ninguna reacción de Trump sobre lo que le pidió implícitamente Ortega: una entrevista con él. Sí hubo reacción inmediata del Vicepresidente Mike Pence. Concluyendo la entrevista, escribió: “La violencia patrocinada por Ortega es innegable. Su propaganda no engaña a nadie ni cambia nada”.

HABLA HUMBERTO ORTEGA

La entrevista que concedió quien fuera Jefe del Ejército Humberto Ortega a CNN en los mismos días en que Ortega daba entrevistas a varios medios fue un total desmentido a las versiones y confusiones, calculadas o no, de su hermano.

Humberto Ortega calificó de “condenable” la violencia con que en abril el régimen respondió a las primeras protestas de los universitarios. “El gobierno no supo manejar la situación”, dijo. Hizo “principal responsable” de la “represión tan indiscriminada” que siguió después “al Estado, que tiene un gobierno”, dando por supuesto, insistentemente, en ésta y en todas las respuestas que dio a otras preguntas, que quien está al frente del gobierno de Nicaragua es Daniel Ortega, negando implícitamente que la responsabilidad de la matanza fuera sólo de Rosario Murillo.

Humberto Ortega señaló que “el problema más importante que tenemos que solucionar en la mesa de diálogo es el de las fuerzas parapoliciales, que están fuera de la ley”. Afirmó que “todo el pueblo las ha visto campantemente por todos lados causando terror y acompañando a la Policía... Son las que han provocado la mayor cantidad de violencia y muerte”.

Advirtió que “el gobierno no puede legitimar a irregulares armados”, y fue especialmente enfático al afirmar: “¡El Ejército no puede tolerar eso!” Para Humberto Ortega las elecciones “son la llave y se tienen que adelantar”. También dio su respaldo a los obispos y al formato de diálogo nacional que ya había, considerándolo el espacio en donde se debe llegar a acuerdos que pongan fin a la crisis con elecciones anticipadas.

ESTADOS UNIDOS: UNANIMIDAD DE VISIÓN

“Estados Unidos va a hacer todo lo posible para que Nicaragua regrese a la democracia. Todas las opciones están sobre la mesa, la opción militar en este momento no”. Eso es lo más directo que le ha dicho a Ortega, y que ha dicho también a los medios, el embajador de Estados Unidos ante la OEA, Carlos Trujillo.

Hasta finales de julio Estados Unidos había actuado con sanciones y declaraciones mostrando, tanto la Casa Blanca como el Congreso, tanto demócratas como republicanos, una misma visión de condena al gobierno de Nicaragua y un mismo compromiso con una salida por la vía electoral. En dos oleadas, el Departamento de Estado había revocado visas a decenas de funcionarios del gobierno y a sus familias, aunque no dá los nombres de los desvisados. Tres funcionarios del entorno cercano a Ortega habían sido sancionados por la Ley Magnitsky desde abril y se esperaban más nombres.

A mediados de julio, el Departamento de Estado declaró: “Cada víctima adicional de la campaña de violencia e intimidación del gobierno promueve el socavamiento de la legitimidad de Ortega”. Y al cumplirse los 100 días de la insurrección de abril, la representante de Estados Unidos ante la ONU señaló en el recinto de Naciones Unidas que las muertes en Nicaragua en ese lapso (295) superaban las provocadas en Venezuela en 100 días de protestas (112).

EL CAOS ES ORTEGA

Una de las ideas clave en la que Ortega no se contradijo, la que pretendió dejar bien asentada en todas sus entrevistas internacionales, es la de que si él renunciara en el país se crearía un vacío de poder, una anarquía. Quiso sembrar la idea de que sin él habría en Nicaragua un caos.

Tal vez alguien lo pensó así antes de abril. Pero a 100 días del estallido de abril la comunidad internacional ya estaba clara de que su régimen ha perdido toda autoridad moral y toda capacidad política para enfrentar los desafíos del futuro que su barbarie dejará en el país.

Es la política represiva, el terror impuesto, la masiva violación de derechos humanos para mantenerse en el poder a costa de todas las sangres, lo que ha ido unificando criterios en la comunidad internacional. El mundo ya sabe lo que pasa en Nicaragua: no es “Ortega o el caos”, el caos es Ortega.



Entre la incertidumbre del final y la esperanza del “vamos ganando”



Al iniciar el mes de septiembre era muy incierto cuándo el estallido de abril tendría una salida esperanzadora. Dos narrativas sobre el origen de la crisis y de lo que sucedió después, la del régimen y la de la rebelión cívica, se consolidaban, polarizando a un país herido y parecen irreconciliables, mientras que los efectos de la crisis política en la economía se hacían cada vez más preocupantes.

“TODO TE DEJAMOS PASAR”

En abril, y aún en mayo, se veía más cercana la solución de la crisis. El desproporcionado uso de la fuerza que el régimen empleó contra las primeras protestas de los estudiantes, segando la vida de tantos, crímenes que no se detuvieron ni un solo día desde el 19 de abril, alimentaron expo-

nencialmente la indignación popular y desataron una escalada represiva.

“Todo te dejamos pasar, pero jamás hubieras tocado a nuestros chavalos”, decía la pancarta dirigida a Daniel Ortega que una mujer había escrito a mano y alzaba en la primera movilización masiva de abril. Esas primeras muertes de jóvenes explican cómo empezó todo, cuál fue la chispa, el origen de la rebelión: crímenes el gobierno se niega a reconocer que sucedieron. Esa primera chispa encendió un incendio, “resultado de agravios con profundas raíces”, como se lee en el informe de Naciones Unidas.

El gobierno respondió al incendio “disparando a matar” como denunció Amnistía Internacional en su informe de mayo. Resultado: la mayor matanza jamás vista en Nicaragua en tiempos de paz. Tantos crímenes alimentaron la rebelión.

Hasta el 24 de agosto, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) eran ya 322 las personas muertas como saldo del conflicto y más de 2 mil los heridos. En esas cifras había también muertos y heridos del lado de quienes defendían al régimen, porque hubo reacciones de legítima defensa y hechos de violencia en respuesta a la violencia institucional. Lo reconoce la ONU en el informe que presentó a fines del mes de agosto. También lo reconoce la CIDH, que volvió a reiterar al concluir agosto: “La gran mayoría de víctimas fallecieron como resultado de la acción estatal o de fuerzas parapoliciales al servicio del Estado”.

La gran mayoría perdió la vida ejerciendo el derecho de reclamar derechos, justicia y democracia, otro gobierno, otro país. Los que la perdieron impidiendo ese derecho van también a la cuenta del régimen, que los mandó a matar o a morir. Ésta es la esencia, el núcleo original de la narrativa de quienes se oponen al régimen. Es compartida por dos organismos internacionales de derechos humanos: la CIDH, máximo organismo regional, y la OACNUDH, máximo organismo mundial.

“FUE UN GOLPE DE ESTADO TERRORISTA”

La narrativa del régimen niega que hubiera protestas ciudadanas reprimidas con armas de fuego, niega que se haya violentado el derecho a la protesta. Y afirma que lo que hubo fue golpe de Estado terrorista planificado, organizado y financiado desde Estados Unidos, al que el Estado tuvo que responder para defender el orden constitucional.

No hay duda de que después de seis meses de crisis sería extraño que Estados Unidos no se interesara en sacar alguna ganancia del conflicto. Recursos y experiencia les sobran. Y por sobre todo, las excelentes relaciones que Ortega mantuvo durante más de una década con Washington, casi obligaba a Washington a interesarse en Nicaragua. Sin embargo, el interés del Norte en la crisis de Nicaragua es consecuencia de la crisis y no causa de su origen.

Que lo ocurrido fuera un golpe de Estado fue una idea plantada por la delegación gubernamental en una de las primeras sesiones del diálogo nacional, cuando la Alianza Cívica, con la mediación de los obispos, propuso como salida a la crisis anticipar las elecciones. Después, el régimen organizó las “operaciones limpieza” para recuperar el control territorial que centenares de tranques y barricadas le habían quitado.

Fue la etapa en la que corrió más sangre en un enfrentamiento extremadamente desigual. Así describe ese momento el informe de la ONU: “A medida que la crisis se desarrollaba el nivel de violencia contra los manifestantes por parte de la policía y de civiles armados aumentó aún más, y

también lo hizo el nivel de resistencia de algunos individuos participando en los tranques. Existe amplia información sobre el uso de medios violentos por algunos manifestantes, incluyendo piedras, morteros, armas improvisadas y armas de fuego (fundamentalmente rifles). Sin embargo, no se encontró evidencia de que estos actos violentos hayan sido coordinados o respondieran a un plan preexistente”.

COMO EN LOS AÑOS 80

Concluida la “limpieza”, el régimen terminó de perfilar su versión de los hechos e impuso un “punto final” a su narrativa: en abril hubo un intento de golpe de Estado, los tranques nunca fueron cívicos, en ellos habían terroristas armados y en los tranques torturaban, asesinaban y robaban. El Estado tuvo que defenderse de golpistas terroristas que buscaban imponerse, pero fueron derrotados y están siendo juzgados como lo que son: terroristas.

El 7 de agosto, después de haber estado presentando cifras contradictorias y dispares sobre las muertes ocurridas desde abril, el régimen fijó un número definitivo y una nueva consigna: “Fueron 198. ¡Ellos los mataron! ¡Que paguen por sus crímenes!” En su narrativa, todos los muertos los causaron los terroristas, nadie cayó por disparos de fuerzas oficiales.

La narrativa oficial ha buscado cohesionar a las bases que aún conserva el FSLN de Ortega y convencer a la “izquierda” internacional, asemejándola a la narrativa de los años 80, cuando el gobierno “revolucionario” era víctima de una agresión armada financiada desde Estados Unidos.

No ha habido variante alguna sobre esta versión de lo ocurrido. Lo que hemos visto, en el discurso y en las acciones diarias, es una persistente “huida hacia delante” que parece no tener vuelta atrás. Tiene lógica: durante más de una década la pareja gobernante avanzó, sin mayores obstáculos, en un proyecto dinástico con el fin de perpetuarse en el poder. Desde abril se resisten a aceptar que un plan tan cuidadosamente acariciado se haya hecho trizas inesperadamente. Y así, del terror que les ha causado su propio fracaso ha nacido la política de terror con la que han respondido.

NACIONES UNIDAS: NO HUBO GOLPE DE ESTADO

El informe elaborado por la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas (OACNUDH), que cubre los sucesos de los primeros cuatro meses de la crisis (18 abril-18 agosto) fue presentado en Ginebra y en Managua el 29 de agosto.

Este informe cuestiona la narrativa del régimen: “En lugar de reconocer cualquier responsabilidad por actos ilícitos o indebidos durante la crisis, el Gobierno ha culpado a los líderes sociales y de la oposición, a las personas defensoras de los derechos humanos y a los medios de comunicación, por lo que ha denominado “violencia golpista”, así como por el impacto negativo de la crisis política en la economía nacional. Más aún, el Gobierno ha atribuido la responsabilidad por todos los actos de violencia a aquellos que participaron en las protestas, incluidas las 197 muertes oficialmente reconocidas hasta el día 25 de julio”.

Al presentar el informe, Guillermo Fernández Maldonado, coordinador en Nicaragua de la OACNUDH, dijo: “Desde la primera reunión que estuvimos en Cancillería, la narrativa de un golpe de Estado fue lo que se nos planteó. Lo que nosotros dijimos es que si ésa era la visión, que nos dieran acceso a la información y a los lugares que la ratificaran y si encontrábamos efectivamente los hechos que sostienen esa visión lo haríamos público. Sin embargo, no nos han respondido ninguna de las solicitudes de información, ni nos han permitido salir de Managua ni ir a ninguno de los lugares que propusimos. La información a la que hemos tenido acceso no apoya esa visión. No hay ningún indicio de golpe de Estado. Por el contrario, desde la perspectiva de derechos humanos lo que hemos encontrado son acciones gubernamentales para responder a una protesta cívica, que están en contra del derecho internacional de los derechos humanos”.

“UN INSTRUMENTO DE LA POLÍTICA DEL TERROR”

El 30 de agosto Daniel Ortega difamó el informe de Naciones Unidas presentado el día anterior. “Cada vez más en el mundo -dijo ante sus seguidores- ya nadie cree en los organismos internacionales porque se convierten en instrumento de los poderosos, de los que imponen sus políticas de muerte sobre los pueblos del planeta Tierra... Estos organismos de Naciones Unidas, en este caso este organismo que tiene que ver con Derechos Humanos, no es más que un instrumento de la política de la muerte, de la política del terror, de la política de la mentira, de la política de la infamia. ¡Son infames, infames!”

Esa misma noche la Cancillería enviaba al representante de la Oficina de la ONU un mensaje: su estancia en Nicaragua había concluido. Una expulsión de facto.

El informe de la OACNUDH llegó el 5 de septiembre al Consejo Permanente de Naciones Unidas, un gran paso para que las masivas violaciones a los derechos humanos cometidas por el régimen Ortega-Murillo trascendieran finalmen-

te el ámbito regional de la OEA y comenzaran a ser conocidas en el organismo mundial. Esto inauguró en el país un tiempo de esperanzas en medio de tantas incertidumbres.

OJOS Y OÍDOS INTERNACIONALES

Ha sido el tema de los derechos humanos el que ha abierto los ojos del mundo a lo que pasa en Nicaragua. Y el logro político más significativo arrancado a Ortega por la rebelión cívica ha sido forzarlo para que tuviera que admitir la presencia en Nicaragua de organismos regionales e internacionales de derechos humanos.

Sin embargo, tanto el Mecanismo de Seguimiento (MESENI) de la CIDH, como los cuatro profesionales del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), como el equipo de la OACNUDH, que Ortega tuvo que invitar forzosamente al país a finales de julio, no han podido realizar su trabajo.

El único grupo que logró movilizarse libremente y recoger evidencias fue el equipo de alto nivel de la CIDH que estuvo en el país en mayo y que produjo un informe contundente que puso en alerta a la OEA. Ortega nunca esperó un informe de esa naturaleza. Por eso, lo ha descalificado, tanto en el seno de la OEA como en sus entrevistas internacionales. “Miente, miente todos los días”, dijo Ortega del secretario ejecutivo de la CIDH Paulo Abrão en una de ellas.

ENCONTRARON UNA MURALLA

A los otros “ojos y oídos internacionales” los ha desconocido. De hecho, han sido ninguneados por todas las autoridades. El equipo de la OACNUDH fue expulsado de facto después de publicar su informe. Al equipo del MESENI y a los expertos del GIEI les ha tolerado que emitan comunicados, que hagan ruedas de prensa, que estén en el país, pero ante ellos colocó una muralla.

Las solicitudes del equipo del MESENI para visitar las cárceles o para asistir a los juicios de las personas acusadas de “terrorismo” o simplemente para viajar fuera de Managua a algunos puntos del país para hablar con la población que ha sido víctima de represión han sido ignoradas. Todo lo que solicitan deben tramitarlo con la Cancillería y la Cancillería no responde.

Igualmente, las solicitudes de los expertos del GIEI para acceder a los expedientes forenses, judiciales y policiales de los casos que deben investigar nunca les han sido entregados. El MESENI no deja de solicitar colaboración. El GIEI dijo en sus dos primeras comparencias públicas que no sólo no les facilitan el trabajo ni colaboran, sino que les ponen obstáculos.

El régimen Ortega-Murillo sabe que el instrumento más eficaz para colocar a Nicaragua en el radar internacional ha sido el tema de los derechos humanos. Por eso, para sostener su narrativa, aunque no tuvo más remedio que invitarlos, no tiene más remedio que levantar una muralla ante quienes los evidencian y señalan su responsabilidad.

NADA ESTÁ NORMAL

A cinco meses de la insurrección de abril, la narrativa oficial se “enriqueció” con la afirmación de que en el país ya todo estaba normal... o se estaba normalizando.

Después de dos meses de dificultades en la circulación por carreteras y caminos, el desmantelamiento de los tranques normalizó el tránsito por todas las vías del país. Pero, más allá de ese “logro”, tan costoso en sangre, que tanto deslegitimó a Ortega y a Murillo, ninguna otra realidad volvió a la normalidad en Nicaragua.

Además del luto y la zozobra de las miles de familias que lloran a sus muertos, que viven cuidando heridos, que no cesan de buscar a los desaparecidos, que están ansiosas por la suerte de los miles que han tenido que irse a Costa Rica o están por irse, es la economía la que evidencia la creciente anormalidad.

El presidente del Banco Central anunció en junio que en julio y agosto se normalizaría la situación y se compensarían las pérdidas económicas de abril y mayo, pero nada mejoró... Todos los bancos del país publicaron en los diarios extensas listas de clientes en mora. Los bancos han restringido los créditos. La banca quedó atrapada entre la fuga de depósitos de sus clientes (más de 1 mil millones de dólares en octubre) y la mora de quienes no pueden pagarles.

En septiembre la inversión nacional y extranjera estaba paralizada y una buena parte de las donaciones congeladas. Con la caída de la cooperación petrolera venezolana, las reservas internacionales del país se fueron reduciendo. Un cuarto de millón de personas había perdido sus empleos. El turismo estaba severamente reducido, y será extremadamente difícil una rápida recuperación, porque la imagen del país es negativa: venir a Nicaragua representa un riesgo. El sector de la construcción, el del comercio y el de servicios eran los más afectados. El consumo se había reducido en un 70% y en consecuencia, la recaudación fiscal había caído bruscamente.

La anormalidad se reflejaba también en las calles. Cuando caía la noche caía gran parte de la actividad en ciudades y zonas rurales. Son muchas las familias que dejaron de enviar sus hijos a las escuelas para protegerlos de la inseguridad. Son miles los alumnos y alumnas de las Universidades del país que no han terminado el año académico. Muchos

porque tuvieron que huir del país. Otros porque se declararon en “rebeldía académica” con la consigna “Sin autonomía, calles llenas y aulas vacías”. Otros porque temen llenar las aulas y ser víctimas de la cacería de jóvenes que el gobierno ha desatado. Otros porque por la crisis económica sus familias ya no les pueden pagar los estudios.

RECUPERAR LAS CALLES Y HACER SENTIR QUE “YA PASÓ TODO”

Ciertamente, a cinco meses después de abril se redujo el número de asesinatos, pero nunca se detuvo la cacería de jóvenes y de cualquier persona sospechosa de haber participado en las protestas. Las continuas detenciones ilegales, que han multiplicado el número de presos políticos impiden que la población “sienta” que el país ya está normal.

El régimen ha buscado “normalidad” promoviendo en los municipios competencias deportivas, ferias de comida o de artesanías, eventos musicales... Los noticieros de los canales oficiales están llenos de “noticias de normalidad”. Las tomas buscan mostrar la participación y alegría de los participantes, pero no siempre lo logran.

Para imponer “normalidad”, el régimen decidió recuperar el control de las calles. Las últimas marchas azul y blanco masivas que se realizaron en Managua sin ser impedidas ni intimidadas en su origen fueron las del 15 y el 18 de agosto. A partir de esas fechas hubo cuatro marchas masivas en Managua, intimidadas y asediadas. La población las burló y marchó por otras rutas. En la del 23 de septiembre, la última que fue especialmente asediada, un paramilitar a vista de periodistas y participantes, asesinó de un tiro a un chavalito de 16 años, Matt Romero. Así, hasta que el 28 de septiembre, la Policía, en un comunicado ilegal declaró “ilegales” las marchas...

Otro método que empleó el régimen desde septiembre para recuperar las calles fue organizar continuas marchas de apoyo a Ortega con empleados públicos principalmente, y en Managua tomarse diariamente todas las rotondas de la capital, con empleados públicos que, unos por las mañanas y otros por las tardes debían realizar ese “trabajo”. El objetivo es imponer a la población la imagen de que “el comandante se queda”, que la población sienta que “ya ganaron” y que “ya pasó todo”.

CINCO MESES DESPUÉS...

Cinco meses después de abril, la pregunta acuciante en todas partes era cómo, cuándo, terminará esto, cuál será la solución, pues era palpable que el conflicto que detonó el estallido de abril no se había resuelto ni se resolverá im-

niendo o reprimiendo, sea porque la economía le estaba poniendo límites a la pretensión de Ortega de “quedarse”, sea porque la mayoría de la población mantenía firme la determinación de impedirlo y lograr un cambio.

En septiembre nadie negaba que la brutal política del terror había tenido sus efectos. Había afectado el ímpetu inicial de las protestas cívicas. Había ciendes de hogares enlutados por los muertos, miles de hogares atendiendo aún a heridos graves y otros centenares de hogares desesperados por sus familiares capturados, apresados y enjuiciados como terroristas. Miles de personas habían tenido que huir a Costa Rica buscando salvar sus vidas. El colapso de una economía de por sí frágil había dejado ya a otros miles en el desempleo y estaba a las puertas una severa crisis financiera.

¿VAMOS GANANDO?

Una de las consignas que más ha pegado en la población es la lanzada a diario por el analista político Jaime Arellano, que entrevista en el canal de televisión 100% Noticias a personajes de la vida nacional. “Vamos ganando” reitera apasionadamente Arellano y lo argumenta de forma didáctica.

Ciertamente, Daniel Ortega y Rosario Murillo están ya derrotados estratégicamente. La derrota estratégica de Ortega se basa en su ilegitimidad, una mancha que lo acompaña desde su reelección en 2016, cuando se apropió del gobierno por tercera vez consecutiva en unos comicios sin oposición, sin observación ni nacional ni internacional, y con índices de abstención nunca vistos en el país.

La derrota estratégica de Murillo es ya presentida: con la brutalidad represiva con la que ella y él respondieron al despertar de la conciencia, jamás conseguirá lo que soñó: llegar a la Presidencia de Nicaragua. La represión hizo ilegítimos a ambos y derrotó el modelo que construyeron durante una década.

El movimiento insurreccional de buena parte del pueblo nicaragüense contra el régimen de Ortega va “ganando” estratégicamente al mantener e insistir, a costa de todo, en el carácter cívico y pacífico de la lucha. El precio que ha pagado por esa determinación cívica ha sido altísimo. Es ese precio pagado en sangre y en dolor el que abrió finalmente los ojos de la comunidad internacional a lo que estaba pasando en Nicaragua. Eso ha aislado a Ortega, lo ha desenmascarado y lo mantiene desprestigiado y aislado. Por los ojos de repudio con los que hoy lo mira el mundo, la rebelión cívica va ganando.

UNA JUVENTUD VALIENTE Y UNA NACIÓN MÁS UNIDA

Otras ganancias, estratégicas por ser promesas de un futuro mejor para Nicaragua, tiene en su haber la rebelión cívica. Una es el despertar de la juventud, que con valor y decisión abrió el camino para el despertar de muchos. Otra es la incipiente y embrionaria unidad nacional a la que la gravedad de la crisis ha llevado a diversos sectores sociales, a variados intereses y a distintas generaciones para enfrentarse juntos a la dictadura.

Después de abril la rebeldía se convirtió en virtud para buena parte de la juventud, que se rebeló contra “el pensamiento único” que trató de imponer el régimen. Mucha de la juventud rebelde tiene raíces sandinistas. La rebelión tiene en su haber el que han quedado más definidas que nunca las fronteras entre Sandinismo y Orteguismo, ganancia más significativa teniendo en cuenta que en el proyecto dinástico era crucial transformar el partido FSLN apartando a los combatientes y militantes históricos, con trayectoria y memoria histórica, para rehacerlo con jóvenes, sin otro requisito que ser ciegamente incondicionales del culto a la personalidad de Ortega.

La crisis ha demostrado también que existen en nuestro país sólidos liderazgos nacionales y locales, jóvenes y no tan jóvenes, empresariales y sociales, de mujeres y de hombres. Contamos con un capital humano a la altura de lo que está exigiendo el presente y coherente con los desafíos que traerá un futuro que, desde este tiempo de tantas incertidumbres, y de tantas esperanzas, ya avizoramos extremadamente complejo.



Resistencia azul y blanco ante el estado de excepción



A seis meses de la insurrección de abril, Nicaragua entró en un estado de excepción no declarado, la economía seguía en picada y las sanciones de Washington estaban listas para ser aprobadas. La incertidumbre aumentaba frente a la obcecación de la pareja dictatorial por permanecer en el poder, sin conocer ni límites ni escrúpulos.

“DE UN ESTADO DE DERECHO A UN ESTADO DE EXCEPCIÓN”

El 26 de septiembre la comisión de relaciones exteriores del Senado de Estados Unidos inició el proceso legislativo destinado a sancionar a la dictadura Ortega-Murillo con un complejo arsenal de severas y abarcadoras sanciones económicas y políticas. Dos días después, la Policía de Or-

tega amenazó con procesar judicialmente a cualquier persona o grupo que convocara manifestaciones, calificándolas de “ilegales”, arrogándose atribuciones que no le corresponden y violentando derechos civiles y políticos garantizados por la Constitución. Desde la CIDH, habló su director Paulo Abrão: “Nicaragua se está transformando de un Estado de Derecho en un Estado de excepción”.

El régimen, que desde abril ha usado y abusado del monopolio de la fuerza, parecía cada vez más decidido a recuperar por la fuerza el monopolio de las calles para demostrar que “el Estado son ellos”.

Y para demostrarle a Washington que no les importan las sanciones, que tienen control del país y que “después de ellos... el diluvio”, que sin ellos no habrá en Nicaragua ni estabilidad ni orden, que sin ellos habrá un vacío de poder, el caos...

ANTE LA RESISTENCIA AZUL Y BLANCO LA “PAX ROMANA”

La obstinación de Ortega y de Murillo de no negociar, de no dialogar, de no convocar elecciones anticipadas, de no brindar una sola señal de cambio, de permanecer en el poder a costa de cualquier presión nacional o advertencia internacional, se ha traducido, mes tras mes, en más control y represión, traducidos en amenazas, acoso, despidos, capturas, cárcel, torturas, procesos judiciales por terrorismo... y algunos muertos más.

Quieren imponer “el reino del silencio”, dijeron los periodistas independientes del país. Quieren imponer la paz a costa del poder militar, del sometimiento y la capitulación. Una “pax romana” basada en la fuerza de las armas... pero sin posibilidades de desarrollo, porque la economía atraviesa momentos críticos, y estaba al borde del abismo.

“LAS MARCHAS AZUL Y BLANCO SON ILEGALES”

Desde mediados de agosto, y ante la capacidad de movilización demostrada por la población de la capital y de todo el país, burlando la intimidación con que la Policía empezó a esperar las marchas en su inicio y a asediarlas agresivamente en su recorrido, el régimen empleó la infiltración en las movilizaciones pacíficas: los infiltrados provocaban violencia y después el régimen acusaba a los manifestantes de ser los responsables.

Surgieron entonces otras iniciativas de parte de los azul y blanco: lanzar en las calles chimbombas (globos) de esos colores, los de la bandera nacional. Más de una y de dos personas fueron detenidas por hacerlo.

En la nota de prensa de la Policía del 28 de septiembre, en la que ilegalmente determinó que las marchas azul y blancas eran “ilegales”, afirmaba que tampoco eran “nada pacíficas”. Y para demostrarlo responsabilizó a los manifestantes de haber matado el domingo 23 de septiembre a Matt Romero, de 16 años, otro adolescente asesinado, víctima fatal de los disparos de paramilitares en la frustrada marcha de esa mañana.

Otra táctica para obstaculizar las manifestaciones azul y blancas ha sido ordenar durante semanas consecutivas en octubre a empleados públicos y simpatizantes el hacer contramarchas: han salido todos los días a ondear banderas rojinegras del partido de gobierno en las rotondas de la capital o han tenido que recorrer Managua en extenuantes caminatas “por la paz” o en caravanas de vehículos del Estado, proclamando la “muerte al somocismo”.

Más allá de estas actividades que buscan dar la imagen de “victoria”, ni un solo día el régimen ha abandonado la

represión. Ni un solo día ha dejado de apresar a líderes estudiantiles, territoriales y barriales, acusándolos de terrorismo. Muchos liderazgos universitarios de la rebelión cívica están hoy en las cárceles o han tenido que exiliarse. Muchos liderazgos campesinos en zonas rurales han tenido que huir a las montañas para defender sus vidas. La “pax” de Ortega no tiene otro sustento que la extrema violencia ejercida desde el Estado.

A CINCO MESES DE ABRIL QUÉ DICEN LAS ENCUESTAS

Aunque ya no se sale a las calles masivamente como sucedió hasta septiembre, el rechazo al régimen, el repudio a su actuación, está vivo, permanece latente. Es mayoritario. El 1 de septiembre, el Grupo Cívico Ética y Transparencia realizó un nuevo sondeo telefónico, vía celular, a 1,200 personas elegidas aleatoriamente. EyT había realizado un sondeo similar en julio.

A la pregunta de si era “conveniente” realizar elecciones “prontamente”, el 81% dijo que sí (79% había dicho eso mismo en julio). A la pregunta de si era “ilegal o inconstitucional” acortar el período presidencial, el 68% dijo que no lo era (53% opinó de la misma forma en julio). La valoración que recibió la actuación de Ortega fue mayoritariamente negativa (62%).

Entre el 6 y el 18 de septiembre CID Gallup realizó una encuesta en 1,200 hogares de todo el país. El 60% consideró que se deben adelantar las elecciones y el 34% no opinó así. A esa misma pregunta, con otra formulación -si Ortega debe dejar el poder-, el 61% dijo que debe “renunciar” y el 28% dijo que debe “quedarse”. “El comandante se queda” es la consigna repetida, por, paramilitares, empleados públicos y “zequedistas”, como les han comenzado a llamar.

Tal vez el agresivo e insistente “zequedismo”, o peor, la consigna “¡Plomo!”, escrita en muros y camisetas, explica por qué un porcentaje bastante alto, el 11% de los encuestados, no quiso responder a una pregunta tan pertinente en la coyuntura actual. El temor a ser totalmente sincero en las encuestas no puede descartarse, dado el nivel de terror impuesto.

En la encuesta de CID Gallup, Ortega aparece con el récord de evaluación más baja de todos los gobernantes que ha tenido Nicaragua desde 1990: 57% de los encuestados lo evalúan “muy mal o mal” (el 25% lo evalúa “bien o muy bien”). Su actuación en la crisis es calificada de “muy mala” por el 33% y por el 24% como “mala”, un 57% de rechazo. Respecto al rumbo que lleva el país, mientras al inicio del año, en enero, un 54% veía un rumbo “favorable”, ahora sólo un 13% lo ve así.

Particular interés tienen varias respuestas a la pregunta sobre si consideran terroristas a quienes participan en marchas y participaron en tranques. El 71% dijo que quienes eso han hecho no los hace terroristas, lo que contradice la versión oficial sobre lo que ha ocurrido en el país y pone en entredicho la persecución policial y judicial contra los azul y blanco.

Todos estos porcentajes indicaron que es mayoritario el rechazo al régimen y a la forma violenta y represiva con que ha decidido “superar” la crisis. También es mayoritario querer un cambio: elecciones adelantadas.

**ENCUESTADOS:
EL PRINCIPAL PROBLEMA ES POLÍTICO**

La crisis económica, que al amanecer del 1 de octubre tenía ya a Nicaragua técnicamente en “recesión” (dos trimestres consecutivos con crecimiento negativo), ha afectado cada vez a más personas y familias. Desde agosto la propaganda oficial ha insistido en que todo está “normal”, un autoengaño porque el régimen conoce las cifras reales. La realidad diaria desmiente los mensajes de “normalidad”.

El turismo se ha desplomado y su recuperación no será nada fácil. Son 347 mil los empleos perdidos según FUNIDES, 100 mil según el gobierno, que redujo las cifras que había dado hace unos meses.

La drástica caída del consumo y un millón 200 mil personas con posibilidades de sumirse en la pobreza si la crisis se prolonga, más de 100 mil trabajadores dejando de cotizar al seguro social por haber perdido el trabajo, más de 30 mil nicaragüenses huyendo a Costa Rica, mil millones de dólares de depósitos retirados de la banca privada... demuestran acercándose el fin del año la anormalidad económica reinante en el país.

A pesar de la palpable crisis económica, a la pregunta de la encuesta de CID Gallup sobre cuál problema les causaba la mayor preocupación, el 35% respondió que era “la crisis política que vivimos”. A éstas hay que sumar el 12% que dijo que lo que más les preocupaba era el “temor por nuestros hijos y la opresión del gobierno”, ambas respuestas muy relacionadas con la incertidumbre que caracteriza la “pax” de Ortega.

Por primera vez en muchísimos años el desempleo no fue el principal problema señalado por la población nicaragüense en una encuesta. Por primera vez apareció la situación política como problema principal. El desempleo apareció en cuarto lugar (13%), ocupando el tercer lugar “el costo de cubrir las necesidades básicas” (27%), realidad vinculada al desastre económico que ha provocado el problema político que Ortega no da señales de querer resolver.

**CUÁNTO RESPALDO
MANTIENE TODAVÍA ORTEGA**

Daniel Ortega y Rosario Murillo han derramado mucha sangre y generado un enorme dolor al resistirse a adelantar las elecciones. Se resisten porque saben que las perderían. En 1990 Ortega las adelantó no sólo porque era imperativo parar la guerra civil. Las adelantó confiando en ganarlas. Ni él ni nadie en el FSLN pensaban en la posibilidad de perderlas, como muchos funcionarios han reconocido después.

De cara al futuro de una elección anticipada y de los resultados electorales que se obtengan, es relevante la pregunta de CID Gallup sobre la simpatía partidaria: el 67% se declaró “independiente” y el 23% se adscribió al FSLN.

La encuesta no desagrega los resultados ni por sexo ni por edades. Sería interesante haberlo hecho, porque en el tema de la edad una característica de la rebelión de abril y de sus consecuencias es el rechazo a Ortega de “los nietos de la Revolución”, como los llamó Sergio Ramírez. O como afirmó el sandinista Víctor Hugo Tinoco: “Se le rebeló toda una generación. Hasta el chavalero de secundaria se identificó con los universitarios”.

Las preguntas y respuestas de la encuesta que permiten rastrear con mayor claridad la militancia o la simpatía con que aún cuenta Ortega se mueven entre el porcentaje más alto: el 34% de quienes dijeron que no quieren adelantar de elecciones, una insistencia de Ortega, y el 20% de quienes consideraron terroristas a quienes participan en marchas y tranques, la versión oficializada por Ortega.

Estos porcentajes indican que Ortega aún conserva un “piso” importante, aunque su base se ha erosionado. Ganó la Presidencia con 38% en 2006, gracias a la reforma constitucional que pactó con Alemán y que, entre otras ventajas para él, redujo a 35% el porcentaje para ganar, hasta entonces el 45%. En 2011 se reeligió y nunca sabremos cuáles fueron los resultados reales, por el fraude y las irregularidades que organizó, como lo constataron en sus informes los equipos de observadores de la OEA y de la Unión Europea. De 2016 menos se sabe: volvió a reelegirse en unas elecciones en donde no hubo competencia y la abstención fue mayoritaria.

**¿QUIÉN ES RESPONSABLE
DE LA CRISIS ECONÓMICA?**

EyT incluyó en su sondeo una pregunta sobre la crisis económica. Por lo acelerado que está siendo el camino al precipicio que lleva la economía nacional, quién sentirá la población que es responsable de esa debacle -Ortega o los azul y blanco- es un dato importante y podría resultar decisivo en unos eventuales comicios futuros.

Y así cómo muchos apuestan a la agudización del desplome de la economía para que Ortega se vea forzado a aceptar una negociación, otros consideran que Ortega calcula quedarse el mayor tiempo posible para agudizar la crisis: así prolongaría el tiempo de la represión y con terror sofocaría las protestas, se iría al exilio más gente, quedarían en el país los más pobres y, por eso, los más vulnerables al clientelismo, el empresariado terminaría adaptándose a la “pax” impuesta y Estados Unidos terminaría aceptando la “estabilidad” lograda a la fuerza. El Estado de excepción que se ha establecido de facto en Nicaragua apunta a eso.

EyT preguntó a quién hace responsable de la crisis económica. El 33% dijo que lo son “el gobierno y sus aliados”, el 20% señaló a “la oposición y sus aliados” y el 38% dijo que responsables son “ambos”. Es un dato que parece confirmar a qué está apostando el régimen.

NICARAGUA, ¿CÓMO VENEZUELA?

La crisis económica que hoy padece Nicaragua se compara a menudo con la que atenaza a Venezuela. En una entrevista con la cadena Al Jazeera, el escritor y ex-Vicepresidente de Nicaragua Sergio Ramírez comentó que no hay forma de comparar ambas situaciones, porque hay diferencias abismales entre el poder económico que Maduro tiene, aunque muy desgastado, con el de Ortega.

“Maduro produce un millón de barriles diarios de petróleo -dice Ramírez-, ingresa 70 millones de dólares diarios. Ortega compra el petróleo que necesitamos en el mercado internacional porque Maduro ya no se lo da. Nicaragua tiene una economía dos veces más pequeña que la de Costa Rica y sólo un poquito más grande que la de Haití. Las exportaciones de Nicaragua son de 2 mil y pico de millones de dólares, las reservas brutas del Banco Central son de 4 mil millones de dólares. Esta es una economía muy frágil, muy pequeña, que ha tenido un deterioro tremendo, que Ortega no está atendiendo”.

Sin embargo, precisamente por esa pequeñez de nuestra economía Ortega es menos vulnerable. Muy pronto murieron los dinosaurios, mientras se salvaban los pequeños mamíferos... Ortega parece estar apostando a nuestra insignificancia en la geopolítica mundial para quedarse atornillado en el poder.

ORTEGA APUESTA POR LA “ECONOMÍA POPULAR”

Parece apostar Ortega a “empobrecer” el país. El 22 de septiembre, hablando a seguidores y empleados públicos obligados a escucharlo, dijo que como Nicaragua no puede esperar a que los grandes capitales -que han roto con él-

reactiven la economía, la “solución” reactivadora será “la economía popular”. Obviamente, es una propuesta retórica porque es la economía popular la que está siendo más duramente golpeada por la crisis.

Ese día propuso a sus bases, voluntarias u obligadas, resistir, prometiéndoles que al menos no les faltará comida. Nombró, uno por uno, todo lo que producimos y no importamos: frijoles, maíz, plátanos, naranjas, limones, leche, carne de pollo, carne de res, carne de cerdo...

Obviamente, no mencionó la falta de crédito para producir todo eso, la caída en el consumo, la reducción del circulante, el desempleo masivo... “Nicaragua es un país -dijo, tratando de levantar el ánimo a su audiencia- que tiene una riqueza básica. Y se levantará a partir de esa riqueza básica y por la seguridad que ha tenido el país, y que tiene nuevamente, porque Nicaragua ha recuperado nuevamente la seguridad”... para rematar afirmando que “eso”, la economía popular y la seguridad recuperada por la “pax” impuesta por la represión, “atrae inversiones”. Una conclusión inverosímil.

SÓLO UNA SOLUCIÓN POLÍTICA FRENARÍA LA CRISIS ECONÓMICA

Siendo la crisis económica de origen político, los economistas independientes del país y los empresarios sensatos no han dejado de insistir en que sólo podrá detenerse la debacle económica con una solución política, que deben aceptar Ortega y Murillo y para la que no ha dado ni una sola señal de estar dispuesto a procurar otra solución que no sea represión.

Desde hace unos meses el consenso nacional y el internacional ha sido amplio y la insistencia, permanente: la crisis no se resolverá con ninguna medida económica, debe resolverse en una negociación que debe surgir de un diálogo nacional con garantes internacionales, hasta desembarcar en condiciones para celebrar elecciones anticipadas, que deben ser transparentes, competitivas y observadas.

Sólo así, han repetido las voces más autorizadas en economía, se irá normalizando la economía y también el país. Aclaran también que al iniciarse esa ruta se lograría apenas poner un freno a la crisis, atenderla para detenerla. Cualquier análisis honesto indica que, aun así, pasarán bastantes años hasta que la economía logre reactivarse.

La Unidad de Inteligencia de “The Economist” afirmaba en su más reciente informe que “el panorama económico de Nicaragua se verá gravemente obstaculizado por la crisis política, no sólo a corto plazo, también a mediano plazo”. Y explicaba que, aun cuando la crisis se resolviera pronto, a finales de 2018 o inicios de 2019, sólo hasta el año 2022

Nicaragua recuperaría el crecimiento previo (4.2%) “The Economist” afirma que lo ocurrido con el estallido de abril “constituye el episodio más serio de malestar social en Nicaragua en casi cuatro décadas”.

El pronóstico del economista Néstor Avendaño es más conservador: “El problema económico es de confianza -dice- y la confianza no se recupera en el corto plazo. No basta únicamente con restablecer los números económicos que se vislumbraban antes del 18 de abril para decir que ya estamos en condiciones normales. Las veo normalizadas en el largo plazo y el largo plazo en economía es cuatro, cinco, seis, siete y aún más años. Así veo la recuperación del daño que se ha hecho a nuestra economía”.

**LA CLASE EMPRESARIAL
TOMA DISTANCIA DE ORTEGA**

Además de la propaganda de la “normalidad” conseguida, la urgencia de hacer algo para detener el inocultable descalabro económico, que también afecta a los empresarios sandinistas, a los militares empresarios, también a las empresas de la familia presidencial, llevó a Ortega a sonsacar a la élite de la clase empresarial, su más estrecha aliada durante once años y hasta abril, para atraerla a respaldar su obsesión de permanecer en el gobierno.

En mayo, justo en la víspera de la marcha del Día de las Madres, los tres más grandes capitales del país, dueños de los tres grupos financieros (Carlos Pellas, Roberto Zamora y Ramiro Ortiz) dieron declaraciones por separado en las que le pedían a Ortega cesar la violencia y adelantar las elecciones. Antes que ellos, ya José Adán Aguerri, presidente de los gremios empresariales agrupados en el COSEP, había afirmado en el diálogo nacional: “El país no aguanta una salida a mediano plazo. El país necesita una respuesta ya y el gobierno tiene que dar respuestas políticas contundentes”.

Después, vino la contraofensiva del régimen. Ortega se decidió por el terrorismo de Estado. En dos meses pareció de nuevo fortalecido y nunca más volvieron a expresarse estos tres grandes capitales nacionales. Incluso, aún siguió alguno cabildeando en Washington con algunos congresistas para que no aprobaran la Nica Act.

La determinación de Ortega de continuar en el poder, sus crímenes, sus reiteradas declaraciones de que no habrá adelanto de las elecciones, tampoco diálogo nacional, quitaron argumentos a cualquier cabildeo. No hay defensa alguna para lo que dice o lo que hace.

Conocedores entonces los empresarios de las duras sanciones personalizadas contenidas, no en la Nica Act, sino en la nueva ley que ahora se ha fusionado con esa ley y cuyo

proceso para su aprobación definitiva inició en Washington el 26 de septiembre han, rechazado cualquier acercamiento con Ortega.

Las sanciones de la nueva ley son económicas, son extremadamente severas y no sólo van dirigidas contra la familia presidencial, contra su círculo cercano y contra funcionarios de su gobierno, también contra “cómplices” y “colaboradores”. Acercarse a Ortega, reo de tan graves sanciones, sería un suicidio. Terminando el año, el modelo corporativo, que funcionó en Nicaragua durante unos diez años, se apreciaba roto y sin posibilidades de recomposición. El “matrimonio” se había “divorciado”.

**“ESTÁN JUGANDO
AL TERRORISMO ECONÓMICO”**

El distanciamiento del gran capital explica el agresivo discurso de Ortega el sábado 22 de septiembre ante empleados públicos y simpatizantes, que una vez más habían caminado “por la paz”.

Ortega dedicó sus palabras a atacar al empresariado, acusándolos de estar “jugando al terrorismo económico”, de estar “jugando con fuego”. Y los amenazó con que si volvieran a decidir otro paro nacional -ha habido tres paros de sólo 24 horas, en junio, julio y septiembre- ordenaría a la Policía abrir sus empresas a la fuerza.

El furibundo ataque de Ortega esa tarde parece haber sido dirigido específicamente a los bancos de los tres mayores grupos financieros del país, que habían cerrado en los tres paros.

Las cámaras empresariales del COSEP respondieron inmediatamente. Lo hicieron también las empresas nicaragüenses-estadounidenses agrupadas en AMCHAM y la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (FUNIDES). Los tres grupos de la clase empresarial nacional insistieron de nuevo en que la solución a la crisis económica tiene que ser una solución política.

El COSEP recordó en su mensaje, que tituló “Nicaragua es la patria de todos”, que la crisis iniciada en abril había sido producto de “la intolerancia irracional al disenso político”, una elegante manera de dar nombre a la política de terror desatada contra la población en rebeldía.

La Cámara de Comercio Americana Nicaragüense (AMCHAM) señaló una vez más que el origen de la crisis está en “masivas violaciones de derechos humanos”. FUNIDES afirmó que las amenazas lanzadas por Ortega “exacerban y profundizan la fractura social que actualmente vive el país”. Toda la clase empresarial del país abogó una vez más por reanudar el diálogo nacional para acordar el adelanto de las elecciones.

LA CRISIS DE NICARAGUA EN EL FORO DE NACIONES UNIDAS

Si nacionalmente a Ortega lo están abandonando sandinistas históricos, simpatizantes de ocasión y eventuales votantes, en el terreno internacional Ortega no cuenta prácticamente con nadie. Cada día está más solo. Y es en ese ámbito en donde no tiene posibilidad alguna de amenazar, mucho menos de reprimir. Los crímenes cometidos por Ortega y Murillo en tan breve espacio de tiempo en este tan pequeño país ya son conocidos y repudiados mundialmente.

En septiembre la correlación de fuerzas internacional se hizo aún más negativa para el régimen. El 5 de septiembre la crisis de Nicaragua fue tema de debate en el Consejo de Seguridad de la ONU, un hecho sin precedentes dado el pequeño peso de Nicaragua en la geopolítica internacional y la rapidez con que la tragedia nicaragüense escaló hasta llegar al foro mundial.

Por primera vez, en un espacio internacional se le llamó “dictador” a Ortega. De los 15 países que integran el Consejo, 9 expresaron preocupación por la represión gubernamental, por la impunidad en el uso de la fuerza estatal y abogaron por el diálogo como salida a la crisis. Seis consideraron que la crisis nicaragüense no debe ser objeto del Consejo por no representar un peligro para la paz y la seguridad mundial. Todos los que así se expresaron fueron países con gobiernos autoritarios, entre ellos, Rusia y China, dos de las cinco naciones que tienen poder de veto en el Consejo. Rusia empleó un discurso retórico. China, cuatro escuetas palabras.

“NICARAGUA SE ESTÁ CONVIRTIENDO EN UN PAÍS SIN ESPERANZA”

En el debate en la ONU estuvieron como países invitados Nicaragua, Venezuela y Costa Rica. Nicaragua criticó una vez más la injerencia en sus asuntos internos, Venezuela, la instrumentalización del Consejo de Seguridad por Estados Unidos para atacar a un país soberano. Costa Rica advirtió que la crisis nicaragüense tiene potencial para afectar a toda Centroamérica.

Al inicio del debate se escucharon las palabras de Gonzalo Koncke, jefe de gabinete del secretario general de la OEA, Luis Almagro, quien afirmó: “Nicaragua se está convirtiendo en un país sin esperanza y se encuentra en una encrucijada de la cual dependen su paz, su democracia y su futuro”. En representación de la ciudadanía nicaragüense habló Félix Maradiaga, quien presentó un testimonio personal de su participación en la rebelión cívica. Maradiaga se exilió en Estados Unidos desde que el régimen decretó orden de captura contra él acusándolo de financiar el terro-

rismo. El 23 de septiembre la Policía allanó el Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (IEEPP), que dirige, requisando documentos para “probar” ese financiamiento.

CORRELACIÓN DE FUERZAS EN EL FORO DE LA OEA

A la primera reunión del Consejo de Seguridad de la ONU sobre Nicaragua siguió, una semana después, el 12 de septiembre, la sexta reunión del Consejo Permanente de la OEA sobre el caso Nicaragua. Ese día el organismo regional aprobó una nueva resolución sobre Nicaragua, con el respaldo de 19 países, 4 en contra, 9 abstenciones y 2 ausencias. El número de los críticos con el régimen de Nicaragua se había reducido algo.

Los países del continente insistieron en restaurar el diálogo y en que el régimen facilitara el trabajo de los organismos internacionales de derechos humanos presentes en Nicaragua. Lo nuevo en esa resolución de la OEA de septiembre es el punto 7, que hace un llamado a los Estados miembros a tomar “medidas” unilaterales, decididas por cada país, que “coadyuven” a restablecer la democracia y el respeto a los derechos humanos en Nicaragua.

La OEA se ha movido también en otras direcciones. El grupo de trabajo de 12 países del continente para incidir en la crisis nicaragüense -al que Ortega no ha permitido ingresar a Nicaragua-, presididos por Canadá, se reunió en septiembre con directivos del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo para conocer el estado de los préstamos millonarios de los que en gran medida depende la economía de Nicaragua.

ORTEGA QUIERE IR A LA ONU Y HABLAR CON DONALD TRUMP

Después de nuevos reveses diplomáticos, y ante las inminentes sanciones del gobierno de Estados Unidos, Ortega quiso reivindicarse y promovió tres nuevas entrevistas a medios televisivos internacionales de Europa: habló a la agencia española EFE, a France 24 y a la alemana Deutsche Welle.

En todas las entrevistas repitió su relato: ha sido víctima de un golpe de Estado fraguado en Washington y ya lo ha superado. A la Deutsche Welle le dijo que Alemania ayudaría “diciéndole a Estados Unidos que no se entrometan en Nicaragua”. También le dijo que era innecesario un diálogo en una mesa con mediadores, porque ya se “está negociando desde la base, con un diálogo en la comunidad y en el barrio”.

A France 24 le dijo que ningún policía y ningún paramilitar había cometido crimen alguno y que, por eso, ninguno estaba siendo investigado. Y le dio a la periodista esta prueba: “Naciones Unidas no estaba aquí y no los vieron”. Del informe de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos dijo que era “falso, una infamia”.

Ortega expresó también al medio francés que estaba considerando hablar en la 73 Asamblea General de la ONU y que estando allí era “imperativo” tener “un intercambio y diálogo” con el Presidente Trump, “no sólo en nombre de Nicaragua, también de América Latina”.

Días después, Carlos Trujillo, representante de Estados Unidos en la OEA, un diplomático muy cercano a Trump, le respondió: “No hay nada de qué hablar mientras en Nicaragua sigan los paramilitares violando los derechos humanos”. Y le recordó las sanciones que se avecinaban: “Los generales, paramilitares y policías que están torturando y oprimiendo al pueblo, violando los derechos de los nicaragüenses, van a ser llevados ante la justicia”.

LA DICTADURA ESTÁ MÁS SOLA QUE NUNCA

Daniel Ortega estaba inscrito en la lista de oradores en la Asamblea General de la ONU para hablar la tarde del miércoles 26 de septiembre. Pero ni llegó a Nueva York ni la vocera del gobierno Rosario Murillo informó sobre las razones de su ausencia.

Los Presidentes de Ecuador, Paraguay, Chile y Panamá y la Vicepresidenta de Costa Rica expresaron ante el organismo mundial su preocupación por la crisis nicaragüense. Epsy Campbell, Vicepresidenta de Costa Rica, dijo que “cuando se trata de la vida y la dignidad de las personas, el silencio nos convierte en cómplices”. El Presidente Piñera, de Chile, fue el más explícito al mencionar varias de las graves violaciones de derechos humanos cometidas por el gobierno de Nicaragua.

Era de esperar que Nicolás Maduro, a quien Ortega cedió el espacio que tenía reservado el día 26, defendiera a Ortega. Resultó sorprendente que Maduro ni siquiera mencionó a Nicaragua en su extenso discurso de una hora. Maduro lanzó su esperada diatriba contra el imperialismo y, a la vez, “sacó pecho” mostrando su poder negociador con el imperio hablando de los inmensos recursos de su país: no sólo tiene la mayor reserva de petróleo del mundo, también “la primera reserva de oro más grande del mundo bajo estándares internacionales”, y también reservas enormes de gas y otros tesoros en el Arco Minero del Orinoco, un territorio del tamaño de la isla de Cuba, en donde ya hay

actividades extractivas rusas y chinas para sacar de esa zona oro, diamantes, hierro, bauxita, coltán, niobio, tantalio y otros minerales valiosos.

LUIS ALMAGRO: “ASFIXIAR LA DICTADURA DE ORTEGA”

El silencio de Nicolás Maduro ante el mundo sobre los avatares que afligen a su socio Ortega fue tal vez la señal más patética de la soledad en la que hoy se encuentra el régimen orteguista.

Más doloroso el silencio, después que, en defensa de Maduro, tan sólo días antes, Murillo pidiera la renuncia de Luis Almagro al cargo de secretario general de la OEA por haber dicho que no se debía descartar ninguna opción para derrocar a Maduro, incluida la intervención militar. Murillo afirmó que esas declaraciones constituían “una grave amenaza a la paz y la seguridad internacional”. Con este intemperante reclamo, el régimen puso un definitivo e irreversible punto final al “entendimiento” acordado con Almagro en 2016 para reformar el viciado sistema electoral nicaragüense.

Murillo no sólo criticaba a Almagro por su ataque a Venezuela. “Asfixiar” al régimen de Ortega fue la propuesta que había hecho el secretario general de la OEA el 8 de septiembre al hablar en la 15 Cumbre Latinoamericana celebrada en Miami. “Es inadmisibles -dijo ese día refiriéndose a Nicaragua, después de hablar de Venezuela- que otro país del continente se vaya por el despeñadero de la dictadura”. Y exhortó a la comunidad internacional a cumplir con su deber de dar respuestas “para asfixiar la dictadura que también se viene instalando en Nicaragua”.

“SON CRÍMENES DE LESA HUMANIDAD”

Fue la primera vez que Almagro llamó “dictadura” al régimen de Ortega. Horas antes de estas declaraciones había recibido al neurocirujano nicaragüense Jiosmar Briones, en exilio forzoso en Estados Unidos, tras recibir amenazas de muerte.

El doctor Briones le presentó a Almagro las epicrisis de casos de tortura contra participantes en las protestas contra el gobierno, a quienes él había atendido. Particularmente, se refirió conmovido a “los dos casos más impactantes que he visto en mi vida profesional y personal -le dijo-, el de dos varones violados con fusiles AK-47 que llegaron a mi clínica destruidos emocionalmente. No podían ni caminar, sangraban mucho, esos hombres jamás van a volver a ser los mismos de antes. Esos casos marcaron mi vida para siempre”.

Briones también atestiguó ante Almagro que las autoridades del Ministerio de Salud de Nicaragua habían dado órdenes de no atender a los manifestantes heridos en las protestas en los hospitales públicos y cómo bastantes médicos, como él, se arriesgaron a no obedecer esa orden. Almagro escuchó conmovido al doctor y dijo después que lo que le había relatado constituía delitos de lesa humanidad, los que no prescriben nunca.

SEVERAS SANCIONES EN DOS LEYES FUSIONADAS

Muchas han sido las declaraciones, resoluciones y mensajes de poderes internacionales llamando la atención de la represión desatada por el régimen Ortega-Murillo. Sin embargo, son las sanciones de Estados Unidos, que durante más de una década tuvo las mejores relaciones con Ortega, las que más inquietan y hasta desmoralizan, no sólo a Ortega y a Murillo, sino a quienes los rodean. Tienen un potencial asfixiante y ponen en peligro la cohesión interna de sus más cercano círculo de poder.

El proceso legislativo iniciado en el Senado de Estados Unidos el 26 de septiembre fusionó dos leyes, la *Nicaraguan Investment Conditionality Act* (Nica Act) y la nueva Ley de Derechos Humanos y Anticorrupción, conocida como la Magnitsky Nica.

LA NICA ACT Y LA MAGNITSKY NICA

La Nica Act, de la que se ha hablado en Nicaragua desde hace ya dos años ha sido activamente promovida por la congresista republicana Ileana Ross-Lehtinen y ha tenido una prolongada espera en el camino a su aprobación.

Empresarios privados y funcionarios del régimen cabildearon durante meses en Washington para detenerla. Invirtieron millones en lograrlo. Después de la rebelión de abril, la visita que en junio realizó a Ortega el asesor principal para América Latina en el Senado, Caleb McCarry, enviado por el senador republicano Bob Corker, influyente presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, fue un último intento de Washington para evitar que la ley fuera aprobada.

McCarry vino a ofrecerle a Ortega una “escalera” para que renunciara, a cambio de inmunidad para su familia y seguridad para su fortuna. Sin embargo, todo lo que sucedió después -ninguna señal de Ortega de aceptar esa salida y una represión brutal- indica que McCarry fracasó y que Ortega le dijo a McCarry lo que éste quería oír, aunque no cumplir. Se le retiró entonces la “escalera” y el proceso legal continuó. El 22 de septiembre Ortega pidió a los congresistas “reflexionar” y no aprobar la ley.

Viendo la obcecación de Ortega y de Murillo, el 18 de julio, después de dos meses de matanza indiscriminada, en marcha ya la “operación limpieza” el senador demócrata Bob Menéndez, con el respaldo de representantes de ambos partidos, algunos de mucho prestigio, introdujo al Senado otra ley, la llamada Magnitsky Nica.

La fusión de ambas en una sola legislación es lo que finalmente aprobó el 26 de septiembre el comité de relaciones exteriores del Senado, paso considerado el más difícil en el proceso legislativo. El debate y votación en el pleno del Senado y en el pleno de la Cámara de Representantes y la firma del Presidente Trump convertirán en ley este proyecto de fusión de ambas leyes.

“¡JINETE, BÁJATE DEL CABALLO!”

Ortega sabía que esto vendría. Pero siguió demostrando su determinación a no abandonar el poder.

Todavía el 12 de septiembre, Arturo Cruz, quien fuera embajador de Ortega en Washington en sus primeros dos años de gobierno, hablaba así: “Los norteamericanos aún están anuentes, y el resto de la comunidad internacional inclusive, a una salida constitucional y pacífica. No es tan fácil esa salida, sobre todo porque en la sociedad nicaragüense hay mucho dolor y una salida política que incluya a Ortega insinúa que no hay justicia. Ahí la sociedad se colocará ante una gran discusión...”

“No afirmo que Daniel Ortega va a dar elecciones adelantadas. Estoy diciendo que probablemente una situación económica catastrófica lo pueden hacer dar esa opción. Si no da esa salida anticipada van a venir medidas tangibles y fuertes de parte de Estados Unidos... En el Congreso, en el Ejecutivo, en la prensa, en la sociedad, nadie va a objetar la aprobación de la Nica Act... Hasta ahora el alegato de los norteamericanos es: “Jinete, bájate del caballo, pero si no lo hacés voy a tener que botar el caballo”.

Ortega no ha querido bajar del caballo. El 22 de septiembre reiteró que se quedará en el gobierno hasta 2021, se negó nuevamente al diálogo y amenazó con furia a los empresarios. El día 23 ordenó a sus paramilitares disparar a matar en una marcha azul y blanco. Una de las balas segó la vida de un chaval de 16 años. Y el día 26 no se presentó a la ONU a repetir su relato de que es víctima del terrorismo golpista organizado y financiado en Estados Unidos...

QUÉ DICEN LAS LEYES DE ESTADOS UNIDOS

Las dos leyes fusionadas son complementarias: sancionan al régimen y sancionan a personas. La Nica Act establece que los representantes del gobierno de Estados Unidos en

las instituciones financieras multilaterales (Banco Mundial y Banco Interamericano de Desarrollo) deben vetar el desembolso de préstamos para Nicaragua, sean nuevos o incluso ya aprobados, aunque no desembolsados, a no ser que estén destinados a proyectos sociales y humanitarios.

La otra ley, la llamada Magnitsky Nica, impone severas sanciones económicas y políticas a Ortega y a su familia, a funcionarios de todos los poderes del gobierno de Nicaragua y a sus familias, a cómplices y colaboradores financieros y materiales del régimen y a sus familias, a todos por su participación en violaciones de derechos humanos o en actos de corrupción, lavado de dinero y otros delitos vinculados. Se le llama Magnitsky Nica porque los que aparezcan en las listas recibirán sanciones personalizadas similares a las que establece la Ley Global Magnitsky: se les quita la visa para viajar o residir en Estados Unidos, se les bloquean sus cuentas y propiedades en Estados Unidos, se les incluye en la lista de la Oficina para el Control de Activos del Departamento del Tesoro, se les coloca bajo el escrutinio de las agencias de inteligencia estadounidenses, se les señala como personas con las que nadie debe negociar o hacer transacciones... Todo eso los convierte en “parias” financieros internacionales.

El ex-embajador Bosco Matamoros señaló que con la Magnitsky Nica “los sancionados saben dónde comienzan las sanciones, pero no donde terminan, porque el sancionado cae en manos de los fiscales del Departamento de Estado que trabajan con el Departamento del Tesoro unos seis mil profesionales con capacidad de investigar lo todo de cualquier persona”.

“HAY QUE PRESIONARLOS”

Carlos Ponce, de la ONG “Freedom House”, con sede en Washington -a quien hace unos años Ortega le prohibió la entrada en Nicaragua-, informó que ya hay “listas muy grandes que se manejan en el Congreso” de las personas sancionables por esta ley y entre ellas aparecen “personas de las Fuerzas Armadas”.

Las leyes ahora fusionadas -dice- son estrategias que hagan ver al círculo que rodea a Ortega que es tiempo de abandonarlo... Teniendo una dictadura de ese tipo, no veo otra opción que incrementar las sanciones, que incrementar la presión. Que se presione a los militares que están con Ortega para que vean que sus fondos de pensiones, que tienen en Estados Unidos, están en riesgo. Que su familia, que la tienen estudiando afuera, está en riesgo. Incluso que los mismos hijos de Daniel Ortega y Rosario Murillo se preocupen porque el futuro a donde los está dirigiendo Daniel se ve muy sombrío”.

LA “NEUTRALIDAD” DEL EJÉRCITO

Adelantándose a las sanciones de Washington, un grupo de nicaragüenses en Estados Unidos iniciaron una campaña para que las firmas de inversión que administran el fondo de pensiones del Ejército de Nicaragua (*Russell Investments*, *Reverence Capital Partners* y *TA Associates*) dejaran de hacerlo, advirtiéndoles que es dinero manchado con la sangre de los nicaragüenses asesinados por el régimen de Ortega y Murillo. “Debemos hacerles saber -afirmaban en una carta dirigida a los gerentes generales de estas empresas- que están sentados sobre dinero empapado en la sangre de nuestros hermanos y hermanas nicaragüenses, para que puedan romper su relación con el régimen asesino de Daniel Ortega y sus benefactores en el Ejército”.

Una auditoría que hizo la firma *Deloitte & Touche* a los millonarios recursos del Instituto de Previsión Social Militar (IPSM) constató que en 2002 el IPSM tenía un capital de 29 millones y medio de dólares, cantidad que en 2009 se había incrementado y era ya de 72 millones 300 mil dólares. En 2012 esos fondos podrían haber aumentado ya hasta 100 millones de dólares y el 40% de ese dinero estaba invertido en estas tres empresas. ¿A cuánto ascendería, seis años después, la fortuna de los militares?

EL EJÉRCITO EN LA FRONTERA

¿Por qué tendría que ser “presionado” el Ejército de Nicaragua? ¿Por qué decir que el dinero del Ejército está manchado de sangre? A pesar de que en varias ocasiones ha declarado su jefatura no estar participando en el conflicto, declaraciones en que no ha mencionado siquiera el Ejército la versión del golpe de Estado, los rumores de que en la frontera entre Nicaragua y Costa Rica están activos miembros del Ejército han sido confirmados por muchas personas.

Lo confirmó Francisca Ramírez, líder del movimiento campesino anticanal, con reconocimiento nacional e internacional. Ella tuvo que salir a Costa Rica a finales de septiembre, amenazada de muerte. Su salida del país fue una auténtica odisea, más peligrosa, dijo, por la presencia del Ejército en la frontera.

“Quiero aclarar algo al pueblo de Nicaragua y al mundo entero -afirmó en una entrevista con el diario “La Prensa”-. Y es que el Ejército ha tenido un discurso donde dice que no tiene nada que ver con la situación que está pasando en Nicaragua. Y yo con mis propios ojos pude verificar que están bien activos en la frontera, viendo quién pasa. Tienen una lista donde revisan. Yo pasé la frontera en la madrugada y ya estaba tendido el Ejército. Logré pasar sin que me vieran. Entonces, ellos sí están prestándose a la persecución y a los atropellos que está haciendo el gobierno”.

Luis Carrión, uno de los nueve comandantes de la Dirección Nacional del FSLN en los años de la Revolución considera que el Ejército sí “tiene que ver” en el conflicto. En entrevista con “La Prensa” dijo: “A Daniel Ortega lo sostiene también una aparente neutralidad del Ejército. Aparente. No estoy seguro, pero yo sospecho que los órganos de inteligencia han estado colaborando con información. Eso no es neutralidad. El hecho de que no salgan soldados uniformados a la calle no quiere decir que el Ejército no esté participando en el conflicto”.

NICARAGUA ES ESTRATÉGICA PARA ESTADOS UNIDOS

La ley introducida por el senador Menéndez, la Magnitsky Nica, tuvo desde el comienzo el respaldo de demócratas y republicanos. También el fusionar ambas leyes recibió apoyo bipartidista. Se fusionaba en ambas leyes la ideología liberal de los demócratas, históricamente más preocupados por principios -el respeto a los derechos humanos, la vigencia del Estado de Derecho y la democracia-, y la ideología de los republicanos, más pragmáticos y siempre preocupados por la seguridad nacional (las relaciones de Ortega con Rusia).

El consenso bipartidista para sancionar a Ortega abarca hoy en Washington desde la línea más dura hasta la línea más progresista y liberal. Ese consenso, al que ha conducido el errático y criminal accionar de Ortega, desmiente la versión que ha repetido ante medios internacionales: que quienes han promovido y financiado el golpe de Estado contra él son los republicanos de origen cubano y de línea dura de la Florida.

“El perfil de los firmantes -dice Matamoros- no es ése. Es muy variado y demuestra que Nicaragua preocupa por razones de democracia y por razones de seguridad. Eso nos indica que, como país, Nicaragua se ha convertido para Estados Unidos en una cuestión de orden estratégico”.

NACE LA UNIDAD NACIONAL AZUL Y BLANCO

A casi seis meses de la rebelión de abril, el 4 de octubre, más de 40 organizaciones ciudadanas, territoriales y nacionales, encabezadas por la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia constituyeron la Unidad Nacional Azul y Blanco.

En el Manifiesto con el que se presentaron ante la nación afirmaron que con este esfuerzo, tan ansiado y demandado, “iniciamos una nueva etapa de organización y movilización para la conquista de la libertad, la justicia y la democracia”.

Entre las organizaciones hay coaliciones universitarias, representantes de la clase empresarial, del movimiento campesino, académicos, el Frente Amplio por la Democracia (FAD) en el que hay un conjunto plural de partidos políticos. Lo integran también movimientos juveniles, feministas, ecologistas, de la diversidad sexual, organizaciones del Movimiento 19 de Abril de varios departamentos, medios independientes, médicos, comité de madres de caídos, comité de prisioneros y prisioneras políticas, comité por la libertad de los presos políticos...

PARA QUE A NADIE LE DUELA RESPIRAR

Con esta unidad inició una nueva fase la resistencia contra la dictadura, que también estrenó una nueva fase represiva, con un no declarado, aunque impuesto, estado de excepción.

Resistir pacífica y cívicamente con los colores azul y blanco contra tanta represión estaba siendo cada vez más costoso. Seis meses después de abril la meta seguía intacta. Es la que tanta juventud ya intuyó en abril cuando vio caer herido por una bala a Álvaro Conrado, que murió diciendo: “Me duele respirar”.

Resistir hasta lograr una Nicaragua en la que a nadie, nunca más, le duela respirar, es la meta.



Preguntas acuciantes al finalizar el año de la rebelión



2018 ya fue un año de “vacas flacas” y si la crisis política, social, económica, también humanitaria, no comenzara a resolverse pronto, en 2019 las “vacas” estarán escuálidas.

Ortega está derrotado estratégicamente, está desprestigiado y cada vez más aislado en la comunidad internacional. En siete meses después del inicio de la rebelión ciudadana la represión no ha cesado: primero fueron las armas y la masacre, después las cárceles llenas con centenares de presos políticos.

El pueblo de Nicaragua ansía, no sin cierta desesperación, que la presión internacional se active más aceleradamente porque cada día que pase prolongará los desmanes de la dictadura, el desgaste de la economía y de la sociedad. Termina el año con muchas preguntas apremiantes y sin respuestas y con una incertidumbre cada vez mayor.

¿LE HARÁ CEDER LA ECONOMÍA?

¿Podrá la crisis económica hacer ceder a Ortega y sentarlo en la mesa de un diálogo a negociar? ¿Y qué negociaría? ¿O serán las sanciones económicas de Washington, no sólo anunciadas sino comenzadas a aplicar con contundencia, las que lo harán reaccionar? ¿Serán los intereses del Ejército y los de los empresarios del grupo económico del FSLN los que se impondrán sobre la obcecación de Ortega y de Murillo de permanecer en el poder? ¿Será posible que Ortega aguante hasta 2021 en una situación económica en picada, aunque muy debilitada aún no colapsada? ¿No es ésta una posibilidad con la que hay que contar para emprender estrategias más eficaces para apresurar la salida?

Aunque la propaganda oficial busca demostrar la “normalidad” a la que Nicaragua ha regresado, es muy poco lo que está normal en el país. Ciertamente, la mayoría de la

población debe sobrevivir y continúa trabajando y eso permite un continuo movimiento, dando una apariencia de normalidad. Pero la inseguridad no ha desaparecido: continúa la cacería de quienes se movilizaron contra el régimen o se sospecha que lo hicieron o que lo harán. Y los centenares de miles que han perdido el empleo, que se han visto obligados a salir del país para salvar la vida, que tienen familiares o conocidos asesinados, encarcelados, desaparecidos y amenazados no viven desde hace meses una vida “normal”.

¿DE LA RECESIÓN ECONÓMICA A LA DEPRESIÓN?

En la economía nada está normal. Los problemas vienen en cadena. Más despedidos, menos consumo, más cierre de negocios, menos impuestos, menos cotizantes a la seguridad social, más profundo el déficit en el seguro social, más clientes morosos, más fuga de depósitos, menos crédito, menos producción, menos inversiones menos actividad económica...

El Ministro de Hacienda reconoció que el déficit que tenía el presupuesto para lograr terminar 2018 equivalía “a tres veces el impacto que tuvo el huracán Mitch en 1998 y probablemente sólo comparable con el del terremoto de Managua en 1972”. A pesar de las reformas, el presupuesto con el que termina 2018 está todavía desfinanciado y nadie parecía estar interesado en comprar los bonos por más de 9 mil millones de córdobas que el Banco Central emitió para superar el déficit con deuda pública.

El presupuesto para 2019, ya aprobado, está también desfinanciado. Los pronósticos para el próximo año indican que, de no hallarse una solución política a la crisis, el próximo año todo será peor. De ser Nicaragua el país que más crecía en Centroamérica, será ahora el único país de la región que no crecerá. Dececerá.

El último análisis de la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (FUNIDES) contempla dos escenarios para 2019. Si la economía continúa al crítico ritmo que tuvo en el último trimestre de 2018, se reducirá un 5.2%. Si la incertidumbre aumenta aún más, “por la falta de voluntad política para buscar una salida pacífica a la crisis”, la caída será mayor y llegaría a un 8.7%.

“HAY QUE RESTABLECER LA CONFIANZA”

El Fondo Monetario Internacional tenía programada su visita a Nicaragua para junio, pero la visita se retrasó por la crisis y se realizó en los últimos días de octubre.

La visita la inscribió el gobierno en la estrategia de “normalidad” que trata de imponer. Incluso la Vicepresidenta Murillo resaltó que el FMI encomió las políticas moneta-

rias y presupuestarias del gobierno y afirmó que iban “en la dirección correcta para continuar normalizando el país”.

El balance del FMI fue ambiguo. El Fondo conoce tan bien como el gobierno que la economía nicaragüense requiere desde hace tiempo de reformas estructurales para garantizar la sostenibilidad fiscal. Esas reformas son ahora más urgentes. Deben sanearse las finanzas del Seguro Social -según expertos se encamina a la peor crisis económica de su historia-, debe hacerse una reforma en el sistema tributario y deben revisarse las exoneraciones. “Son inevitables esas reformas”, dejó dicho el FMI, señalando que “requieren de un amplio apoyo”... y eso es precisamente lo que perdió el gobierno desde abril.

A diferencia de lo que ha hecho en anteriores visitas, el FMI no brindó ninguna rueda de prensa en Managua y en el comunicado publicado en Washington, sólo recomendó una cosa: “restablecer la confianza”.

Los inversionistas no confían: la inversión extranjera y la nacional se han reducido como nunca antes en la última década. Los ahorrantes no confían: más de 1,050 millones de dólares salieron de los bancos desde abril hasta inicios de septiembre. Representan el 18% de los depósitos, según el economista Néstor Avendaño.

Y aun cuando confiara, la población ha tenido que apretarse el cinturón. Y suprimir gastos. La caída del consumo es evidente. Hay menos circulante y según FUNIDES, al terminar octubre 417 mil personas habían perdido su empleo.

La “confianza” está puesta en las exportaciones, que también han experimentado bajas por la brusca caída de los precios del café y por los bajos precios internacionales de los productos de exportación tradicionales. Está puesta también en las remesas, que crecerán el próximo año por el creciente número de exiliados forzosos y por la solidaridad entre las familias de aquí y de allá en momentos tan difíciles.

BID: “NO PENSAMOS EN COSAS NUEVAS”

Las sanciones económicas que incluye la Nica Act -bloquearían a Nicaragua préstamos de las instituciones financieras multilaterales- complicarán más el panorama económico. En 2017 las instituciones multilaterales financiaron el 24% del presupuesto nacional, especialmente en proyectos de inversión pública.

El BID, principal prestamista de Nicaragua, dejó pendiente de aprobación la “Estrategia país 2018-2022”, que financiaría proyectos de ese tipo. El vicepresidente del BID se refirió a préstamos por 566 millones de dólares para una docena de nuevos proyectos. Aún no los desembolsan. “Estamos cuidando mucho lo que ya existe -dijo-, más que pen-

sando en cosas nuevas. Además, la crisis nos hace ser más cautos y redoblar esfuerzos de supervisión y de auditoría del uso que el gobierno da a nuestros recursos”.

CAMPAÑAS CONTRA PRODUCTOS NICAS

De Estados Unidos dependen cuatro fuentes de ingresos fundamentales para el crecimiento económico de Nicaragua: la inversión extranjera directa, el turismo, las exportaciones (las de las zonas francas y las tradicionales) y las remesas. Las remesas crecerán. Sin embargo, aún sin las sanciones, dos de esas fuentes ya se han secado prácticamente: turismo e inversiones

En el franco y directo discurso que pronunció el 29 de octubre al despedirse de Nicaragua, la embajadora de Estados Unidos Laura Dogu se refirió a las inversiones, al turismo y a las exportaciones.

Sobre la inversión dijo: “Cuando inversionistas actuales y potenciales piden consejos a nuestra embajada, nuestra respuesta es que Nicaragua carece de las instituciones democráticas necesarias para un crecimiento económico sostenible”.

Dogu aprovechó para cuestionar la narrativa del régimen y su influencia en la economía. “La decisión del gobierno de etiquetar a manifestantes pacíficos como “terroristas, asesinos y golpistas” causará a las empresas y a los empresarios muchos problemas... Cualquiera persona que haya vivido aquí los últimos seis meses sabe que no hay grupos terroristas no estatales en Nicaragua. Pero las personas de fuera de la región que no siguen la situación cuidadosamente tomarán estas palabras en serio”.

“NO VEO SEÑALES EN EL GOBIERNO”

Sobre el turismo, Dogu dijo que las “alertas de viaje” en las que Estados Unidos advierte a sus ciudadanos no viajar a Nicaragua “no cambiarán pronto”. Y sobre las exportaciones, dio una información no tenida en cuenta hasta ahora: “En la economía global las empresas no pueden permitirse asumir riesgos de reputación. Ya he visto campañas en los Estados Unidos preguntando a las empresas por qué están comprando productos de Nicaragua. Estas campañas son similares a las campañas contra los “diamantes de sangre” que provienen de África. Las empresas pueden comprar los mismos textiles, café o carne de otros países que no ponen en riesgo su reputación. Este problema de la reputación no cambiará mientras el actual gobierno permanezca en el poder”.

La embajadora Dogu fue muy directa en sus reflexiones de despedida. Con una franqueza poco habitual en men-

sajes diplomáticos, y representando la voluntad del Departamento de Estado en Washington, encaró al régimen en varios momentos.

“Contrariamente a lo que la propaganda del gobierno quiere que se crea -dijo-, Nicaragua no ha regresado a la normalidad... Ni toda la propaganda de los medios estatales cambiará los hechos. No habrá un retorno a la normalidad sin un cambio transformador que incluya elecciones libres, la separación de poderes, el estado de derecho y la protección de los derechos humanos de los ciudadanos... Lamentablemente, no veo señales de que el Presidente Ortega o la Vicepresidenta Murillo estén dispuestos a considerar una solución negociada”.

Aferrado a la negativa de aceptar una negociación “de buena fe”, a la que se refirió la embajadora, en los últimos días el régimen se ha esmerado en desarrollar acciones de retención de migrantes asiáticos, africanos y haitianos en la frontera y acciones de decomiso de cocaína y de dinero procedente del narcotráfico para “recordarle” a Estados Unidos que aquí hay un “muro de contención”, ese muro que durante una década Ortega ofreció a Estados Unidos como garantía de una estabilidad que a Washington tanto le complacía.

ESTADO DE EXCEPCIÓN, ESTADO POLICIACO

Ningún muro puede ocultar ya el proyecto autoritario de Ortega, que devino en dictadura y que hoy es un Estado de excepción de facto que ha dejado a la población en una indefensión total y que está derivando hacia un Estado policia- co, con un control cada vez más ominoso de todos, por todo y en todas partes.

A partir del 1 de noviembre el Registro Público de la Propiedad dejó de ser público y pasó a ser secreto. Una simple circular de la presidenta de la Corte Suprema de Justicia ordenó que “terceros” tendrán limitada la obtención de información sobre propiedades y sociedades mercantiles.

Se legalizó así el ocultamiento de las transacciones registrales. La medida busca ocultar y camuflar traspasos de propiedades que están haciendo la familia gobernante y sus allegados para blindarse ante las sanciones de Washington.

“Quieren ocultar transferencias para escapar del escrutinio público”, dice el jurista José Pallais. Y al hacerlo afectan más la economía. “Nadie estará seguro de lo que compra, así que mejor no compra”, dice el jurista Alberto Novoa.

Otra medida de control fueron dos reglamentos a la Ley de la UAF (Unidad de Análisis Financiero) y a la Ley del Terrorismo, aprobados ambos por decretos presidenciales y

publicados el 3 de octubre. A partir de ahora, de forma discrecional, sin mandato judicial y sin informar previamente al investigado, la UAF podrá acceder de forma directa a todos los datos personales y movimientos financieros de individuos y empresas en ocho instituciones estatales: Aduanas, Impuestos, Migración, Seguridad Social, Superintendencia de Bancos...

“Se oficializa así el espionaje financiero. Los datos confidenciales y privados dejan de serlo. Y la UAF pasa de ser un órgano preventivo a ser un órgano de persecución y represión para intimidar y actuar políticamente contra quienes se opongan a Ortega”, dijo Pallais.

“Ahora se puede presumir que alguien es culpable o está cometiendo un delito, y sólo con la presunción van a requerir su información privada”, dijo José Adán Aguerri, presidente del COSEP.

Esta medida viola la Constitución porque viola el derecho a la privacidad. También incrementa la inseguridad en la economía porque viola el sigilo bancario. Es una nueva herramienta represiva, ya que la UAF, bajo control total de Ortega, podría, a discreción, cerrar temporal o definitivamente, negocios, empresas, financieras, ONG...

“¡ELLOS DAÑARON LA ECONOMÍA, LOS RESPONSABLES SON ELLOS!”

Así como el régimen no asume ninguna responsabilidad política en la crisis nacional, tampoco asume responsabilidad alguna en la crisis económica.

Y al igual que Ortega y Murillo atribuyen todas las muertes y tragedias humanas ocurridas desde abril a los “golpistas”, a los que consideran derrotados (“¡No pudieron! ¡Ni podrán!” es otra consigna), les achacan también el derrumbamiento de la economía.

“Ellos -dijo Ortega a sus pares del ALBA, reunidos en Managua el 8 de noviembre- provocaron una enorme herida en las familias nicaragüenses con los muertos, y provocaron una enorme herida en la economía nicaragüense con la destrucción, el terror y el vandalismo. Y vienen con el cuento que el gobierno es el responsable de las dificultades que tenemos en estos momentos. Los responsables son ellos, ¡ellos dañaron la economía! Pero el pueblo nicaragüense que es un pueblo trabajador, un pueblo luchador, ya está trabajando para recuperar la economía de nuestro país”.

La apuesta del régimen por la “economía popular” soslaya la evidencia de que es precisamente la economía popular la que padece mayor crisis. Obvia también que por mucho que el pueblo nicaragüense sea luchador y trabajador no podrá recuperar una economía tan abierta y tan dependiente de Estados Unidos.

ESTATIZAR LA COOPERACIÓN VENEZOLANA

La retórica promoción de la “economía popular” se complementa con otros pasos. El régimen pretende minimizar las sanciones de Washington, que alcanzarán a Albanisa por sus relaciones con PDVSA, trasladando a una estructura estatal paralela una buena parte de los negocios del consorcio Albanisa. Eso es la nueva empresa Enimex.

El 4 de octubre Ortega mandó a la Asamblea Nacional un proyecto de ley para convertir la ineficiente Empresa Nicaragüense de Importaciones (Enimport), nacida en 1980, en Empresa Nicaragüense de Importaciones y Exportaciones (Enimex). Esta nueva empresa estatal podrá importar y exportar bienes y mercancías y comercializarlas en el mercado nacional. Ofrecerá también un menú de servicios empresariales (almacenaje, transporte y otros) para cualquier actividad comercial.

El gobierno defendió el proyecto afirmando que su objetivo es promover la economía “popular” facilitando a los micro, pequeños y medianos empresarios y a las cooperativas -sectores de los que prácticamente no se ocupó en una década-, el poder exportar sus productos.

La empresa privada nacional -hoy distanciada de Ortega- ve en Enimex una competencia desleal, augura que abonará a la incertidumbre que ahuyenta a los inversionistas extranjeros y considera que su objetivo es “reconstituir Albanisa” con otro nombre para esquivar las sanciones de Washington, que ya ha sancionado a la empresa estatal venezolana de petróleos PDVSA, dueña del 51% de las acciones de Albanisa.

“ESTE CAMINO CONDUCE AL DESASTRE”

15 organizaciones empresariales agremiadas en el COSEP firmaron el 17 de octubre un comunicado “recomendando” al gobierno no aprobar la ley creadora de Enimex. “Pone en grave riesgo -dijeron- la sostenibilidad y eficiencia de los procesos exportadores e importadores que el sector privado ha manejado en los últimos 28 años y que han generado beneficios tangibles para Nicaragua”. Sin embargo, y como era de esperar, la creación de Enimex fue aprobada el 30 de octubre por los diputados orteguistas que controlan el Parlamento.

“El régimen está actuando como si pudiera reemplazar al sector privado con empresas estatales. Un país con la historia de Nicaragua sabe que ese camino conduce al desastre”, dijo la embajadora Dogu refiriéndose implícitamente a la nueva empresa estatal.

¿Veremos la cuantiosa deuda que tiene Nicaragua con Venezuela por el crédito petrolero, considerada por el régimen deuda privada, convertida en deuda pública?

“YA ES DEMASIADA LA SANGRE DERRAMADA”

La dictadura Ortega-Murillo parece inmune a los efectos nocivos de la crisis económica, al desastre al que se encamina la economía. Daniel Ortega sigue viviendo mentalmente en los años 80 y sabe que gobernó un país con una economía de guerra, más ruinoso que la actual...

¿No será entonces una quimera la “esperanza” de muchos en que la crisis económica lo forzará finalmente a negociar, incluso a renunciar? ¿Qué más podría hacer el sector empresarial para detener el desgobierno de Ortega y Muriello?

También parece inmune la dictadura al rechazo de la comunidad internacional y a sus presiones. Pero, ¿han sido estas presiones lo suficientemente contundentes como para que surtan el efecto de obligarlo a negociar?

El 19 de octubre, en otra reunión del Consejo Permanente de la OEA sobre la crisis de Nicaragua, reuniones de las que han salido sucesivas declaraciones de condena al régimen de Ortega por sus políticas represivas con el voto mayoritario de los países de mayor peso en el continente, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, advirtió al régimen que la OEA recurriría al artículo 20 de la Carta Democrática Interamericana.

Ese artículo establece que cuando hay graves crisis en un país se convoque a todos los cancilleres de la región para adoptar medidas más drásticas que declaraciones y resoluciones.

La reunión de cancilleres de la OEA podría desembocar en la expulsión de Nicaragua del organismo regional, con las consecuencias económicas y políticas derivadas. “Ya es demasiada la sangre derramada. Llegó la hora de exigir, inquirir, reclamar, solicitar y demandar que se detenga la violencia”, dijo Almagro ese día.

LA “CACERÍA” EN LAS ZONAS RURALES

Ese día, ante el Consejo Permanente de la OEA, el secretario ejecutivo de la CIDH, Paulo Abrão, inició así su presentación: “Estoy preocupado por lo que viene”. Y en base a la información que recibe de la Misión de Seguimiento de la CIDH presente en Nicaragua, dijo que “lo que venía” era un “estado de excepción”, caracterizado por “la persistencia del uso de la detención como forma de represión de la protesta y como criminalización de personas que participaron, de cualquier forma, de manifestaciones pacíficas contra el gobierno desde abril”.

Véa venir también ataques concentrados en los medios de comunicación independientes y más violencia, refiriéndose por primera vez a la desatada por el régimen en las

zonas rurales, no suficientemente conocida y divulgada por los medios de comunicación.

“Existe en el campo un tono diferente al que vemos en Managua -dijo Abrão-. En el campo circulan listas de personas contrarias al gobierno y hombres, mujeres, niños y niñas, familias enteras han tenido que dejar sus casas e irse a la montaña. Han tenido que huir y vivir en la clandestinidad. No ha sido posible cuantificar su número, pero eso es un claro resultado de un ambiente de miedo y de intimidación”.

En septiembre, Freddy Navas, del Movimiento Campesino, cifró en 300 los campesinos que habían sido encarcelados. “La mayor furia en la represión la sufrió el campesinado -dijo- después que se dismantelaron los tranques. Esto se vio, más que todo, en la ruta canalera y empezó en Chontales. En la cacería de campesinos ha participado el Ejército junto con la Policía, y hay zonas rurales que están militarizadas”.

LOS VOTOS PARA APLICAR EL ARTÍCULO 20

Ortega pareció inmune al anuncio de Almagro. Un mes después de su advertencia, nada había avanzado todavía en la OEA y el régimen continuaba burlándose de los actores regionales.

La actual presidenta de la CIDH, la abogada jamaicana Margarette May Macaulay visitó Nicaragua el 26 de octubre. El régimen se negó a recibirla. A la solicitud hecha por la secretaria general de la OEA anunciando su visita, ni siquiera respondió. Ese mismo día, a un equipo de tres miembros del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), organización continental que trabaja por los derechos humanos en coordinación con las organizaciones nacionales de cada país y que venía a reunirse con Macaulay, se le impidió la entrada. Fueron expulsados en el mismo aeropuerto, alegando que no hicieron la solicitud de entrada con suficiente antelación.

¿No cuenta aún Almagro con los 23 votos necesarios para invocar el artículo 20 de la Carta Democrática? Es probable. Ha habido menos votos desfavorables a Nicaragua en las dos últimas resoluciones lo demuestran: 21 y 19. Ortega parece contar con los pequeños países caribeños beneficiarios del petróleo venezolano en el acuerdo de Petrocaribe, que podrían seguir obstruyendo la mayoría necesaria para que la diplomacia continental aplique el artículo 20.

¿Y la diplomacia europea? En los últimos días de octubre visitó Nicaragua el Ministro Adjunto de Relaciones Exteriores de Alemania, Niels Annen, tratando de sondear posibilidades para restablecer el diálogo nacional. Annen se

reunió con el gobierno y con otros actores nacionales. Como cuarta potencia económica mundial y principal potencia europea, la visita de Alemania le abría camino a una delegación de la Unión Europea que anunciaba su llegada a Nicaragua a fines de noviembre.

“¡NO SON BIENVENIDOS LOS EUROPEOS!”

Apenas una semana después de la visita de Annen a Nicaragua, el 8 de noviembre, en plaza pública, en el acto que celebró en Managua con representantes del Alba -varios, los países caribeños en los que confía-, un Ortega furibundo dio a entender que no dejaría entrar a Nicaragua a los europeos, como ya les había negado la entrada a los representantes del Grupo de Trabajo de doce países de la OEA.

“¡No son bienvenidos a Nicaragua! Se lo hemos comunicado con toda claridad -dijo de los de la OEA-. Mejor se dedicaran a buscar cómo resolver los problemas que tienen en sus propios países, crímenes, muertes, inestabilidad, inseguridad, violación de los derechos humanos... Igual lo hacen los europeos”.

En el mismo tono enardecido, se refirió entonces a la delegación de la UE que espera llegar al país para encontrar salidas a la crisis: “Ahí se ha formado otro agrupamiento de europeos, ¡y a ellos les decimos también que no!... Ya se les olvidó que han sido traficantes de esclavos a gran escala, violadores de los derechos humanos, que han cometido crímenes de lesa humanidad, genocidios completos!... Nosotros no podemos aceptar las amenazas que nos lanzan...” No faltó una alusión a Alemania: “¿Y la Segunda Guerra Mundial dónde nació? ¿Dónde surgió el fascismo, el nazismo, si no fue en Europa? ¿Cómo llegó Hitler al poder si no fue respaldado por los grandes capitales de Alemania y los grandes capitales de los Estados Unidos? ¡Ya se les olvidó que llevaron a Hitler al gobierno!”

Ortega parece inmune a las presiones de los actores políticos internacionales, tal vez porque no pasan de declaraciones de condena. La lentitud en actuar con mayor fuerza y la tibieza políticamente correcta de los pronunciamientos de la burocracia diplomática le da alas para continuar con la política de terrorismo de Estado en la que asienta su poder.

LA SOLUCIÓN: “SANCIONES EN EL LÍMITE”

Después de las imprecaciones de Ortega, fue Josep Borrell, Ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación del gobierno socialista de España, hablando en el Foro Iberoamérica de Madrid, quien lamentó la falta de acciones internacionales eficaces ante la tragedia nicaragüense: “Des-

pués de tan sanguinaria represión -dijo-, la comunidad internacional no ha sido capaz de imponer a la dictadura que hay en Nicaragua una exigencia de rendición de cuentas y una dinámica política que permita superar la situación”.

Borrell atribuyó esa desgana a que la nuestra es la tragedia de un “país pequeño que se esconde detrás de la crisis del país grande, a la que todo el mundo sí presta atención”, en alusión a Venezuela.

“Si descartamos las soluciones que usen la fuerza desde fuera o desde dentro, cosa que parece improbable, y si descartamos una evolución del régimen, lo que tampoco parece probable, la única solución -dijo- sería que la comunidad internacional impusiera una presión, unas sanciones en el límite. Pero desgraciadamente eso tampoco está en el futuro inmediato en la pantalla del radar”.

ESTADOS UNIDOS ALERTA A LA BANCA INTERNACIONAL

Las sanciones de Estados Unidos se proponen ir al “límite” y podrían ser las que, por venir de quién vienen, podrían forzar a Ortega y a Murillo, al anillo corrupto que se ha beneficiado con ellos, también al Ejército, a negociar una salida a la crisis.

De hecho, ante sus seguidores, en una de las continuas marchas que se organizó en septiembre para reforzar el culto que le rinden, Ortega pidió a los legisladores estadounidenses “reflexionar” antes de aprobarlas.

A las sanciones más anunciadas (Nica Act y Magnitsky) se adelantó el 4 de octubre la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

Lanzó una “alerta” dirigida a las instituciones financieras de Estados Unidos sobre el “riesgo creciente” de que fondos procedentes de “figuras políticas de alto rango” de Nicaragua pudieran ingresar en el sistema financiero estadounidense o transitar por él para llegar a otros países o para lavar dinero, maniobras todas destinadas a evitar las sanciones de Washington al régimen de Ortega y Murillo.

Los fondos que deben ser vigilados por esta alerta estadounidense saldrían de Nicaragua del Banco Corporativo (Bancorp), propiedad de la familia gobernante.

Este banco vio incrementados de forma acelerada sus activos a fines de 2017, cuando Estados Unidos había advertido a la banca nicaragüense que si tenían relaciones financieras con negocios del consorcio Albanisa podrían ser sancionados. Todo el dinero de los negocios del consorcio Albanisa que el régimen había venido depositando en tres bancos nacionales, éstos lo trasladaron a las arcas del Bancorp, que ahora buscaría cómo trasladarlos al exterior.

“ES SÓLO EL COMIENZO”

En sus palabras de despedida de Nicaragua la embajadora Dogu se refirió también a la alerta del FinCEN: “Hay dos elementos notables en esta advertencia -dijo-. Primero, es una campaña continua (la banca estadounidense debe presentar continuos informes de “actividad sospechosa”). Y segundo, se enfoca en todas las personas involucradas en la corrupción, no sólo en los funcionarios públicos. Cualquier persona que se vea comprometida en la corrupción o se beneficie de ella puede ser blanco de esta campaña. Y esto es sólo el comienzo, no es el final”.

“Mientras la dictadura no disponga de otro Swift, de un canal alternativo para sus negocios comerciales con el mundo, un sistema independiente de transacciones financieras fuera del alcance del dólar y de los bancos americanos, las dos leyes con que Washington los sancionará les resultarán catastróficas”, dice el analista Óscar René Vargas.

¿A dónde irá a parar la fortuna de la dictadura? La alerta trasciende a toda la banca internacional que tenga correspondencia con la banca estadounidense. ¿A Rusia, a China...? ¿A los pequeños países del Caribe aliados de Ortega por agradecimiento al petróleo venezolano...? Sacarlos del área dólar y del área euro es la urgencia.

¿CÓMO APLICARÁ WASHINGTON**LA LEY S.3233?**

Trás ese “comienzo” lo que sigue es la aprobación definitiva en el Congreso de dos leyes fusionadas en una, la Ley S.3233.

El Senado de Estados Unidos juntó en una única legislación la Nica Act y la ley que sanciona personalmente a familiares, funcionarios y otras personas vinculadas a Ortega y a su régimen, también conocida como la Magnitsky Nica. En la sección 2, la Ley S.3233 presiona al régimen de Ortega para que acepte elecciones adelantadas surgidas de “negociaciones creíbles”, mediadas por la iglesia católica y desarrolladas entre el gobierno y “representantes de la sociedad civil, el movimiento estudiantil, el sector privado y la oposición política”.

Aprobada la ley, ¿la mantendrá Washington bajo la modalidad de una espada amenazante sobre la cabeza de Ortega para ir valorando cómo reacciona a la presión y a la ruta de salida que se le ofrece, prolongando así el estancamiento de la crisis? ¿O comenzará a aplicar las sanciones personalizadas?

¿Influirá en las modalidades de su aplicación el nuevo balance de poder en el Congreso de Estados Unidos entre demócratas y republicanos, después de las elecciones de medio mandato del 6 de noviembre?

“LA TROIKA DE LA TIRANÍA”

La posición del Ejecutivo estadounidense sobre Nicaragua se mostró en un discurso retórico y estridente que pronunció en Miami el 1 de noviembre el asesor presidencial para la seguridad nacional, John Bolton, en vísperas de las elecciones de medio término en Estados Unidos. Bolton fue a Miami buscando los votos de la numerosa comunidad de venezolanos, cubanos y nicaragüenses que puebla la Florida.

Bolton se refirió a Nicaragua como miembro de “el triángulo del terror” que integran Cuba, Venezuela y nuestro país. Llamó a sus gobernantes “dictadores y déspotas”, dijo que pertenecían a “la troika de la tiranía” y se mofó de ellos comparándolos con “los tres chiflados, figuras lastimosas, payasos, más parecidos a Larry, Curly y Moe”. Los tres gobiernos, dijo también, son “la causa de un inmenso sufrimiento humano, de la enorme inestabilidad regional y la génesis de una sórdida cuna del comunismo en el hemisferio occidental”.

En esa troika el eslabón más débil para cualquier acción de Estados Unidos es, sin duda, la pequeña Nicaragua. Cuba lleva seis décadas desafiando con éxito la presión del Norte y tiene una institucionalidad más sólida y una población sometida al sistema durante cuatro generaciones. Venezuela tiene recursos de los que Nicaragua carece. Sin embargo, por su pequeñez y menor importancia precisamente, Nicaragua puede “escondarse” tras la crisis humanitaria venezolana, sin parangón con la que ya vivimos aquí.

Venezuela tiene una importancia económica y geoestratégica muy superior, tiene reservas inmensas de petróleo y minerales, pero no tiene, como Nicaragua, un sector privado activo, que aun con la crisis económica que ya padecemos, seguirá trabajando para sobrevivir, y sobreviviendo paliará los efectos más nocivos de la crisis. A eso apuesta Ortega. ¿No apostó durante una década, antes de abril, a la insignificancia de Nicaragua para esconder sus descarados abusos de poder? ¿No seguirá apostando ahora a nuestra pequeñez?

LAS CIFRAS DE LA TRAGEDIA

Termina el año con el saldo de 320 asesinados, 3 mil heridos, un número impreciso de desaparecidos, y más de 40 mil exiliados forzosos en Costa Rica.

Termina 2018 con una política de represión que no ha cesado un solo día y que después de las matanzas de abril, mayo, junio y julio, la ejerce ahora el régimen valiéndose del sistema de justicia.

La Policía, asedia e intimidada en las calles, captura y secuestra en las calles o en los hogares y mete a los calabozos a quienes atrapa en sus cacerías. No ha habido práctica-

mente un solo día sin personas apresadas. Hasta mediados de noviembre habían sido capturadas de forma ilegal más de 4 mil personas, de las que 536 permanecían detenidas. De ellas, 46 eran mujeres y 4 personas trans.

CONDENADOS EN JUICIOS VICIADOS

En los calabozos de las estaciones policiales de todo el país o en las mazmorras de El Chipote en Managua otros policías investigan, amenazan, interrogan y torturan psicológicamente, también físicamente, a muchos de los detenidos. Hasta mediados de noviembre se estimaba que estaban confinadas en El Chipote 189 personas.

Un buen número de los capturados pasa de El Chipote a la Cárcel Modelo de Tipitapa si son hombres y a la Cárcel La Esperanza si son mujeres. Permanecen en ambas cárceles y en otros centros penitenciarios de todo el país 335 personas. Enfrentan la pérdida del derecho a la libertad en condiciones precarias. De hecho, pierden todos los demás derechos: a la salud, a la comunicación con sus familiares, a salir al sol... Quedan entonces en manos de los funcionarios del sistema penitenciario, que vigilan, controlan, amenazan, castigan e imponen restricciones.

Un día u otro los capturados y encarcelados son conducidos, generalmente en grupos, a los tribunales. Fiscales los acusan prácticamente siempre de una ristra de delitos. Los más frecuentes: terrorismo, crimen organizado, portación ilegal de armas y obstrucción de servicios públicos (significa que hicieron tranques y barricadas o los apoyaron). En algunos casos, se les acusa también de asesinatos y de daños a la propiedad pública (quemar de edificios). Las “pruebas” que presentan los fiscales son débiles, contradictorias o falsas. Hasta mediados de noviembre habían sido judicializados 431 personas.

Los testigos en el juicio son policías sujetos afines al régimen. Los juicios se realizan a puertas cerradas, sin presencia de los familiares ni de los medios. Con frecuencia se anuncian inesperadamente o se reprograman, manteniendo a las familias en una zozobra desgastante.

A pesar de toda la cadena de ilegalidades, irregularidades e inconsistencias, los jueces ponen punto final al proceso represivo emitiendo sentencia. Prácticamente todos los que llegan al tribunal son condenados. Hasta mediados de noviembre 61 habían sido condenados a penas que van de 5 a 13 años. 19 personas habían sido absueltas, pero 16 continuaban detenidas de manera ilegal.

Todos estos datos son del detallado registro que lleva el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH) desde el día 18 abril hasta el 18 de noviembre.

¿LA LEY DE RECONCILIACIÓN ENCIERRA UNA AMNISTÍA?

Una represión tan brutal, basada en tantas arbitrariedades, ha abierto desde hace meses la pregunta sobre si lo que la dictadura pretende con esta orgía de encarcelamientos es preparar una amnistía general con la que garantizarse impunidad para los crímenes que ha cometido.

La amnistía ha sido una constante en la historia de Nicaragua. Crisis tras crisis, una y otra vez, hemos pasado la página proponiendo el olvido, la amnesia, dejando así profundas heridas sin sanar.

La “política de reconciliación” lanzada por Rosario Murillo a inicios de noviembre, que anunció se convertirá en ley, ¿anuncia una nueva amnistía? ¿Es la amnistía la moneda de cambio de Ortega y Murillo en una eventual negociación? ¿No resulta aberrante, como propone la política definida por Murillo, que sea la Policía, responsable de tantos crímenes, una de las instituciones ejecutoras de la ley de reconciliación?

NICARAGUA NECESITA UN PROYECTO DE JUSTICIA TRANSICIONAL

Ha habido 53 amnistías en la historia de Nicaragua, pero nunca ha habido una política de justicia transicional. La tendencia histórica ha sido a olvidar, a pasar la página, a no sanar las heridas que se abrieron, esperando que el tiempo las cierre... pero no las cierra.

Hace cuatro años, cuando la insurrección de abril y el terrorismo de Estado con que Ortega y Murillo respondieron aún no se presentían, Vilma Núñez, presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), reflexionó ampliamente en *Envío* sobre la necesidad que ha tenido Nicaragua de un proceso de justicia transicional y de una Comisión de la Verdad para implementarlo.
<http://www.envio.org.ni/articulo/4857>

“La justicia transicional es un concepto relativamente nuevo en la doctrina de los derechos humanos -decía la jurista-. Se refiere a la justicia que debe propiciarse en países que han vivido procesos de transición de una dictadura a una democracia o de un conflicto armado a la paz. Por su historia, Nicaragua es un país que aplica claramente para experimentar alguna de las estrategias judiciales y no judiciales que requiere la justicia en esas difíciles transiciones, y que se resumen básicamente en tres aspectos: conocer la verdad, hacer justicia y reparar a las víctimas”.

Eso: conocer la verdad de lo que pasó, hacer toda la justicia posible y reparar a miles de víctimas sería lo que la sociedad nicaragüense necesitará con urgencia cuando todo esto pase.

**¿EL TIEMPO
CORRE A FAVOR DE ORTEGA?**

El pueblo de Nicaragua ya ha derrotado estratégicamente la dictadura de Ortega y Murillo. Sin embargo, durante todo el año 2018 el enfrentamiento ha sido tan desigual que el pueblo de Nicaragua no ha alcanzado, a pesar de tantos esfuerzos, capacidad suficiente para forzar una salida a la crisis que permita iniciar el camino hacia una transición en la que todos hallemos paz, justicia y democracia.

El costo de que el estancamiento en la correlación de fuerzas con el que finalizamos 2018 se prolongue por mucho tiempo se pagará con sangre, porque en su arsenal de medidas la dictadura ya no tiene más que armas y sólo cuenta con más represión.

De no cambiar las cosas, de no aparecer en el tan cerrado escenario con que concluye 2018 un “cisne de plumas negras”, un hecho imprevisto y de gran impacto, el tiempo corre a favor de Ortega y Murillo y de su propósito de seguir desgobernando Nicaragua hasta 2021, sin que tengamos tampoco claro qué elecciones “libres y competitivas” podría haber para esas fechas, después de tres años de un Estado policíaco firmemente instalado y en una economía en ruinas.

¿Qué libertad ejerceríamos después de tres años más de Ortega y de Murillo, en una sociedad que tendría agotada su capacidad de resistencia por temor, por cansancio y hasta por hambre?

EL MAGMA DEL VOLCÁN ESTÁ INTACTO

La ilegalización de las marchas ciudadanas por la Policía a partir de mediados de octubre no ha logrado modificar el repudio al régimen. La indignación por la matanza y la determinación de lograr un cambio están intactas.

Esos sentimientos son el magma que acumula el volcán que se activó en abril y que volverá a desbordarse. “La protesta está sembrada en el corazón del pueblo, no va a suprimirla la represión”, dice Henry Ruiz, uno de los nueve comandantes de la dirección del FSLN en los años 80.

Sin embargo, el realismo lleva a reconocer que el terrorismo de Estado ha retrasado la erupción. El terror desgasta. Los importantes liderazgos territoriales que han sido encarcelados y exiliados forzosamente son otro elemento de desgaste.

Y ése es el otro escenario, el que habría que construir. Los azul y blanco, conscientes de que son mayoría social en todo el país, deberían entender que ha llegado la hora de que la Unidad Nacional Azul y Blanco demuestre que es “unidad” y que es “nacional” y logre una coordinación plural con rostros visibles capaces de retar a la dictadura con audacia. Es urgente poder imaginar la ruta de la transición, tanto nacional como internacionalmente.

Necesitamos propuestas que nos muestren a todos, y que demuestren a quienes son actores solidarios en el extranjero, que hay personas concretas para gobernar un país estable, para iniciar un proceso de justicia transicional, para lograr un proceso electoral creíble.

Ver esos rostros y conocer un programa de futuro, concreto y no retórico, generará confianza y movilizará el magma. Acelerará la salida de la crisis y el fin de la dictadura.

TODO TIENE SU TIEMPO

“Todo tiene su tiempo”, dice sabiamente el libro bíblico del Eclesiastés. “Hay tiempo para nacer y tiempo para morir. Tiempo para reír y tiempo para llorar. Hay tiempo para tirar piedras y tiempo para recogerlas...”

Hubo tiempo, más de 200 días, para que millones lucháramos como autoconvocados. Parece llegado ya el tiempo de que unos pocos asuman la representación de esos millones.

Amiga y amigo de envío:

La crisis económica nos afecta a todos. También a envío. Cada suscripción, cada aporte, es para nosotros muy importante, importantísimo. Cada suscripción nos permite seguir. Es por eso que necesitamos tu colaboración.

SÍ, DESEO COLABORAR CON *envío*

DATOS PERSONALES

Deseo colaborar periódicamente: Importe U\$ 50 U\$ 100 U\$ 150 MÁS U\$ _____

Periodicidad: Mensual Trimestral Semestral Anual

Forma de pago:

Efectivo: Enviar en un sobre sellado a las oficinas de Envío

Tarjeta de crédito: Visa: American Express: Diners Club International: Master Card:

No. tarjeta: _____ / _____ / _____ / _____ Vence: mes _____ año _____

Nombre del dueño de la tarjeta: _____

Firma: _____ Fecha: _____

Deseo colaborar con un único aporte de U\$ _____

RECOMIÉNDANOS

Envío, con más de 37 años de existencia, ha llegado a Nicaragua, a Centroamérica y a distintas partes del mundo. Una forma de continuar es darnos a conocer a más gente. **Recomiéndanos a un amigo**, a un conocido, a una institución, a alguien que creas le gustaría conocernos. Envíanos sus datos y le haremos llegar un ejemplar de nuestra revista, donde le indicaremos que nos lo has recomendado.

Datos de quien deseo reciba la revista envío:

Nombre y Apellido: _____

Dirección: _____

País: _____ Ciudad: _____

Teléfono: _____ Email: _____

Mis datos personales:

Nombre y Apellido: _____

Email: _____

Revista envío
Teléfono: 2278-2557
Apartado A-194, Managua, Nicaragua